FONSI LOAIZA

PELIGRO DE MUERTE

Los gobiernos de derechas y las víctimas de su gestión

A FONDO

akal

FONSI LOAIZA

PELIGRO DE MUERTE

Los gobiernos de derechas y las víctimas de su gestión

A FONDO

akal

akal / a fondo

Director de la colección

Pascual Serrano

Diseño cubierta: RAG

Queda prohibida la reproducción, plagio, distribución, comunicación pública o cualquier otro modo de explotación –total o parcial, directa o indirecta– de esta obra sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o sus cesionarios. La infracción de los derechos acreditados de los titulares o cesionarios puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (artículos 270 y siguientes del Código Penal).

Ninguna parte de este libro puede utilizarse o reproducirse de cualquier manera posible con el fin de entrenar o documentar tecnologías o sistemas de inteligencia artificial.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

© Fonsi Loaiza, 2026

© Ediciones Akal, S. A., 2026

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

atencion.cliente@akal.com

www.akal.com

facebook.com/EdicionesAkal

@ediciones_akal

@ediciones_akal

@AkalEditor

ISBN: 978-84-460-5873-1

Fonsi Loaiza

Peligro de muerte

Los gobiernos de derechas y las víctimas de su gestión

akal
ARGENTINA / ESPAÑA / MÉXICO

Se dice que hacer política comporta un servicio al ciudadano..., pero también puede provocar una tragedia. Cuando nuestras vidas quedan en manos irresponsables, en gobiernos y dirigentes que priman el negocio por encima de la vida, el resultado acaba por ser mortal.

Fonsi Loaiza, que en tiempos de bulos y silencio impuesto ha decidido señalar responsables y hablar sin miedo, hace un ejercicio periodístico para exponer sin rodeos y con datos las prácticas negligentes que llevan años instauradas y que todo indica que se van a recrudecer. Asimismo, estas páginas son un altavoz para los familiares y asociaciones de víctimas de las políticas de la derecha, pero también un aviso de lo que vendrá si no reaccionamos. Tramas

de corrupción, privatizaciones, dejadez; la gestión de Mazón en la emergencia de la dana, de Moreno Bonilla con el fallo en el cribado del cáncer de mama o los protocolos de Ayuso en las residencias durante la pandemia son solo algunas muestras recientes que deberían encender todas las alarmas. Porque, como escribió Bertolt Brecht, «hay muchas maneras de matar».

«¡Prepárense! Las vidas de las personas es lo que menos les importa».

Fonsi Loaiza (San Fernando, Cádiz, 1990) es un periodista combativo que se ha formado en las universidades públicas de Sevilla (licenciado en Comunicación), en Andalucía, y Pompeu Fabra (másteres en Comunicación Social y en Periodismo Deportivo) y Autònoma, en Cataluña (doctorado en Medios de Comunicación y Cultura). Como autor ha escrito la biografía no autorizada Florentino Pérez, el poder del palco (2022); Qatar: sangre, dinero y fútbol (2022); Machismo, mafia y corrupción en el fútbol español (2023); y Oligarcas. Los dueños de España (2024), publicados en Akal en esta misma colección, así como el ensayo contra el machismo Siempre saltando vallas. Deporte femenino y medios de comunicación (Piedra Papel Libros, 2019). En su actividad en redes sociales Fonsi Loaiza ha logrado propagar un mensaje incómodo contra el establishment y cuenta con más de 270.000 seguidores en X.

A la memoria de las víctimas de las negligencias del PP y a sus familiares.

A mis padres, mi Macondo, que me enseñaron a no callarme ante las injusticias.

PRESENTACIÓN

Uno de los mantras de la derecha es el de que ellos poseen mayor eficacia en la gestión de los recursos, frente a una izquierda derrochadora. Sin embargo, vamos conociendo muchos libros y trabajos que muestran la corrupción e ineficacia del Partido Popular. Pero ahora vamos a ir más allá, porque a todo lo anterior se suman la falta de sensibilidad y el desprecio a la vida de la gente sencilla. Por eso vamos a hablar de negligencia y corrupción.

En los últimos años se han producido en España diferentes tragedias en las que hemos observado un elemento común: detrás de ellas se encontraba, en su origen o en sus consecuencias, una importante responsabilidad de algunos gobernantes del Partido Popular. Se podría alegar que no se trata de una responsabilidad ideológica, sino de personas concretas, pero, si observamos, todos son de derechas y toda la dirección del partido los intentó proteger y descargarles de culpabilidad.

Este nuevo libro de la colección A Fondo de Akal se ha tenido que titular así, Peligro de muerte. Los gobiernos de derechas y las víctimas de su gestión, porque no se trata de pequeños errores o corrupción menor, se trata de muertes. Lo ha escrito el periodista Fonsi Loaiza, un autor ya de la casa, que ha abordado en otros libros de nuestra colección muchos temas polémicos y que siempre ha tenido la valentía de señalar los nombres que estaban detrás.

Los casos que repasa Loaiza nos suenan a todos por los medios de comunicación, y lo escalofriante es ver lo que los une: la indiferencia, la incompetencia, la inmoralidad y la insensibilidad de unos responsables políticos de la derecha.

Hay tres tragedias fundamentales: los protocolos sanitarios en la Comunidad de Madrid bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que provocaron la muerte de 7.291 ancianos en residencias durante la epidemia del covid, a quienes se impidió recibir asistencia médica;

las 230 muertes por la dana en la Comunidad Valenciana mientras el presidente autonómico, Carlos Mazón, estaba comiendo en el reservado de un restaurante sin atender los requerimientos de las emergencias ni poner en marcha los sistemas de alerta ciudadana; por último, en Andalucía, el archivo de miles de informes de cribados de mamografías para prevenir el cáncer de mama, que se guardaron en un cajón sin avisar a las mujeres que dieron resultado positivo o sospechoso en esa prueba.

En ellos, además de la negligencia de los gobernantes, hemos encontrado el desprecio a los familiares de las víctimas, no recibiéndolos en el caso de Valencia o llamándolos «frustrados» y «activistas» en el de Madrid. Todos estos sucesos han terminado en los juzgados y ahí se encuentran todavía en diferentes grados de desarrollo y de imputación de cargos políticos, todos del Partido Popular.

Pero nuestro autor rasca y localiza muchos más casos que pueden pasar desapercibidos por no haber tenido tanto impacto mediático y social. Los muertos en los incendios en Castilla y León, en el incendio en discotecas de Murcia, personas sin hogar en Cádiz, más jóvenes muertos en una pasarela de Santander sin mantenimiento ni atención del ayuntamiento a los avisos de peligro…

Loaiza analiza todos esos casos, y algunos más, para desentrañar la responsabilidad de los dirigentes del Partido Popular en esas muertes y sus conexiones con la corrupción e impunidad sistémica heredada del franquismo. Además, bucea en los orígenes y trayectoria de esos responsables políticos para comprobar su mediocridad y cómo han escalado hasta esos cargos gracias a su servidumbre y sumisión a los que estaban por encima. La misma mediocridad y sumisión de los cargos de los que se rodearon.

Es como si los gobernantes de la derecha se siguieran considerando inmunes a la ley e indiferentes a la vida de los ciudadanos. Basta observar cómo seguían y siguen despreciando a los familiares de las víctimas cuando han salido a la calle y se han dirigido a las instituciones a protestar. Como si la vida de la gente tuviera menos valor para los gobiernos cuando estos son de derechas por el hecho de moverse en un marco mental que no contempla el servicio público o la sensibilidad al dolor ajeno.

Creo que esto se puede observar en el comportamiento de la derecha mundial durante la epidemia del covid. Personajes como Bolsonaro, Trump, Boris Johnson o Isabel Díaz Ayuso llegaron a la conclusión de que no les compensaba paralizar la economía para evitar la muerte de miles de personas.

Creo que Ayuso aplicó un álgebra espeluznante: si permito que funcione la hostelería, cientos de millones celebrarán poder salir a tomar cañas durante la pandemia; en cambio, solo las familias de diez mil o veinte mil muertos podrán asociar mi decisión con la muerte de su ser querido. Conclusión: compensa electoralmente.

En Peligro de muerte, Fonsi Loaiza vuelve a investigar con la valentía de quien no teme pronunciar nombres, los de cargos políticos, empresas, responsables…, de todos los que, de alguna manera, han colaborado, por acción u omisión, en los atropellos que aquí se detallan. Además, desentraña las tramas económicas que se encuentran detrás de algunos casos, sigue la pista del dinero, como les proponía el confidente secreto a los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein en el caso Watergate.

Lo más preocupante de todo es observar cómo los responsables de todas estas muertes continúan disfrutando de impunidad política, porque siguen al frente de los gobiernos –esperemos que no mantengan dicha impunidad en los juzgados–.

Para que esto pueda cambiar, hacen falta dos cosas: que los ciudadanos conozcan la verdad y que no permitan dejar sus vidas en manos irresponsables y negligentes.

Un día le preguntaron a Julio Anguita si no sería acertado impedir que los gobernantes investigados por delitos y corrupción se pudieran presentar a las elecciones. Respondió que esa no era la solución, la verdadera salida es que la gente no los volviera a votar.

Este libro ayudará a la primera cosa, a conocer la verdad. La segunda, no permitir que la responsabilidad de nuestras vidas esté en sus manos, depende de lo que cada uno decida en las elecciones.

Pascual Serrano

PREÁMBULO

Por favorecer los bastardos intereses de los poderosos no vacilaron en sacrificar a los humildes, abusando de la ignorancia y de la credulidad de estos.

Fermín Salvochea, alcalde libertario y presidente del Cantón de Cádiz en 1873

Vosotros, los fachas, habéis convertido España en un país de mangantes. ¡Pobre España, con eñe de coño y de coña!

Alfonso Grosso en Con flores a María, contra el Rocío, al que llamaba «la romería de la muerte»

La gestión de la derecha en la sanidad, en las residencias de mayores, en los incendios, en la dana o en el fallo de los cribados del cáncer de mama ha costado miles de vidas en los últimos tiempos en nuestro país. Matan las privatizaciones, los recortes, la incompetencia supina, el choriceo a mansalva y toda la estrategia de comunicación de bulos y negación de la propia ineptitud del Partido Popular.

A excepción de Asturias, Cataluña, Navarra y el País Vasco, el partido liderado por Núñez Feijóo gobierna en casi todas las comunidades autónomas, donde están transferidas las competencias de educación, sanidad, servicios sociales o vivienda. El PP manda en los gobiernos de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia,

Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y en Canarias en un pacto con Coalición Canaria. De los 49 millones de habitantes de España, las comunidades bajo los gobiernos autonómicos del PP suman una población total de más de 35 millones de habitantes.

La perversa y negligente política de inutilidad y corrupción impulsada por el PP afecta a millones de personas. Consiste en precarizar los servicios públicos con premeditación y alevosía para favorecer de manera sistemática a los grandes conglomerados empresariales, que merodean en torno a la sanidad, las residencias de mayores o la lucha contra los incendios.

Detrás de los gobiernos del PP se esconde toda una gigantesca telaraña de intereses de negocios, puertas giratorias y corruptelas a gran escala con familiares implicados y tramas como la caja B –con un tal «M. Rajoy»– o el tráfico de influencias de Montoro, mientras a su vez recortaban en sanidad dejando víctimas como las de la hepatitis C. En este entramado aparecen Quirón, Asisa, Bidafarma, Ribera Salud, Eulen o Clece de Florentino Pérez, que se enriquecen con el deterioro de la sanidad pública o del cuidado de nuestros mayores. Estas multinacionales tienen como único objetivo forrarse ganando el máximo dinero en el mínimo tiempo posible. El PP roba a los ciudadanos el derecho a la salud para dar beneficios a sus colegas y familiares de empresas privadas sanitarias.

Las víctimas a causa de esta negligencia son innumerables. De los 7.291 fallecidos en las residencias de mayores en Madrid con los protocolos de la vergüenza de Ayuso, a las 230 muertes en la dana con Mazón, pasando por las cinco víctimas mortales en los incendios en Castilla y León con el presidente Mañueco, o los miles de mujeres andaluzas afectadas por el escándalo del fallo en el cribado del cáncer de mama en la Junta de Andalucía de Juanma Moreno Bonilla.

En este texto intentamos desentrañar la responsabilidad de los dirigentes en estas muertes y las conexiones del PP con la gran corrupción sistémica heredada del franquismo. En diversos pasajes de este libro ahondamos en el pasado franquista de los fundadores

del PP, los vínculos putrefactos de un aprendiz de criminal de guerra como Aznar, la trama de Ayuso con Quirón, el destrozo de la sanidad pública por parte de Juanma Moreno o la protección y privilegios de los que sigue gozando alguien como Mazón sin ser imputado.

En las últimas elecciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León, y Andalucía, celebradas consecutivamente desde el 21 de diciembre de 2025 hasta el 17 de mayo de 2026, el PP ha sido el partido más votado. La derecha, con Mañueco, Azcón, María Guardiola y Juanma Moreno, ha superado holgadamente el 50% de los votos si se suma el apoyo de la ultraderecha de Vox. Son los gobiernos reaccionarios e incompetentes de la derecha salvaje que viene.

¡Prepárense! Las vidas de las personas es lo que menos les importa a estos gobiernos que han ninguneado y despreciado a las víctimas de la dictadura franquista, de la Guerra de Irak, del Prestige, del 11-M, del Metro de Valencia, de Angrois, de la hepatitis C, del Yak-42, del Madrid Arena, de las residencias de mayores, de la dana, del fallo del cribado del cáncer de mama, de los incendios…

Este modelo de poder y encubrimiento institucional del PP sacrifica la verdad en aras de la impunidad de sus gobernantes. Existe un mismo patrón para todos los casos, el de la mentira y el maltrato a aquellas víctimas que buscan que se asuman responsabilidades. Para los gobiernos del PP no importa ni el respeto a las víctimas ni la dignidad de sus familiares, que sufren un dolor adicional por sus ataques.

En este libro reflexionamos sobre la gestión del PP e incluimos las voces de las asociaciones de víctimas que le han hecho frente y que han puesto en jaque a estos gobiernos con su lucha colectiva y sus formas de protesta. La Amama (mujeres afectadas por el cáncer de mama en Andalucía), Víctimas Mortales Dana 29-O y 7.291: Verdad y Justicia, donde mujeres portavoces como Maite Rodríguez, Rosa Álvarez y Ángela Claverol han representado la dignidad frente a la inhumanidad de los gobiernos de Juanma Moreno, Ayuso y Mazón.

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES. LOS HEREDEROS DE FRANCO Y LA CORRUPCIÓN Y SUS VÍCTIMAS

No vamos a renunciar a la memoria de Franco.

Reunión de clausura de Alianza Popular en 1977

Seremos fascistas, pero sabemos gobernar.

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid

No voy a condenar algo en lo que participó mi padre. Lo primero que derogaría si ahora volviera a ser presidente sería la Ley de Memoria Democrática, que es el mayor atentado contra la convivencia pacífica entre españoles que se ha hecho estos últimos años.

José María Aznar, expresidente del Gobierno

La financiación de los nuevos fármacos de hepatitis C ha sido protagonista de la desviación del déficit público.

Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda

Alianza Popular. Los Siete Magníficos de la dictadura y el carnicero de Málaga

Para entender el presente hace falta echar la vista atrás y mirar por el retrovisor de la historia. Los actuales dirigentes del PP son herederos de un partido que fue creado por ministros de una dictadura sanguinaria que perpetró unos crímenes que nunca fueron juzgados. Hoy en día existen 5.848 fosas comunes del franquismo y todos los españoles viven a menos de 50 kilómetros de alguna de ellas.

El anterior líder del partido, Pablo Casado, despreció a las familias de las víctimas y minimizó su sufrimiento: «No puede estar de moda ser de izquierdas, pero ¡si son unos carcas! Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica», llegó a decir en un mitin. Esta forma de expresarse sobre las víctimas del franquismo no es casual, es la misma que han seguido empleando con las víctimas de sus gestiones inhumanas en democracia.

Alianza Popular, germen y matriz del PP, fue fundada como federación de partidos en 1976 por Manuel Fraga Iribarne (Reforma Democrática) y otros políticos y ministros provenientes del franquismo: Federico Silva Muñoz (Reforma Social), Laureano López Rodó (Acción Regional), Enrique Thomas de Carranza (ANEPA), Gonzalo Fernández de la Mora (Unión Nacional Española), Cruz Martínez Esteruelas (Unión del Pueblo Español) y Licinio de la Fuente (Reforma Social), a los que se denominó los Siete Magníficos como líderes herederos y ministros del franquismo. En el primer congreso como partido único en 1977, los tres mil congresistas gritaron «¡Franco, Franco!».

No apoyaron la Ley de Amnistía y se abstuvieron. Se opusieron a la legalización del PCE: «Me parece un golpe de Estado, un grave error político histórico revestido de las más graves trasgresiones y farsas jurídicas. Legalizan el partido más antidemocrático y que se presenta con las mismas figuras de 1936. En todo momento había quedado clara la exclusión de los partidos comunistas, separatistas y terroristas. Eso sí, a los brindis con champán se sumará hoy un alto consumo de vodka en la Pascua rusa», expuso Fraga.

Ocho de sus 16 parlamentarios no votaron a favor de la Constitución de 1978: Gonzalo Fernández de la Mora, Alberto Jarabo Payá, José Martínez Emperador, Pedro de Mendizábal y Uriarte y Federico Silva Muñoz, que votaron en contra, y los que se abstuvieron, Licinio de la Fuente, Modesto Piñeiro y Álvaro Lapuerta, que acabaría siendo el tesorero del PP de 1993 a 2008, participando en la contabilidad en negro del partido y cuya implicación judicial fue archivada tras poder acreditar una demencia por parte de peritos.

El congreso constituyente de Alianza Popular fue presidido por José María Ruiz-Gallardón. Gregorio Peces-Barba, expresidente del Congreso de los Diputados, contó que un día le recriminó a Ruiz-Gallardón lo conservador que era, y este le contestó: «¿Conservador yo?, tienes que conocer a mi hijo Alberto. Ese sí que es de derechas»[1]. Su hijo era Alberto Ruiz-Gallardón, que acabaría siendo más tarde en el PP alcalde de Madrid, presidente de la Comunidad y ministro de Justicia, cargo del que tuvo que dimitir en 2014 ante las protestas feministas y el rechazo social por su ley retrógrada del aborto, la cual acababa con la posibilidad de decidir libremente las primeras 14 semanas. Un hecho que denota que los hijos de los padres fundadores que progresaron en el partido hasta llegar a las altas instancias del Estado se sentían incluso más de derechas que sus progenitores, a pesar de que en la prensa vendieran que representaban a un partido europeo, moderado y centrista.

En el inicio de la democracia no fingieron. El candidato que encabezó la lista de Madrid en las primeras elecciones al Senado por Alianza Popular fue Carlos Arias Navarro, presidente del Gobierno franquista tras la muerte al saltar por los aires de Carrero

Blanco y que anunció el 20 de noviembre entre sollozos la muerte del dictador, haciendo famosa la frase: «Españoles, Franco ha muerto». Carlos Arias Navarro, designado por Franco y Juan Carlos I como presidente de Gobierno, había estado involucrado en la cruenta represión después de la conquista fascista de Málaga y la masacre en La Desbandá de civiles que huían por la carretera del cerco de dicha ciudad. En 2022, el alcalde Almeida devolvió al callejero madrileño la calle en honor al crucero Baleares, que realizó el bombardeo a los malagueños, asesinando a unos 12 mil civiles, cinco mil de ellos niños, en uno de los mayores crímenes perpetrados por el fascismo en Europa.

Arias Navarro, que fue nombrado fiscal en 1939 en Málaga, firmó hasta cuatro mil sentencias de muerte. El periodista Cuco Cerecedo publicó un artículo satírico en Diario 16 sobre los crímenes de Carlos Arias en la dictadura, titulado «Carnicerito de Málaga» y con el candidato de Alianza Popular vestido de torero, por el que fue denunciado por injurias junto con Miguel Ángel Aguilar, director del medio de comunicación. Cerecedo murió al poco tiempo y dejó en suspenso el caso. Asimismo, Cerecedo publicó un serial de artículos titulado Y Fraga cogió su fusil; la edición del diario fue secuestrada a instancias de una demanda interpuesta por Fraga, como también ocurrió cuando el periodista Gregorio Morán, de Diario 16, fue detenido por escribir sobre las atrocidades del sádico comisario Conesa.

La impunidad de Fraga. Crímenes del franquismo y de la Transición y el Prestige

Los medios de comunicación desempeñaron un papel muy importante en el imaginario simbólico como dispositivos que ejercieron la hegemonía discursiva e ideológica tras la muerte del dictador Franco. Se regían por la Ley de Prensa de 1966 del ministro Fraga, en una época en que continuaron los mismos jueces,

policías, empresarios, militares y políticos de la dictadura franquista. El País le acabó ganando la partida mediática en el progresismo a Diario 16 al moverse con más habilidad en la dictadura y conseguir antes la autorización para publicar. Manuel Fraga, ministro de Gobernación con Arias Navarro, autorizó la salida del primer ejemplar de El País.

A pesar de la supuesta ideología de izquierdas de El País, el propio Manuel Fraga se encontraba con voz en la junta del accionariado del grupo Prisa. Su máximo accionista, Jesús Polanco, había fundado la Editorial Santillana en 1958, en pleno franquismo, por sus buenas relaciones y trato privilegiado a los altos cargos en los planes educativos de la Educación General Básica. El director designado con el apoyo e influencia de Fraga sería Juan Luis Cebrián, que había sido director de información de Pueblo en la dictadura gracias a ser el hijo de Vicente Cebrián, alto cargo de la prensa franquista como director de Medios de la propaganda del Movimiento Nacional y en Arriba. En el caso del diario ABC tenía un control editorial absoluto con Torcuato Luca de Tena como presidente y afiliado a Alianza Popular.

Manuel Fraga aceptó la Constitución a regañadientes porque no tenía más remedio, y hubo apartados constitucionales que él y los suyos no aceptaron, como por ejemplo el artículo 2. «Alianza Popular rechaza, con toda energía y con plena conciencia de la trascendencia histórica de su gesto, la introducción de la expresión "nacionalidades" en la Constitución. Para nosotros no existe más nación que la española. Y no es el momento de volver sobre el hecho indiscutible de que nación y nacionalidad es lo mismo», aseguró el líder gallego.

Bajo el mandato de Fraga y su responsabilidad en el Ministerio de Gobernación se cometieron las sangrientas matanzas de 1976 en Vitoria y Montejurra, a consecuencia de las cuales murieron siete personas y que demuestran lo falso del mito de una Transición pacífica.

Fraga representaba a la derecha carpetovetónica heredera del franquismo. El fundador de Alianza Popular nunca renunció a toda la barbarie de una dictadura implacable y criminal. Nunca se arrepintió, nunca pidió perdón y resaltó siempre estos asesinatos

impunes como uno de sus muchos servicios prestados al Estado. «Yo lo que deseo es continuar el franquismo. Y mientras esté aquí o actúe en la vida pública, no seré sino un estricto continuador del franquismo en todos sus aspectos, y lucharé contra los enemigos de España que han empezado a asomar su cabeza y son una minoría agazapada y clandestina en el país», había declarado el presidente Arias Navarro 20 días antes del crimen de Vitoria que resultó en cinco obreros asesinados por la policía con disparos de armas de fuego en aquella huelga convertida en masacre (Francisco Aznar Clemente, de diecisiete años; Romualdo Barroso, de diecinueve años; Pedro María Martínez, de veintisiete; Bienvenido Pereda, de treinta, y José Castillo, de treinta y dos). «Que este triste ejemplo sirva de lección a todo el país. La responsabilidad de los que siguen echando a la gente a la calle les corresponde íntegra», sostuvo Fraga cuando acudió a Vitoria.

No hubo ningún tipo de condena judicial. El secretario general del PSOE en 1976, Felipe González, escribió una carta a los familiares de uno de los obreros asesinados. Sin embargo, quedó en papel mojado. En 2020 escribió una misiva de apoyo a Martín Villa cuando este fue procesado en Argentina por delitos de lesa humanidad, el mismo que había estado implicado en los hechos de Vitoria junto con Manuel Fraga, Adolfo Suárez, Alfonso Osorio y Arias Navarro: «Fue impecable y comprometido con el Estado de Derecho», expuso Felipe González, junto a los expresidentes Aznar, Rajoy y Zapatero, en una demostración del nivel de hipocresía y farsa de la Transición.

Martín Villa prendió fuego a los archivos del Movimiento para ocultar crímenes del franquismo. Fue ministro del Interior con la UCD y miembro de la refundación de Alianza Popular en el PP de Aznar. «La Ley de Memoria Democrática es absolutamente horrible y se pone bajo sospecha la reconciliación», expresó Martín Villa en 2024. En el año 2017 recibió la condecoración «por su labor por la democracia como diputado constituyente», de la mano del monarca Felipe VI.

Rodolfo Martín Villa, como diputado del PP de Aznar, presidió las comisiones de Presupuestos, Justicia e Interior en el Congreso. «A cualquier ministro del Interior se le escapa algo. Lo que debe

intentar es que la dosis sea tolerable […]; a mí se me escapó muy poco, pero algo se me escapó», declaró sobre el terrorismo de Estado de los GAL. Martín Villa sigue vivo y ha ostentado las presidencias de las empresas Endesa y Sogecable del grupo Prisa.

Al igual que Martín Villa, Manuel Fraga quedó impune de su participación directa en los crímenes de la dictadura y en la Transición. Se burló de las mujeres de mineros asturianos en huelga rapadas por el franquismo y sugirió que les sentaba bien el pelo corto, ironizado de forma despectiva. «Dos cortes de pelo pueden ser la única apoyatura real para el montaje de toda una leyenda negra o tomadura de pelo», fue su respuesta, siendo ministro de Franco, a la carta de 102 intelectuales que denunciaban el rapado con navaja como forma de escarmiento contra mujeres de mineros en Asturias en 1963[2].

En abril de 1963 fue asesinado el comunista Julián Grimau tras meses de torturas. Había sido policía republicano. Fraga editó un libro lleno de calumnias contra él titulado Grimau, crimen y castigo, con una brutal campaña de desinformación. El dirigente de Alianza Popular se inventó, como ministro de Franco, la propaganda de los XXV Años de Paz en 1964, una forma de humillar a todos los antifranquistas perseguidos. Creó en 1969 el bulo de que el estudiante Enrique Ruano se había suicidado. Esa misma semana la dictadura declaró el estado de excepción. Ruano fue asesinado por la policía y el diario ABC participó en el montaje, publicando un diario manipulado por Fraga para que el asesinato pareciera un suicidio y exculpar a los asesinos.

Tras el nombramiento de Suárez como presidente del Gobierno por parte de Juan Carlos I y Torcuato Fernández Miranda, en las primeras elecciones de junio de 1977, Fraga, que estaba seguro de que su destino sería dirigir España, fracasó, perdió todo el poder con el que había soñado, y su proyecto, que portaba tirantes con la bandera de España y desprendía olor a naftalina, obtuvo el 8,21% de los votos, con 16 diputados, por detrás de la UCD de Adolfo Suárez, con el 34,44% y 165 diputados; el PSOE de Felipe González, con el 29,32% y 118 diputados; y el PCE de Santiago Carrillo, con el 9,33% y 20 diputados.

Su techo electoral fueron los 107 diputados en 1982, con el 26,36%

de los votos, gracias al desmoronamiento de la UCD, pero a gran distancia de los 202 de Felipe González, que estuvo cerca del 50% de los sufragios. De los candidatos de Alianza Popular con Fraga, el único superviviente que queda en primera línea es el ultraderechista Ignacio Gil Lázaro. Lleva 12 legislaturas como diputado y senador viviendo de lo público. Un total de más de 40 años pegado al escaño en Alianza Popular, PP y ahora Vox. Son los mismos que luego dicen que vienen a «renovar» la política y que los migrantes viven de «paguitas».

El fundador de Alianza Popular y del PP no dejaría la política hasta su muerte en 2012. Fraga falleció a los ochenta y nueve años aferrado a un escaño parlamentario en el Senado y a la presidencia de honor del PP. Fue presidente de la Xunta de Galicia de 1990 a 2005, tras el desgaste por el chapapote del Prestige y el movimiento social y plataforma Nunca Máis.

En una tremenda falta de sensibilidad y empatía en mitad del desastre medioambiental, mientras el barco vertía toneladas de fuel pesado en el mar, Manuel Fraga, que había minimizado sistemáticamente la gravedad de la catástrofe, se marchó fuera de Galicia para acudir a una cacería en Aranjuez sin activar ningún protocolo efectivo por parte de la Xunta. Este vertido afectó el sustento material de unos 30 mil gallegos, con pérdidas económicas para mariscadores, pescadores y sus familiares.

En una decisión conjunta por parte del Gobierno de Aznar y la Xunta de Fraga, alejaron el barco del Prestige mar adentro y se partió en dos. Esta terrible catástrofe ecológica generó una oleada de solidaridad hacia el pueblo gallego y de indignación popular con miles y miles de personas manifestándose en las calles. Supuso la gran avanzadilla de las protestas contra el PP antes del «No a la guerra» y la liquidación de Fraga como líder político.

La caja B. De Alianza Popular al Partido Popular, víctimas de la droga y de la corrupción

Detrás de las gestiones negligentes en política siempre aparecen grandes tramas que transcienden y van todavía más allá de la corrupción de robar dinero público. Por ejemplo, las amistades con narcotraficantes. Mientras las madres gallegas luchaban contra la droga y jóvenes gallegos morían por el devastador impacto del narcotráfico, dirigentes del PP mantenían relaciones de amistad con implicados de esta red. En 2006 Fraga cedió el testigo del PP gallego a Alberto Núñez Feijóo, ambos con amistades más que sospechosas con el contrabando y el narcotráfico. Fraga era el amigo personal de Vicente Otero Terito, capo del contrabando de Galicia y con insignia de Alianza Popular, y de uno de los alcaldes del partido, Manuel Díaz, al que llamaban Ligero por lo rápido que se escapaba a Portugal.

En el caso de Feijóo, fue pillado de vacaciones y en yate con el narco Marcial Dorado cuando dirigía como secretario general el Servicio Gallego de Salud (SERGAS), con el PP de Galicia con su mentor Romay Beccaría. En sus vacaciones a Ibiza y Tenerife con Dorado iba acompañado de su entonces pareja sentimental, María José Alende, en ese momento secretaria general de CCOO de Sanidad, y justo cuando se abrió la puerta a la privatización salvaje de la sanidad con la Ley 15/1997. Fue apoyada por CCOO cuando la dirigía Fidalgo, con una crisis interna dentro de la organización sindical.

Carmen Avendaño, presidenta de la Asociación Érguete, fue una de las madres coraje que destapó el problema de la drogadicción entre los jóvenes y luchó contra los capos del narco en Galicia. Avendaño ha asegurado que todos los gallegos conocían al narcotraficante Marcial Dorado y ha exigido en repetidas ocasiones que Feijóo pida perdón a las víctimas por su estrecha relación con él. A la vez que jóvenes gallegos fallecían por sobredosis, la persona que dirigía la sanidad en la Xunta de Galicia mantenía una relación de total complicidad y viajaba en yate con un narco.

Después de la refundación de Alianza Popular a Partido Popular, en 1990 Fraga designó a Aznar como su sucesor y heredero, y este fue elegido en el Congreso Nacional del PP con una frase del político gallego: «No hay tutelas y no hay tutía». Tanto Aznar como Fraga

conocían la financiación irregular del PP y habían aparecido en numerosas alusiones de las conversaciones telefónicas sobre el caso Naseiro, instruido por el juez Luis Manglano, el primer magistrado que se atrevió a investigar la financiación ilegal del PP.

No es que haya tolerancia a la corrupción, es que en el PP da la sensación de que es algo imprescindible para poder ascender. La trama de Naseiro llamaba «patrón de Galicia» a Fraga e implicaba al clan de Valladolid, cuyo líder era José María Aznar –presidente de Castilla y León en aquel momento–, el cual, conocedor de las prácticas corruptas, era mencionado por su satisfacción por el trabajo realizado en la trama para la consecución de recursos.

El juez Luis Manglano aseguró que su investigación sobre el PP le cerró para siempre las puertas para llegar a cualquier puesto en altos tribunales de la judicatura española[3]. Manglano apreció «indicios racionales de criminalidad en la conducta investigada por parte de personas aforadas, Ángel Sanchís, José María Aznar y Manuel Fraga»[4]. El caso acabó en el Tribunal Supremo y fue archivado por «irregularidades procesales».

Las conversaciones telefónicas de Ángel Sanchís, tesorero nacional de Alianza Popular, reflejaban todo un entramado de poder en torno a las adjudicaciones públicas del partido derechista con menciones a Aznar, y donde se hablaba abiertamente de comisiones ilegales, igualmente con Rosendo Naseiro, el siguiente tesorero de Alianza Popular y que continuó en los inicios del refundado PP con Aznar.

En la comisión de investigación sobre la financiación del PP ya en 2019, Pablo Iglesias le preguntó a Aznar sobre estas escuchas del caso Naseiro, y Aznar escurrió el bulto, no contestó a esa pregunta y le respondió hablando de supuestos pagos a Podemos de Venezuela e Irán, que la justicia acabó demostrando que resultaron ser falsos y un montaje mediático-policial de las cloacas del Estado del PP.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz lideró la Policía Patriótica en las cloacas del Estado con el espionaje ilegal para tapar la corrupción del PP. Urdió la guerra sucia con fondos reservados contra el independentismo catalán y Podemos, y está siendo juzgado en la causa por la trama Kitchen de espionaje y

sustracción de documentos sin control judicial a Luis Bárcenas, extesorero del PP.

Mientras el PP se gastaba el dinero público de todos los españoles en tramas para intentar destruir las pruebas de su propia corrupción, en unas grabaciones publicadas por Público en 2016 Daniel de Alfonso, exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya, se jactaba con el exministro Fernández Díaz, número uno en las listas electorales del PP por Barcelona, de que habían actuado a conciencia contra la sanidad catalana. Esas grabaciones en el despacho del ministro del Interior revelaron una acción orquestada para investigar a líderes independentistas, mencionando el uso de información que incluso podría afectar a la salud de los catalanes: «Les hemos destrozado el sistema sanitario», para debilitar al Govern de la Generalitat de aquel entonces.

En las cloacas del Estado, Cospedal mantuvo un nexo en el tiempo con el excomisario Villarejo a su servicio para ocultar cualquier indicio de los papeles de Bárcenas, en los que aparecía un tal «M. Rajoy». «Lo de la libretita sería mejor poderlo parar. Me lo ha dicho el presidente», decía Cospedal a Villarejo. En sus conversaciones, recogidas en el sumario de la trama Kitchen, el excomisario alardeaba de sus trabajos sucios para el PP de Rajoy. En mitad de los recortes sociales, el PP se dedicaba a usar los fondos reservados para urdir una cloaca parapolicial y tapar su propia corrupción, así como para asfixiar la sanidad catalana y atacar al independentismo.

El coste de la trama Kitchen en gasto policial es incuantificable. Hasta 70 efectivos policiales se destinaron para el espionaje ilegal a Bárcenas y dejaron de atender otras tareas para centrarse en destruir las pruebas de la caja B del PP de la libreta del extesorero. Un total de 11 policías dedicados a la lucha contra el crimen organizado fueron destinados a esta operación para ocultar la corrupción del partido más corrupto de toda Europa[5].

En mayo de 2018, la Audiencia Nacional, en la sentencia de la trama Gürtel, certificó que el PP se financió con una caja B en su sede en la calle Génova. Los cabecillas Francisco Correa y Luis Bárcenas fueron condenados a 51 y 33 años de prisión respectivamente. El extesorero Bárcenas, que acumuló más de 50 millones de euros en Suiza, ya ha logrado la libertad por

«reinserción» como contable del grupo musical Taburete de su hijo Willy Bárcenas y de Antón Carreño, nieto del también corrupto condenado Díaz Ferrán de la CEOE. Dicho grupo musical se lleva habitualmente adjudicaciones de grandes cantidades de dinero por parte de ayuntamientos del PP.

«Esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP», fueron las primeras declaraciones de Rajoy sobre la sentencia de Gürtel, que acabaría provocando que esa misma semana fructificara la moción de censura de Pedro Sánchez que lo echaría de la política. La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró acreditado que entre los años 1999 y 2005 se estableció una estructura de corrupción con el entramado de Francisco Correa y el Partido Popular, con la finalidad de obtener pingües beneficios a costa del erario inflando precios en adjudicaciones. El tribunal concluyó que el PP debía ser condenado como partícipe a título lucrativo por los actos electorales que sufragaron las empresas del cabecilla de la trama.

En las grabaciones de la trama Gürtel podía escucharse que Correa pedía prostitutas altas y rubias para los altos cargos del PP, por boca de su exsecretaria hablando con Ana Garrido, técnica del Ayuntamiento de Boadilla, testigo clave de este caso, que denunció recibir presiones para elaborar los pliegos adaptados a determinadas empresas. «Lo primero que intentan es comprar tu voluntad, subvencionarte algo de forma sutil. Si no lo consiguen, intentan acosarte, humillarte y degradarte como profesional», ha manifestado Ana Garrido.

En el libro Ana contra Gürtel[6], escrito por Javier Bardón, se explica que, gracias a sus denuncias, se han podido recuperar mil millones de euros de la trama. Mientras, ella sufrió un calvario y fue despedida. Perdió el trabajo y subsiste sin recursos económicos, con un desgaste psicológico extremo. Tal como ocurre con las asociaciones de víctimas, las denunciantes de corrupción son hostigadas y difamadas con campañas, más bien cacerías, de descrédito realizadas por el PP.

La aznaridad

Sin la corrupción y las privatizaciones no podría explicarse la figura de un líder político como Aznar. Por número de condenados, imputados e involucrados en corrupción y relacionados con sobresueldos, podríamos considerar –sin riesgo a exagerar– que los gobiernos de Aznar han supuesto una de las mayores organizaciones criminales de la historia reciente de España.

De los ministros de Aznar han sido condenados Rodrigo Rato, Jaume Matas y Eduardo Zaplana. Han estado imputados Álvarez Cascos, Pilar del Castillo y ahora Cristóbal Montoro; y aparecían en sobresueldos de la caja B los nombres de Javier Arenas o «M. Rajoy». Mayor Oreja, otro de sus ministros, es uno de los mayores financiadores del lobby antiabortista y del nacionalcatolicismo en España. «Las protestas de Cataluña son debidas a una crisis de valores de la civilización. Es una distorsión de la naturaleza de las personas con la legalización del aborto y la ideología de género», expresó el que fuera ministro del Interior durante seis años sobre los independentistas catalanes. Su hermano José Mayor Oreja es el presidente de la Fundación ACS de Florentino Pérez. Anteriormente fue presidente de la constructora FCC, con donaciones al PP en el caso de la caja B y a CiU en la trama del 3%.

En cuanto a las privatizaciones de empresas públicas, que comenzaron con su antecesor Felipe González, Aznar las ejecutó de forma brutal y benefició a personas muy cercanas. Destacan Juan Villalonga, amigo de la infancia en el colegio El Pilar, nombrado presidente de Telefónica, y Miguel Blesa, compañero de la academia de oposiciones a inspector de Hacienda, que fue nombrado presidente de Caja Madrid y Bankia –acabó suicidándose implicado en todo tipo de corrupciones y defenestrado hasta del palco del Bernabéu después de ser el mecenas de muchos de sus fichajes galácticos con sus créditos a medida–.

La aznaridad es una parodia patológica de las grandezas imperiales españolistas representada no solo en la guerra imperialista de Irak, también en la ópera bufa del conflicto del islote de Perejil. Este

belicista sigue sin ser juzgado, pidiendo que «quien pueda hacer, que haga» contra un gobierno salido de las urnas. «Este es un gobierno ilegítimo al margen de la ley. No se puede alterar el sistema institucional sin que haya consecuencias», ha amenazado.

En la obra periodística La aznaridad. Por el imperio hacia Dios o por Dios hacia el imperio[7], el autor catalán Manuel Vázquez Montalbán describe al expresidente del PP como una persona arrogante, pero plegada siempre a la política belicista de Estados Unidos. El punto clave de esta aznaridad para Vázquez Montalbán fue la boda de la hija del entonces presidente del Gobierno con Alejandro Agag, oficiada por Rouco Varela. Acudieron al evento más de mil invitados, como un acto de Estado: Juan Carlos I, Sofía, Adolfo Suárez, Silvio Berlusconi, Tony Blair, Rajoy, famosos y empresarios como Plácido Domingo, Julio Iglesias, Isabel Preysler, Briatore, Pedro J. Ramírez… Muchos de los asistentes a este casamiento se verían, años después, a modo de gran maldición, implicados en las grandes tramas de corrupción, como Miguel Blesa, Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, Jaume Matas, Francisco Camps, el Bigotes –que ha reconocido que estuvo un año organizando la boda– o Francisco Correa –que se encargó de la iluminación del banquete–. La trama Gürtel pagó de esta forma una parte de la boda. La mujer de Aznar, Ana Botella, le quiso quitar importancia cuando era alcaldesa de Madrid: «Fue un regalo de una boda hace años de uno de los invitados a uno de los contrayentes», defendió.

Aznar ha hecho gala en multitud de ocasiones de su conservadurismo católico y considera que «los valores de la familia tradicional están en crisis». En 2018 afirmó que «la unión entre homosexuales no puede ser llamada matrimonio porque esto ofende a la población». Ana Botella fue más crítica todavía con el matrimonio homosexual, utilizando una metáfora ofensiva contra el colectivo LGTBI: «Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas».

Víctimas de las redes de pederastia de

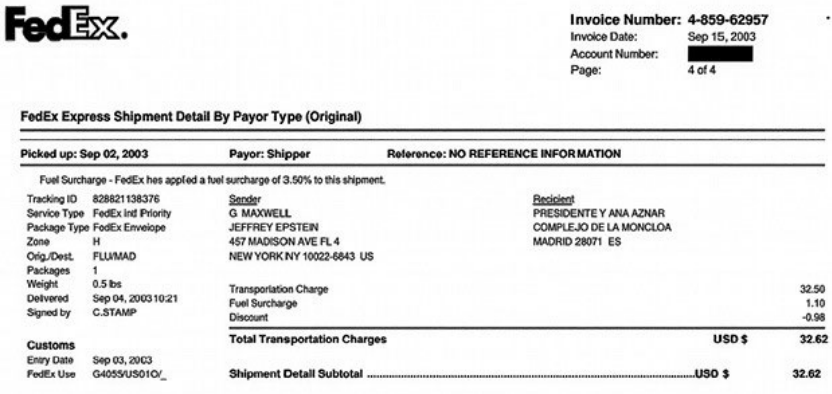
Legionarios de Cristo y Jeffrey Epstein

Los Legionarios de Cristo y su fundamentalismo integrista religioso ganaron terreno ideológico al amparo de los gobiernos de Aznar. Expandieron su influencia gracias al dinero público por la proximidad política del PP a esta congregación ultracatólica. En su Universidad Francisco de Vitoria imparte clase el mismo José María Aznar y ha sido directora de Relaciones Institucionales Macarena Botella, cuñada del expresidente. Los cargos superiores de la congregación ocultaron sus crímenes internamente. Su fundador, el sacerdote mexicano Marcial Maciel Degollado, fue un depredador sexual en serie y abusó de al menos 60 menores. Los Legionarios de Cristo han admitido 175 víctimas de abusos sexuales por parte de 33 de sus sacerdotes.

A pesar de esta retórica tradicionalista y de un farisaico amor a Dios, los tentáculos de los Aznar llegan hasta la reproducción asistida y la fertilidad en clínicas privadas, donde han invertido capital, pues lo consideran un negocio con futuro por el envejecimiento de la población.

Su yerno Alejandro Agag se afilió a las Nuevas Generaciones a los dieciocho años. Fue ayudante personal del propio Aznar y eurodiputado del partido. Fundó la Fórmula E de coches y aparecía en la lista de contactos del depredador sexual Epstein para intentar financiar la competición. Se da la circunstancia de que los mayores defensores de la unidad familiar católica y apostólica tuvieron relación comercial con uno de los mayores criminales de pederastia y explotación sexual de los últimos tiempos.

Jeffrey Epstein construyó su fortuna gracias, entre otras, a familias de la oligarquía española que le contrataron cuando mantuvo un romance con Ana Obregón, según publicó The New York Times[8].



FedEx.

Invoice Number: 4-859-62957
Invoice Date: Sep 15, 2003
Account Number: [redacted]
Page: 4 of 4

FedEx Express Shipment Detail By Payor Type (Original)

Picked up: Sep 02, 2003 **Payor: Shipper** **Reference: NO REFERENCE INFORMATION**

Fuel Surcharge - FedEx has applied a fuel surcharge of 3.50% to this shipment.

Tracking ID	828821138376
Service Type	FedEx Intl Priority
Package Type	FedEx Envelope
Zone	H
Orig./Dest.	FLL/MAD
Packages	1
Weight	0.5 lbs
Delivered	Sep 04, 2003 10:21
Signed by	C.STAMP

Customs

Entry Date	Sep 03, 2003
FedEx Use	G4055/US01O/_

Sender
G MAXWELL
JEFFREY EPSTEIN
457 MADISON AVE FL 4
NEW YORK NY 10022-6843 US

Recipient
PRESIDENTE Y ANA AZNAR
COMPLEJO DE LA MONCLOA
MADRID 28071 ES

Transportation Charge		32.50
Fuel Surcharge		1.10
Discount		-0.98
Total Transportation Charges	**USD $**	**32.62**
Shipment Detail Subtotal	**USD $**	**32.62**

Envío de Epstein para Aznar a la Moncloa. Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Entre los españoles que aparecen en los documentos desclasificados del caso Epstein, difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aparece la familia Aznar al completo, con paquetes enviados por Epstein y Ghislaine Maxwell a la Moncloa y a la FAES, teléfonos en su agenda, un pago de un viaje de más de mil dólares y la fundación del lobby sionista Friends of Israel Initiative, con conexiones con Epstein. José María Aznar ha negado conocer a Epstein y ha amenazado con acciones judiciales contra el Gobierno si intenta vincularlo con las actividades delictivas de esta trama. Los contactos documentados ocurrieron antes de la primera investigación policial a Epstein.

FedEx.

Invoice Number: 1-763-84783
Invoice Date: May 17, 2004
Account Number: [redacted]
Page: 4 of 6

FedEx Express Shipment Detail By Payor Type (Original)

Picked up: May 05, 2004 **Payor: Shipper** **Reference: NO REFERENCE INFORMATION**

Fuel Surcharge - FedEx has applied a fuel surcharge of 6.00% to this shipment.

		Sender	Recipient
Tracking ID	945134992736	GHISLAINE MAXWELL	PRESIDENTE AZNAR
Service Type	FedEx Intl Economy	JEFFREY E EPSTEIN	JUAN BRAVO 3C
Package Type	FedEx Envelope	457 MADISON AVE FL 4	PALNTA 7
Zone	H	NEW YORK NY 10022-6843 US	MADRID 28006 ES
Orig./Dest.	FLU/MAD		
Packages	1		
Weight	0.6 lbs		
Delivered	May 10, 200410.36	Transportation Charge	46.51
Signed by	M.REDONDO	Fuel Surcharge	2.82
		Discount	-1.46
Customs		**Total Transportation Cherges** **USD $**	**49.87**
Entry Date	May 06, 2004		
FedEx Use	G2612/US01O/_		

Otro envío de Epstein para Aznar a la Moncloa. Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos.

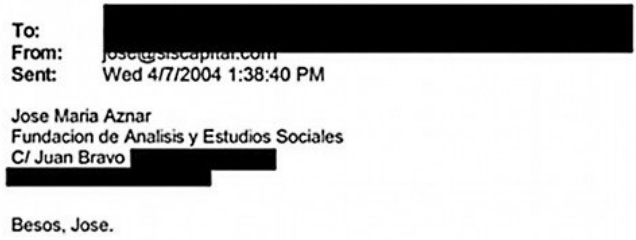
10:48 AM
04/27/16
Accrual Basis

SHOPPERS TRAVEL, INC.
Find Report
All Transactions

Type	Date	Num	Name	Amount	Balance
Invoice	10/30/2003	60366	[redacted]	0.00	338,275.71
Invoice	10/30/2003	60392		902.60	339,178.31
Invoice	10/23/2003	60303	Maxwell/Ghislaine	2,399.00	341,577.31
Invoice	10/17/2003	60261	Aznar/Jose Maria	1,050.00	342,627.31
Invoice	10/17/2003	60262	[redacted]	350.00	342,977.31
Invoice	10/9/2003	60187	Goffinet/Francois	580.00	343,557.31
Invoice	10/7/2003	60162	[redacted]	903.34	344,460.65
Invoice	10/7/2003	60163	Maxwell/Ghislaine	6,396.84	350,857.49
Invoice	10/6/2003	60149	[redacted]	232.00	351,089.49
Invoice	10/3/2003	60133	Cotnn/Valdson	620.00	351,709.49
Invoice	9/29/2003	60056	Cotnn/Valdson	235.00	351,944.49
Invoice	9/29/2003	60060	Tindall/Brent	235.00	352,179.49
Invoice	9/25/2003	60039	[redacted]	3,546.00	355,725.49
Invoice	9/24/2003	60019	[redacted]	486.00	356,211.49
Invoice	9/24/2003	60020	[redacted]	899.00	357,110.49
Invoice	9/24/2003	60023	Cow/Madison	125.00	357,235.49
Invoice	9/24/2003	60024	Romualdez/Daniel	125.00	357,360.49
Invoice	9/23/2003	60011	Cow/Madison	1,999.00	359,359.49
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Gasto de 1.050 dólares del agente de viajes de Epstein.

Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos.


To: [redacted]
From: [redacted]
Sent: Wed 4/7/2004 1:38:40 PM

Jose Maria Aznar
Fundacion de Analisis y Estudios Sociales
C/ Juan Bravo [redacted]

Besos, Jose.

Correo electrónico en el que José María Aznar hijo proporciona la dirección de la FAES. Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Víctimas de los crímenes de guerra en Irak y del 11-M

El mandato de Aznar terminó con las manos manchadas de sangre mintiendo vilmente al respecto de unas supuestas armas de destrucción masiva de Irak y sobre el atentado del 11-M en 2004. Aznar llamó personalmente a los medios de comunicación para transmitirles su certeza de que había sido ETA, así lo confirmaron Javier Álvarez de la Cadena SER y José Antonio Zarzalejos del ABC. Su ministro del Interior, Ángel Acebes, fue el portavoz en las ruedas de prensa y culpó a ETA el mismo 11 de marzo a las pocas horas del atentado: «Las fuerzas y cuerpos de seguridad y el ministerio no tienen duda de que el responsable del atentado es la banda terrorista ETA y estamos viviendo un proceso de intoxicación por Otegi para desviar la atención. Estaban buscando en este momento preciso un atentado que tuviese gran repercusión y generase miedo y dolor con un gran número de víctimas», manifestó sobre esta teoría de la conspiración.

En lugar de entrar en prisión por crear uno de los mayores montajes mediáticos que se recuerdan para intentar ganar unas elecciones manipulando a la población, Acebes ha sido premiado y en 2024 se

convirtió en el consejero independiente mejor pagado de todo el Ibex-35, con 766 mil euros anuales en la puerta giratoria de Iberdrola. Víctor Sampedro, catedrático de Opinión Pública en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de Voces del 11-M. Víctimas de la mentira, argumenta que se trata de la mayor campaña de fake news de la historia de España y que supuso la instalación de una maquinaria de odio en el Madrid mediático que persiste hasta ahora[9].

Entre los españoles asesinados por la invasión de Irak apoyada por Aznar se encuentran 11 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y dos reporteros, Anguita Parrado y José Couso. Julio Anguita Parrado era hijo del político Julio Anguita, que pronunció un discurso tras su muerte señalando a Aznar con una frase antibelicista: «Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen». En el caso de José Couso, su familia ha tenido que dar una lucha judicial sin tregua y llena de trabas puestas por el PP. El Gobierno de Rajoy modificó la ley de jurisdicción universal con el requisito de que el autor del asesinato viviera en España.

Antes, en 2005, el juez Santiago Pedraz había emitido una orden de arresto para los tres militares estadounidenses responsables. Sin embargo, para archivar el caso, el juez derechista Ángel Hurtado actuó como freno y consideró que su asesinato no podía ser achacable al ejército de Estados Unidos. Como revelaría WikiLeaks de Julian Assange, el embajador de Estados Unidos conspiró y presionó, ya con el PSOE en el gobierno, a ministros como Moratinos o López Aguilar y a la vicepresidenta María Teresa de la Vega para que no prosperaran las órdenes de detención.

Después de aquel apoyo de Aznar a la invasión se producirían los atentados del 11-M, en los que fueron asesinadas 193 personas. Dos días después, el 13 de marzo de 2004, un policía y su hijo asesinaron a Ángel Berrueta al negarse este a poner en su panadería de Pamplona un cartel atribuyendo el atentado a ETA. Una víctima más, olvidada y silenciada.

Por parte del PP, Manuel Cobo, recuperado por Feijóo y uno de los diputados con mayor patrimonio en el Congreso, con tres millones de euros, habitual en las tertulias de La Sexta con Ferreras y en el palco del Bernabéu de Florentino Pérez, se burló de las víctimas del

11-M. La presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Pilar Manjón, denunció que, a su petición de un nuevo monumento en la estación de El Pozo, Cobo les respondió que «otro monumentito para el 11-M, cualquier día me lo van a pedir las putas de Montera y se lo voy a tener que hacer»[10].

Aznar escogió como líder del partido, por delante de Rodrigo Rato y Mayor Oreja, al que pensaba que sería más manipulable desde fuera, Mariano Rajoy, que perdió las elecciones tras el descalabro consecuencia de la manipulación gubernamental del PP. Rajoy puso bajo sospecha la instrucción judicial del atentado basándose en informaciones falsas publicadas en El Mundo.

También jaleó todos los bajos instintos de la derecha y la teoría de la conspiración, pero sabiendo frenar a sus competidores que desde dentro querían defenestrarlo, como intentó Esperanza Aguirre, y quitarle el puesto. La caja B del PP como contabilidad paralela e ilegal del partido fue otra burla más a las víctimas del 11-M. El partido, a través del tesorero Bárcenas, utilizó parte del dinero en negro para financiar a uno de los medios, Libertad Digital de Jiménez Losantos, que sostenía la mentira sobre la autoría de ETA y que atacaba directamente a las víctimas de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo.

Víctimas de la tragedia del Madrid Arena

Aunque nadie la había votado, durante la tragedia del Madrid Arena en 2012 Ana Botella ejercía por nepotismo el puesto de alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid tras la marcha de Gallardón al Ministerio de Justicia. En el Madrid Arena, recinto municipal gestionado por la empresa pública Madridec, murieron en una avalancha humana las jóvenes Rocío Oña, Cristina Arce, Katia Esteban, Belén Langdon y María Teresa Alonso, y cientos de heridos han necesitado años de ayuda psicológica.

Había deficiencias conocidas de seguridad y no corregidas, un

sobreaforo extremo, apenas cinco vigilantes de seguridad en el interior y se alquiló el recinto a la promotora Diviertt, que solo priorizaba el negocio. A los pocos días de la tragedia, Ana Botella se marchó de vacaciones con su familia a un balneario de lujo en Portugal, un signo de insensibilidad absoluta. Mientras eran enterradas las jóvenes fallecidas, ella disfrutaba a pierna suelta en el spa, como Manuel Fraga de caza durante el Prestige.

Fueron condenados por homicidio y lesiones el administrador, el director y el jefe de personal de la empresa concesionaria Diviertt (Miguel Ángel Flores, Santiago Rojo y Miguel Ángel Morcillo, respectivamente) y el responsable de la empresa pública Madridec (Francisco del Amo). Asimismo, fueron condenados Carlos Manzanares, de la empresa de control de accesos Kontrol 34, y Juan José París y Raúl Monterde, coordinadores de la seguridad en la empresa Seguriber.

El Ayuntamiento de Madrid fue declarado responsable civil subsidiario. Fueron absueltos Emilio Monteagudo, jefe de la Policía Municipal de Madrid, y Rafael Pastor, director de Seguridad de Madridec y al que más tarde ficharía Ayuso para su Gobierno. Tampoco prosperó la denuncia interpuesta contra Ana Botella por el sindicato Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid (CITAM), que pedía cuatro años de prisión para la mujer de Aznar por negligencia grave al no fiscalizar el evento, permitir que se celebrara con sobreaforo y deficiencias de seguridad, y autorizar el alquiler del pabellón del Madrid Arena a la promotora Diviertt, que no cumplía con los requisitos legales.

Víctimas de la chatarra llamada Yak-42

El 26 de mayo de 2003 fallecieron 62 soldados españoles en el accidente del Yak-42. El avión del siniestro aéreo era una completa antigualla en mal estado, del que los propios militares se habían quejado y decían que viajaban en una «chatarra». Supuso un caso más de negligencia estatal y encubrimiento por parte del Gobierno

de Aznar. Se falsificaron 32 identificaciones y se entregaron los restos mezclados y equivocados de forma chapucera a las familias de las víctimas.

El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, jamás fue condenado y solo se sentó en el banquillo para testificar y defender la buena fe de los condenados. El caso fue archivado por el juez Fernando Grande-Marlaska, en esa época afín al PP, que hoy es ministro del Interior del PSOE, al considerar que no había indicios penales suficientes de responsabilidad directa. Posteriormente Trillo tuvo un retiro dorado y fue nombrado embajador en Londres con el Gobierno de Rajoy. Según los papeles de Bárcenas, poco después del accidente Federico Trillo recibió de la caja B del PP más de 50 mil euros, parte de los cuales se habrían destinado para sufragar la defensa de militares imputados por el accidente del Yak-42, según el extesorero del PP[11].

En el juicio penal sobre la manipulación de las identidades fue condenado a tres años de prisión por falsedad documental el general Vicente Navarro, jefe del equipo médico. Navarro falleció al poco tiempo por enfermedad y no entró en la cárcel. El comandante José Ramón Ramírez y el capitán médico Miguel Ángel Sáez fueron condenados a 18 meses por complicidad en el delito. Ambos fueron más tarde indultados por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012.

Víctimas del accidente ferroviario en Angrois

En 2013 fallecieron 80 personas en el accidente ferroviario más grave de la historia de la democracia en España, cuando un tren Alvia descarriló en la curva de A Grandeira (Angrois, Santiago de Compostela) al entrar a 190 km/h en un tramo que exigía reducir a 80 km/h.

Ha sido condenado únicamente el maquinista de Renfe, que

reconoció su error e imprudencia. Las familias de las víctimas pidieron la dimisión e investigación de los ministros Ana Pastor del PP y Pepe Blanco del PSOE como responsables políticos en Fomento. Los familiares de las víctimas se sintieron abandonados por la opacidad gubernamental y llamaron «el pacto de la curva» a un acuerdo institucional de silencio entre Rubalcaba, líder del PSOE, y los dirigentes del PP para no manchar la imagen de España y sus negocios ferroviarios internacionales. Además, tanto Rajoy como Ana Pastor tardaron en comparecer e impidieron una comisión de investigación.

Desde el primer minuto hubo un claro interés en que el único culpable acabara siendo el maquinista Francisco José Garzón, para minimizar responsabilidades de los gobernantes y señalar al último eslabón de una cadena de chapuzas, negligencias y prisas por expandir la red. El maquinista Garzón fue detenido cuando se encontraba herido con las costillas rotas en el hospital un día antes de la comparecencia en medios del ministro del Interior, Fernández Díaz, y Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, que dieron la rueda de prensa ya con el maquinista en el calabozo.

Falló la seguridad en la infraestructura al no activarse el sistema de protección automático ERTMS, que habría frenado el tren si superaba la velocidad permitida. Solo estaba entonces en funcionamiento en ese tramo el sistema ASFA, que da avisos al maquinista y deja en manos de este hacer la bajada brusca de velocidad. Después de esta tragedia terminó por instalarse el sistema ERTMS. Un análisis previo había identificado el peligro en la curva y recomendaba el uso de dicho sistema aún por implantar.

Inicialmente la sentencia condenó por homicidio al maquinista y al entonces director de Seguridad de ADIF, Andrés Cortabitarte, en el cargo tanto con el PSOE como con el PP, por haber certificado que la línea era segura pese al riego identificado. En enero de 2026, en mitad de la tragedia ferroviaria en Adamuz con 46 fallecidos y con otro maquinista fallecido en Gelida, Andrés Cortabitarte fue absuelto por la Audiencia de A Coruña.

Teresa Gómez-Limón, exdiputada del PP en la Asamblea madrileña y superviviente del accidente del Alvia, denunció en el programa de Salvados la falta de apoyo institucional tras la tragedia ferroviaria,

afirmando haber sufrido presiones internas del partido, para que mintiera, retrasara el proceso y no colaborara con la justicia, por parte de Rafael Catalá, secretario de Estado de Fomento y número dos de Ana Pastor en el momento de la tragedia[12].

Los recortes matan. El traficante de influencias Cristóbal Montoro y los afectados de la hepatitis C

Rajoy ganó las elecciones en noviembre de 2011, meses después de la ola de indignación del 15-M por las políticas austericidas en el sur de Europa. Zapatero había tratado de negar la crisis capitalista hasta que estalló por completo. El presidente ZP, que había recibido llamadas de Barack Obama y Angela Merkel exigiendo recortes sociales, congeló las pensiones, abarató los despidos, bajó los salarios a los funcionarios, subió la edad de jubilación, terminó con su propuesta del cheque-bebé, recortó la inversión en obra pública y modificó el artículo 135 de la Constitución Española, con apoyo de Rajoy, sin referéndum, dando prioridad al pago de la deuda pública y sus intereses por encima de los derechos de los ciudadanos e imponiendo como deber el concepto de estabilidad presupuestaria.

El PP aplicó todavía más políticas de austeridad tras la crisis de 2008-2012: el gasto sanitario público se recortó en más de 3.800 millones de euros solo en los primeros años, con medidas como copagos farmacéuticos, exclusión de inmigrantes irregulares de la atención sanitaria universal o reducción de personal y prestaciones. Mientras tanto, la caja B seguía existiendo y usándose para sobresueldos a dirigentes, pagos a medios derechistas y otros gastos opacos del partido.

Los recortes en sanidad aumentaron las listas de espera, hubo reducción del personal y un deterioro general del sistema sanitario con retrasos en los diagnósticos y tratamientos. Miles de personas murieron sin recibir las ayudas por dependencia (hasta 90 personas

dependientes con derecho reconocido fallecían al día sin recibir ningún servicio, más de 150 mil personas dependientes murieron en los años de Rajoy como presidente del Gobierno sin haber recibido las ayudas que les correspondían); se excluyó de la cobertura sanitaria a 900 mil migrantes en situación irregular, aumentando la mortalidad de este colectivo (las muertes de migrantes sin papeles crecieron un 15% tras los recortes del PP que liquidaron la sanidad universal); y las Mareas Blancas denunciaron fallecimientos por demoras hospitalarias en los diagnósticos. En definitiva, fueron innumerables las víctimas evitables de las duras políticas de austeridad del PP.

En 2012, en un país intervenido y cada vez menos soberano, el Gobierno de Rajoy anunció en plena Eurocopa de fútbol el mayor rescate bancario europeo, que nos costó más de 70 mil millones de euros. El presidente se marchó a Polonia para ver el partido de la selección española el mismo día que se hizo público: «Me voy porque el equipo lo merece y porque el asunto está resuelto», se jactó. Según el PP, no iba a costar un solo euro. El ministro Luis de Guindos, del Opus Dei, que había sido responsable de Lehman Brothers cuando colapsó en 2008, se encargaba de la cartera económica.

Ante las protestas y la movilización social, Mariano Rajoy aprobó en noviembre de 2013 la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, limitando el derecho a la manifestación. Pedro Sánchez prometió derogarla en cuanto llegara al gobierno, pero hoy sigue vigente y se ha estado aplicando durante sus más de ocho años de mandato.

Mientras el país afrontaba los mayores recortes sociales de la democracia, el bufete del exministro Cristóbal Montoro se hacía de oro. Mediante el poder y la influencia del Ministerio de Hacienda se impulsaban leyes y reformas fiscales para beneficiar a las empresas que realizaban grandes contratos con su despacho Equipo Económico. En 2006, mientras era eurodiputado y cargo público del PP, fundó este bufete, cuyos miembros desempeñarían cargos al más alto nivel en la administración, creando una red de influencias para obtener rebajas de impuestos a favor de empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y

Medicinales.

Entre los clientes del bufete también estaban personajes famosos como Cristiano Ronaldo. Cuando se destapó el caso de su fraude fiscal en Football Leaks, Montoro salió en defensa del futbolista y parte de sus delitos fueron prescritos (por ello no entró en prisión, al ser condenado a solo dos años). «Sufre indefensión. Es una incidencia, no presume culpabilidad. Es un error gravísimo criminalizarlo y el tener que demostrar inocencia. Hay que tener la mejor Liga del mundo», remarcó.

Nueve cargos de la segunda etapa de Montoro en el ministerio con el Gobierno de Rajoy han sido imputados, y también otros cuatro de su primera época con Aznar. Montoro, que se dio de baja del PP en 2025 por la imputación, acudió como uno de los invitados de honor al último Congreso Nacional del partido con Feijóo.

Además, entre los clientes de Equipo Económico se encontraban las aseguradoras privadas Asisa y Ribera Salud, que pagaron más de 300 mil euros a su despacho para conseguir beneficios para la sanidad privada. Montoro defendió los recortes sanitarios y laborales: «Se trata de redefinir el catálogo de servicios que presta la Sanidad y garantizar su sostenibilidad. Hay mucho abuso, como el acceso a medicamentos de muchas personas. No hay dinero en las arcas públicas para pagar los servicios públicos, y, cuando no hay dinero, hay que extender la jornada laboral», decía. Fue una de las caras visibles de estos recortes en dependencia y sanidad que supusieron una ola de desesperación y sufrimiento entre los sectores más vulnerables. Repitió hasta la saciedad que nos teníamos que abrochar el cinturón y que vivíamos por encima de nuestras posibilidades.

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, virus que destroza el hígado, denunció más de cuatro mil muertes por el retraso deliberado en el acceso a tratamientos médicos como el Sovaldi; a la vez, Montoro responsabilizaba del déficit en las cuentas públicas del Estado a la adquisición de medicinas para tratar la enfermedad hepática. La plataforma se rebeló contra estas acusaciones: «¿Se puede tener menos vergüenza? Nos culpabiliza a los enfermos del déficit con total falta de sensibilidad. Sus declaraciones demuestran poca o nula sensibilidad ante los pacientes de hepatitis C,

presentándolos como parte del problema y culpabilizándolos. Es incompetente, ruin, inhumano e indecente. Pretende culpabilizar a los enfermos de hepatitis C y enfrentarlos con los afectados de otras enfermedades», denunciaron.

Por otro lado, Madrid Network, chiringuito opaco donde Esperanza Aguirre del PP colocó a dedo a sus cachorros Santiago Abascal y Ayuso con sueldazos públicos de más de cuatro mil euros mensuales, aparece también en la trama de Montoro con un pago de casi dos millones de euros a su despacho. Así como la Xunta de Galicia de Feijóo, que pagó al bufete una suma de 1.720.000 euros. Además están implicadas muchas de las empresas del Ibex: Abengoa, Red Eléctrica, Gamesa, Cintra, Santander, Banco Popular, BBVA, CaixaBank, Telefónica, Sacyr, OHLA, Iberdrola y Naturgy.

Mientras Rafael Catalá, pez gordo de Codere, era ministro de Justicia del PP, consiguió todo tipo de ventajas fiscales para beneficiar a la lacra social de la ludopatía, la cual provoca miles de víctimas en la clase trabajadora (España es el país con más menores ludópatas en Europa, un problema que está destrozando a familias enteras y crece en los barrios obreros, como la heroína en los años ochenta). Las casas de apuestas Codere también consiguieron estas ventajas por la trama de Montoro. Y la pregunta es: ¿qué hacían los jueces mientras el ministro de Hacienda y Rafael Catalá, del PP, se daban un festín? Incluso Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, participó en charlas en dichas casas de apuestas junto a Rafael Catalá: «Agradezco a la Fundación Codere su amabilísima invitación. Mi amigo Rafa manda mucho, pero yo lo conocí cuando mandaba muchísimo. Entonces era secretario de Estado de Justicia y no sé si compartíamos parcela funcional, pero juntos tuvimos que poner en común muchos proyectos de reforma legislativa», expresó el juez.

Durante los gobiernos del PP –entre 2000 y 2004 con José María Aznar y de 2011 a 2018 con Mariano Rajoy–, Montoro elaboró la amnistía fiscal que fue declarada inconstitucional. Pedro Sánchez prometió dar la lista oficial completa, pero siguen sin conocerse los 31.400 beneficiarios, no ha trascendido ni un 5% de los nombres. Han salido a la luz: Francis Franco, nieto del dictador; cuatro Borbones en la línea de sucesión y familiares de la Casa Real;

corruptos del PP como Francisco Granados, Bárcenas y Rato; o Fernando Martín, expresidente del Real Madrid que fue condenado a tres años y medio de prisión por corrupción con el pago de una mordida de 25 millones de euros a la trama Gürtel del PP para llevarse adjudicaciones[13].

---

[1] G. Peces-Barba, «La justicia con Gallardón», El País, 10 de febrero de 2012.

[2] F. López Agudín, «Aquellas feministas rapadas», Público, 9 de marzo de 2021, disponible en: [https://www.publico.es/opinion/hemeroteca/aquellas-feministas-rapadas.html].

[3] L. Marco, «El primer juez que investigó la financiación del PP desvela su calvario», elDiario.es, 30 de abril de 2022, disponible en: [https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/primer-juez-investigo-financiacion-pp-desvela-calvario-cierra-llegar-puesto_1_8957609.html].

[4] A. Missé, «Aznar y Fraga conocían las prácticas investigadas en Valencia, según las cintas», El País, 27 de abril de 1990.

[5] A. Pascual, «El coste de “Kitchen” para las arcas públicas: 70 policías, 60.000 euros y otros recursos “sin cuantificar” para servir al PP», Público, 1 de abril de 2026, disponible en: [https://www.publico.es/politica/tribunales/coste-kitchen-arcas-publicas-70-policias-60-000-euros-otros-recursos-cuantificar-servir-pp.html].

[6] J. Bardón, Ana contra Gürtel, Barcelona, Editorial Alrevés, 2025.

[7] M. Vázquez Montalbán, La aznaridad. Por el imperio hacia Dios o por Dios hacia el imperio, Barcelona, Random House, 2003.

[8] P. Scarpellini, «El “New York Times” desvela la relación de Ana Obregón y Jeffrey Epstein y cómo ella le ayudó a hacerse rico», El Mundo, 16 de diciembre de 2025.

[9] V. Sampedro, Voces del 11-M. Víctimas de la mentira,

Barcelona, Planeta, 2024.

[10] Europa Press, «Manjón: Cobo nos dijo que “un día tendrían que hacer un monumento para putas”», 11 de marzo de 2011.

[11] RTVE, «Bárcenas dice que dio dinero negro a Trillo para la defensa de los militares acusados por el Yak-42», 16 de julio de 2013, disponible en: [https://www.rtve.es/noticias/20130716/barcenas-dice-dio-dinero-negro-a-trillo-para-defensa-militares-acusados-por-yak-42/715681.shtml].

[12] Salvados, «La indignación de Teresa, víctima del Alvia, cuando Catalá habló tras el accidente: “Con los cadáveres aún calientes, habla de los negocios de España”», 15 de septiembre de 2025, disponible en: [https://www.lasexta.com/programas/salvados/indignacion-teresa-victima-alvia-cuando-catala-hablo-accidente-cadaveres-aun-calientes-habla-negocios-espana_2025091568c7f117d8e27966645bc244.html].

[13] A. V. Vélez, «De Rato a los Franco o un narco: los 100 beneficiarios de la amnistía fiscal de Rajoy que han salido a la luz», elDiario.es, 22 de noviembre de 2023, disponible en: [https://www.eldiario.es/economia/rato-franco-narco-100-beneficiarios-amnistia-fiscal-rajoy-han-salido-luz_1_10709088.html].

CAPÍTULO II

EL CLAN DE LA QUIRONESA AYUSO Y los PROTOCOLOs DE LA VERGÜENZA

La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286 mil euros de beneficio por vender mascarillas.

Pablo Casado, entonces presidente del PP, sobre el hermano de Ayuso

Escribía mis tuits y jamás metió la pata. Me parece fantástica. Habla claro, sin complejos, y eso es lo que le gusta a la gente.

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid

Ahora los políticos llegan a la gloria por cualquier gilipollez y banalidad. Tenemos una nueva heroína política con Ayuso. Su último trabajo era llevar la cuenta de Twitter del perro de su protectora Esperanza Aguirre. De ahí pasa a la Comunidad de Madrid. Tú hablas 15 minutos con Ayuso y dices, si no hay una cosa mejor, en este país vamos a cerrar la tienda.

José María García, experiodista deportivo

Era una falangista furibunda. Me perseguía por los pasillos como un caniche para que yo le hablase de José Antonio Primo de Rivera, le hablase de Ramiro Ledesma, le hablase de Eugenio Montes, le hablase de David Jato, le hablase de Eugenio Lostau de la Falange. En fin, llegaba a ser un pelín agobiante, pero uno siempre ha tenido vocación didáctica con sus flechillas. Me enteré de que con el paso del tiempo había ingresado en el Partido Popular y me la encontré en El Gato al Agua en Intereconomía, y me dijo que, aunque estuviera en el PP, seguía siendo la misma. Después volví a encontrármela y ya vino crecida como mano derecha de Esperanza Aguirre y me dijo: «Esas ideas que vosotros defendéis, ¿cuántos escaños tienen? Cero». Y que ese pensamiento solo lo encontraba en Vox y no levantaba ni tres concejales en toda España.

Eduardo García Serrano, falangista y uno de los primeros jefes de Ayuso como becaria en Radio Intercontinental

¿Abrirá esta semana un hospital con los sanitarios de otros hospitales de Madrid?

Silvia Intxaurrondo, periodista de TVE en declaraciones de su etapa en Telemadrid

Yo no soy la persona responsable. No tengo que entrar al detalle. Eso no me compete. Son preguntas que no se hacen normalmente a una presidenta autonómica.

Díaz Ayuso, entrevista sobre la puesta a punto del Hospital Zendal (que abriría sin contratar más sanitarios)

Los protocolos de la vergüenza en residencias de mayores: 7.291 víctimas

La Comunidad de Madrid lideró en Europa el exceso de mortalidad en la pandemia, y el descenso en la esperanza de vida cayó de media 3,58 años para los hombres madrileños y en 2,25 para las mujeres madrileñas, cuatro veces más de lo que lo hizo la media europea[1]. Uno de cada cinco ancianos internos en residencias perdió la vida en los dos primeros meses de la pandemia. En marzo y abril de 2020 fallecieron 9.470 ancianos en residencias de la Comunidad de Madrid, de ellos 7.291 sin ser derivados a un hospital. Detrás de estos datos demoledores de la región europea en la que más se desplomó la esperanza de vida en la epidemia se encuentra la gestión del PP y la decisión de los crueles protocolos en las residencias de mayores.

En el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, presidida por el magistrado emérito José Antonio Martín Pallín, se concluyó:

En los meses de marzo y abril de 2020 se produjo una sobremortalidad en las residencias que pudo y debió haberse evitado. Los recursos sociales y sanitarios eran insuficientes cuando se declaró la pandemia. Desde entonces la situación no se ha corregido. La respuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid al inicio de la pandemia fue inadecuada y no activó la vigilancia epidemiológica. La comunicación entre residentes y familiares, así como la información a los familiares fueron inadecuadas e incompletas. El Gobierno de la Comunidad de Madrid no medicalizó las residencias y restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias hacia los hospitales, utilizando criterios discriminatorios (por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo), y supuso una discriminación en el derecho a la atención sanitaria y una vulneración del derecho a la

vida. Tampoco utilizó los medios alternativos existentes para ofrecer atención sanitaria a los pacientes de las residencias. El sufrimiento y la muerte evitable de miles de personas mayores que vivían en residencias fueron consecuencia de unas decisiones planificadas y conscientes de discriminación mantenidas en el tiempo. Se han vulnerado gravemente derechos fundamentales de las personas residentes y de sus familiares; se ha vulnerado el derecho a la verdad; no se ha investigado debidamente lo que ocurrió; y no se han establecido ni responsabilidades ni reparaciones justas[2].

Mientras el Gobierno de Díaz Ayuso excluía de los hospitales a ancianos de residencias, la hipócrita presidenta del PP lloraba en misa y posaba imitando a la Virgen de los Dolores. Por si fuera poco, Ayuso se burló de las víctimas, a las que llamó «frustradas» y «activistas». En los correos internos queda claro que sabía que las residencias no se medicalizaron.

-

Exceso de mortalidad	Región	Cambio porcentural (%) comparado con el p
1.	Comunidad de Madrid	44%
2.	Lombardía	39%
3.	Castilla-La Mancha	34%
4.	Trentino	32%
5.	Mayotte	32%
6.	Castilla y León	29%
7.	Valle d’Aosta	28%
8.	Cataluña	27%
9.	Podkarpackie	26%
10.	Piemonte	25%

Ranking de exceso de mortalidad en regiones europeas. Fuente: informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias en Madrid.

El escándalo, de una tremenda gravedad, sobre las órdenes contra la salud fue destapado en junio de 2020. La Comunidad de Madrid envió al menos cuatro correos para excluir de hospitales a los ancianos de las residencias. Publicaba la noticia el diario El País: «Carlos Mur de Víu, director de Coordinación Sociosanitaria, envió al menos cuatro correos a la Consejería de Políticas Sociales pidiendo dar traslado de los protocolos de triaje, el 18, 20, 24 y 25 de marzo. Esos documentos, todos firmados digitalmente por él, fueron la guía que siguieron hospitales y residencias para descartar la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos con covid-19. Como explican los documentos, el fin era evitar el colapso de la sanidad madrileña. Pero, según los hijos y nietos de residentes a quienes fue denegada una hospitalización, la Comunidad de Madrid sacrificó las vidas de sus familiares para lograr ese fin»[3]. En una forma de violencia y discriminación contra los más vulnerables, los ancianos con seguro privado sí que fueron trasladados de las residencias a los hospitales en Madrid. Estos protocolos de la vergüenza fueron redactados por Francisco Javier Martínez Peromingo y por geriatras de enlace autorizados por el consejero Ruiz Escudero y coordinados por Carlos Mur.

Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia llevan luchando seis años para juzgar a los responsables de dichos protocolos, a los que califican de asesinos por denegación de auxilio sanitario y discriminación en la asistencia. Los familiares de las víctimas han sufrido indefensión, silencio mediático, desprecio y hasta burlas por parte de las instituciones madrileñas del PP. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, defendió que no harían una comisión de investigación porque «las familias ya lo han superado»; o Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, que intentó desacreditar a Maite Rodríguez, una de las portavoces de 7.291: Verdad y Justicia, insinuando que esta ni siquiera había tenido una familiar en una residencia, cuando su madre Pedra Gadea fue una de las ancianas que murió sin atención

médica y de la cual no pudo ni despedirse.

La defensa de las familias de los fallecidos en residencias, ejercida por los abogados Carlos Castillo, Alejandra Jacinto y Eduardo Arranz, trata de esclarecer lo que ocurrió y cómo se tomó la decisión por parte del Gobierno de Ayuso para discriminar a personas que no podían valerse por sí mismas por razón de discapacidad y enfermedad, y denegarles la asistencia sanitaria.

En el documental 7291, dirigido por Juanjo Castro, dan voz a muchos de estos familiares y a las trabajadoras de las residencias. «Tenían terror. Morían agarrados a las barandillas de las camas intentando respirar», denunciaba María Ángeles Maquedano, una de las trabajadoras. «Quiero que se investigue y que garanticen que esto no va a volver a pasar, y que nadie se atreva a decir que nosotras tenemos las heridas cerradas. Llevamos años con heridas abiertas, sin contestación. Nos sentimos abandonadas. Nadie nos ha preguntado cómo estamos ni qué necesitamos. Que por fin se haga justicia con una generación que sufrió mucho y se partió el alma por sacar adelante a sus hijos y darnos una preparación… y que murieron solos», expuso Mercedes Huertas, una de las activistas de Verdad y Justicia e hija de uno de los fallecidos durante la primera ola de la epidemia del covid. Expresó su dolor por lo vivido: «El protocolo condenó a una muerte cruel a todos ellos. Es el mayor homicidio de la historia de la democracia. Morían ahogados en sus flemas, agarrados a los barrotes de la cama, compartiendo habitación vivos y muertos, y miles historias a cuál más dolorosa para las familias. En cada una de esas 7.291 personas hay una vida, una familia y unos derechos vulnerados. El duelo sigue abierto, y el dolor, la rabia y la impotencia crecen día a día ante el abandono institucional»[4].

Operación Bicho y un juicio pendiente

Eduardo Esteban Aragonés fue el responsable de las ambulancias de Transamed, que medicalizaron con apenas 15 sanitarios las

residencias de Madrid durante 12 días en la operación Bicho. Ideada por Encarnación Burgueño, fue un operativo que consistió en cuatro ambulancias que visitaban los centros con algún material. Este servicio a modo de apoyo sanitario en residencias resultó un plan fallido y desastroso de la primera ola de la pandemia en Madrid. En declaraciones a la Cadena SER, manifestó:

Yo suministré EPIS, medicación de urgencia y oxigenoterapia a residencias que no tenían absolutamente nada. Se nos acabaron las diez botellas de oxígeno. En algunos centros estuvieron hasta casi dos semanas sin que apareciera un médico. En uno de ellos, el más grande, tenían médico, pero era de alto riesgo y no aparecía por allí, solo para firmar los certificados de defunción. Lo que yo vi es que allí no apareció nadie. Vimos morir a personas sin sedación. Podíamos haber salvado a más gente si hubiéramos tenido más medios y tiempo. No había ni paracetamol. Vimos también cadáveres sin retirar. A los que nosotros vimos morir, sufrieron[5].

La operación Bicho estuvo comandada por Encarnación Burgueño a petición de Ayuso, del consejero Enrique Ruiz Escudero y de todo el entramado familiar-empresarial en el PP. El padre de la primera, Antonio Burgueño, fue rescatado por Ayuso como asesor sanitario: había sido previamente un alto cargo sanitario vinculado al PP como gran ideólogo de las privatizaciones con Esperanza Aguirre, conocido por introducir el modelo Alzira de gestión público-privada beneficiando a empresas como Ribera Salud. Sin embargo, su hija no tenía experiencia ni conocimientos al respecto y no visitó ni una sola residencia. La conocida como operación Bicho fue un auténtico fiasco.

Por su parte, Antonio Burgueño, uno de los investigados en la macrocausa de las residencias, ha defendido que él pidió la medicalización y no se aplicó. Señaló que el mando único de las residencias se gestó en una reunión de la presidenta Ayuso y el consejero Ruiz Escudero, que hasta el momento se han librado de procedimientos judiciales.

Las asociaciones que buscan la verdad y justicia para las víctimas de las residencias denunciaron el escalofriante audio de Encarnación Burgueño en el que pretendía hacer caja mientras sus familiares se morían sin atención médica: «Flipo colorines. Joder, como sigamos nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de la Comunidad de Madrid. Vais a hacer que mi sueño se consiga, de tener mi propia empresa», celebraba.

El exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, de Ciudadanos, denunció desde el primer momento los protocolos de la vergüenza; se opuso y presentó su dimisión por motivos éticos. «Tenía un problema: estaba más de acuerdo con lo que decía la oposición que con lo que afirmaba mi presidenta, con la que ya no estaba de acuerdo en nada», explicó. Reyero escribió toda su vivencia en el Gobierno de Ayuso sobre el poder corrupto durante la pandemia en el libro Morirán de forma indigna[6]. En el texto, Reyero tiene la valentía de señalar el problema de las externalizaciones en el sector, hablar con nombres y apellidos y exponer la manipulación por parte de Miguel Ángel Rodríguez –«buscando la vulgaridad y los mensajes faltones»– y la intoxicación culpando falsamente a Pablo Iglesias y al propio Reyero de la tragedia de las residencias.

Manuel Rico se mantuvo como uno de los pocos periodistas de referencia que mostró y puso luz sobre la tragedia. En su investigación ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias[7] describe a los dueños del negocio de las residencias y la discriminación a los mayores. Señala a las principales empresas que se hacen de oro con nuestros mayores, destacando a Clece de Florentino Pérez como la que más lejos ha llevado los negocios junto con la Iglesia –con pactos con los obispados de Huelva y Tenerife y otras entidades religiosas–. Clece es la mayor beneficiaria de la colaboración público-privada, explotando 47 geriátricos con propiedad de alguna administración pública, siendo 33 de ellos residencias propiedad de ayuntamientos. Manuel Rico enumera a los dueños de las principales empresas en este ámbito, como DomusVi, Oprea, Vitalia, Sanitas, Eulen, Sacyr, Ilunion o Emera.

En el relato del escándalo, Rico desarrolla que el Gobierno de Ayuso fue incapaz de mapear con test fiables la situación de las residencias y que cuando lo hizo ya habían fallecido seis mil personas en ellas.

Sobre los protocolos de la vergüenza, Rico aclara que el Gobierno de Ayuso trató de mentir –igual que hiciera Aznar con la autoría del atentado del 11-M– hablando de un solo «borrador enviado por error», cuando el protocolo se había diseñado, aprobado, entregado y aplicado. Se discriminaba en Madrid a las personas que tenían determinado nivel de dependencia o deterioro cognitivo, y solo se realizaron derivaciones a personas mayores de residencias que contaban con un seguro privado para saltarse el sistema establecido por el Gobierno madrileño.

Carlos Mur, como hemos indicado, firmó como director general de Coordinación Sociosanitaria dicho protocolo. Ha encontrado un lugar para trabajar en una clínica privada en Andorra y las familias de las víctimas pidieron su busca y captura porque no apareció para declarar en varias ocasiones. También han tenido que declarar en condición de investigados Pablo Busca, director gerente del servicio de emergencias SUMMA 112; Javier Martínez Peromingo, coautor de los protocolos con Mur y al que sustituyó en la coordinación; y María Jesús Molina, enlace entre los hospitales y residencias en el Severo Ochoa de Leganés. Como hemos dicho anteriormente, ni Ayuso ni su exconsejero Ruiz Escudero han sido llamados a declarar sobre las muertes en residencias, en un juicio que seis años después todavía sigue pendiente.

La mayor violación de derechos humanos en España

Un libro como este, dedicado a explicar cómo una gestión negligente que prioriza la rentabilidad económica produce víctimas, y que advierte de los riesgos de depositar la responsabilidad de nuestras vidas en manos que ya se han mostrado irresponsables, carece de sentido si no dedica un espacio a los propios familiares de estas, no solo explicando su situación y desamparo, sino dándoles la palabra para que expongan su sentir y para exigir justicia. Por eso estas líneas que vienen a continuación y que nos pueden servir de

aviso pertenecen a la asociación 7.291: Verdad y Justicia:

Una sola víctima hubiera sido constitutivo de delito, 91 víctimas hubiera sido una catástrofe, 291 víctimas sería inadmisible, pero es que 7.291 víctimas constituyen la mayor violación de derechos humanos que se ha producido en nuestro país en tiempos de paz. Y estas víctimas no se produjeron por el covid, a este número de víctimas llegamos por una serie de decisiones políticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y digo «decisiones» en plural, porque, aunque se sabía lo que estaba produciendo la aplicación de los protocolos de la vergüenza, no se paralizó su aplicación; bien al contrario, siguieron haciéndose versiones más restrictivas de los mismos para que las personas que vivían en residencias no pudieran recibir la atención sanitaria a la cual tenían derecho. Tal como se publicó en InfoLibre, hubo cuatro versiones de los protocolos llamados «de la vergüenza», aunque también podrían considerarse «protocolos de la muerte».

Los protocolos no fueron recomendaciones, fueron normas administrativas de obligado cumplimiento. Las directoras de residencias, ante la insistencia de las familias para saber por qué sus seres queridos no iban a los hospitales, ni a Ifema, ni a los hoteles medicalizados… respondían unánimemente: «hay unos protocolos que vienen de la Comunidad de Madrid que nos impiden derivarlos al hospital». Los protocolos no solo afectan a las residencias, por su aplicación se crea todo un entramado para que la ratonera sea cerrada herméticamente (se crean geriatras de enlace y se da orden a ambulancias de no recoger a los residentes); porque en esto se convierten las residencias, en ratoneras sin salida para las personas que viven en ellas. Aunque, bueno, esto no es estrictamente cierto, hay una salvedad. Había una vía de escape: tener un seguro médico privado. Por ello la discriminación era múltiple: por vivir en una residencia, por no tener un nivel económico que les permitiera tener una sociedad médica privada, por ser mayores y por no estar sanos; porque no nos engañemos, con la edad media que tienen las personas que viven en las residencias no sería fácil encontrar a alguien que no tuviera cierto grado de deterioro cognitivo o problemas de movilidad.

Las mentiras de Ayuso

Las mentiras en torno a este tema han sido muchas.

La primera: ver cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Natividad Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid decía que las residencias estaban medicalizadas. Mentira. Y no lo decimos nosotros; lo han dicho también personalidades con responsabilidad en ese momento en su entramado político. Nunca. Las residencias nunca se medicalizaron.

Otra de sus grandes mentiras: en todos los lugares del Estado no pasaba lo mismo. En Madrid, entre marzo y abril de 2020 (con tan solo el 13% de las plazas de residencia de toda España), murieron 9.471 residentes, mientras que en toda España murieron 20 mil. Casi la mitad de las muertes de todo el Estado se produjeron en Madrid. ¿Casualidad? No, la gestión homicida del Gobierno de Ayuso fue la responsable por la discriminación que sufrieron las residentes.

Y otra más: las personas mayores no morían de la misma forma en todos los sitios. El informe de la Comisión Ciudadana demostró que el 64% de los residentes que fueron al hospital se salvaron. En Madrid se les prohibió ir a hospitales, por lo cual se los obligó a morir. Pero no una muerte cualquiera, sino una agónica y lenta que hubiera tenido cabida en cualquier manual de tortura. ¿Por qué mentía Ayuso? Por un motivo claro, para ocultar su responsabilidad y su gestión de la pandemia. Porque una crisis –sea de la índole que sea– nunca se debe de gestionar mediante la discriminación. Si discriminas, no gestionas. Si no gestionas algo tan grave por falta de capacidades, no eres apta para el cargo. Si gestiones enviando a los y las profesionales de la medicina a un hospital «milagro» y vacío de utilidad real en lugar de reforzar las residencias, que fueron un caldo de cultivo tremendo para la expansión del virus, no solamente no eres apta, sino que eres culpable de varios delitos. Porque impedir el acceso a la sanidad de las personas más débiles de la sociedad no solo es de una bajeza moral incalculable, también está tipificado en el Código Penal, en concreto en su artículo 511.

Las complicidades necesarias

Pero Ayuso no es la única responsable de la situación en la que nos encontramos las familias seis años después. En la primera ola del covid del año 2020 las cifras cantaban. Madrid era el lugar donde más muertes se producían en las residencias; de hecho, Madrid tiene la terrible marca de ser la región que registró el mayor exceso de mortalidad en Europa durante la pandemia. Sin embargo, ante datos tan evidentes, la Fiscalía Superior de Madrid, con Almudena Lastra al frente –íntima amiga de Ayuso para más señas–, no vio que 7.291 muertes en las residencias madrileñas fuera un dato lo suficientemente significativo como para que la Fiscalía abriera una investigación de oficio. De haberlo hecho, la Fiscalía Superior de Madrid habría ahorrado mucho dolor a las familias de las víctimas; en lugar de eso, lo que ha hecho ha sido incrementar el dolor, aumentar la impunidad de las políticas que no priman el bienestar de la ciudadanía y que las familias de las víctimas hayamos pasado a ser nuevas víctimas: por el daño psicológico y económico de años de lucha contra los diferentes poderes.

De lo que sí es responsable también Ayuso es de cerrar las líneas de investigación que se abrieron en la Asamblea de Madrid en la comisión de investigación para aclarar qué había ocurrido y quiénes eran los responsables. Con tan solo ocho sesiones y cuando se empiezan a oír declaraciones tan graves como que a los residentes con seguro médico privado las ambulancias sí que iban a recogerlos y llevarlos al hospital, donde recibían los cuidados que necesitaban –y a los que tenían derecho por ley, exactamente el mismo derecho que el resto de la ciudadanía–, en un claro ejemplo de discriminación; o cuando se empieza a saber que en los hospitales privados de la región quedaron camas libres. A pesar de que las y los residentes morían de covid (o por otras patologías), ahogados, sin medicación, sin oxígeno, morían de deshidratación, de desnutrición, con llagas, escaras, sin cuidados paliativos…, en los hospitales privados había camas vacías. Aquí hay que recordar que existía un mando único sanitario por el cual desde el Gobierno de

Madrid (sí, el de Ayuso) se podía disponer de esas camas y de los cuidados necesarios. Pero no se hizo y 7.291 personas murieron abandonadas.

Una vez cerrada la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, y a petición de trabajadoras y familiares, se crea la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, formada por un grupo de expertos independientes presidido por el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. El informe es impecable, y hoy por hoy nadie ha podido rebatirlo. A esto hay que sumarle los informes de Amnistía Internacional, de Médicos Sin Fronteras y las actas de cuerpos y fuerzas del Estado. Ninguno de estos documentos ha sido investigado en un juzgado; no han sido tenidos en cuenta tampoco para depurar responsabilidades. Desde la asociación 7.291: Verdad y Justicia seguimos luchando por que aflore la verdad de lo que aconteció en 2020; exigimos que se depuren responsabilidades y nuestro firme compromiso social nos lleva a seguir luchando para que algo así nunca vuelva a ocurrir. Para ello, judicialmente formamos parte de la denuncia colectiva contra altos cargos del Gobierno de Ayuso y socialmente difundimos y realizamos actividades para que las 7.291 víctimas no se olviden, que se las reconozca como víctimas y se les haga justicia, además de judicial, social.

La situación actual en residencias

Además, seguimos denunciando la situación que se vive en las residencias; lugares donde los servicios públicos han quedado denigrados y lo único que interesa es que salgan las cuentas de los negocios privados en que se han convertido. Esta privatización de las residencias nos lleva a dos consecuencias: recortes en alimentación que van contra la salud de las residentes y recortes en personal, algo que también va contra las buenas condiciones de las personas que viven en residencias y que genera pésimas condiciones laborales para las trabajadoras. Y continuamos con nuestra misión a

pesar de los insultos, de las descalificaciones, de recibir los ataques de Ayuso desde las instituciones (¿de verdad se puede consentir que una empleada pública con responsabilidades se permita el lujo de insultar a aquellas personas a las que tiene que servir y a las cuales su gestión ha provocado un dolor incalculable?, ¿cómo se consiente esta falta de respeto desde las instituciones?), de los ataques durante las noches en redes, en las que Miguel Ángel Rodríguez se dedica a descalificar testimonios de hijas de víctimas… No todo vale. La desproporción entre el abuso de poder de Ayuso y MAR, su desprecio, su descrédito y sus malos tratos constantes, frente a las familias de las víctimas debería ser constitutivo de delito.

Seguimos, seguiremos. Tenemos 7.291 motivos para seguir luchando y agradecemos todos y cada uno de los apoyos, el de personas como Manuel Rico, abogados como Alejandra Jacinto, Carlos Castillo y Eduardo Ranz, las personas de la Comisión Ciudadana y personalidades del mundo de la cultura y de grupos sociales. No hay apoyos pequeños. Esto no ha sido una desgracia personal; esto trasciende los límites y es una decisión política (desde los despachos de la Comunidad de Madrid de Ayuso) que ha creado un maremágnum de muertos y se ha convertido en un grave problema social.

7.291: Verdad y Justicia

Ayusadas: el triunfo de la estupidez

Isabel Natividad Díaz Ayuso llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019 con el peor resultado electoral de la historia del Partido Popular. En ese momento, Ayuso, que había sido designada a dedo como candidata por su entonces valedor, Pablo Casado, era casi una completa desconocida para el común de los madrileños.

La líder popular obtuvo en las elecciones autonómicas de mayo de

2019 30 diputados, menos que en los peores tiempos de Alianza Popular. Sin embargo, pudo gobernar por una sonrisa del destino: el apoyo de Ciudadanos con Ignacio Aguado dentro del Gobierno madrileño, con 26 diputados, y de la ultraderecha de Vox con Rocío Monasterio en el pacto de investidura, con 12 diputados, y gracias a que pudo pergeñar el acuerdo de forma separada entre ambos partidos.

En la primera campaña electoral, Ayuso defendió el «derecho a plaza escolar para los concebidos no nacidos». También atacó a la «dictadura de las feministas», al independentismo catalán y a Podemos con todo tipo de barbaridades y bulos, como que los independentistas catalanes permitían que los profesores despreciaran a los alumnos por pedirles ir al baño en castellano o que los propietarios de vivienda se iban a quedar sin casa en cuanto salieran de vacaciones, porque la invadirían unos okupas si ganaba las elecciones Podemos.

En tiempos de banalización, sus idioteces, aparentes meteduras de pata, salieron en los medios de comunicación y fueron reconocidas como ayusadas. A la larga, aunque lo que dijera fueran auténticos disparates, la favorecieron al haber conseguido que se hablara de ella. De esta manera tan poco sofisticada, Ayuso logró ser considerada como alguien políticamente incorrecta y sin complejos entre el electorado de derechas que la desconocía y que no le ponía cara. «Los atascos son una seña de identidad de Madrid», se enorgullecía de las colas del transporte privado en la ciudad. «Cuando empiezan a hablar del empleo basura me parece que es ofensivo para la persona que está, a lo mejor, deseando tener ese empleo basura», decía sobre los trabajos con bajos salarios. «Nadie ha muerto ni va a morir por la contaminación», se jactaba. «El rey de España es el rey de toda Hispanoamérica», reclamaba con una mentalidad totalmente colonizadora. Incluso comparó la petición inicial de tres años de prisión para Cristina Cifuentes por parte de la Fiscalía sobre el caso del máster falso con la del caso del niño asesinado Gabriel, confundiéndose con la condena que pedía el abogado defensor de la asesina y no la acusación, al considerarlas injustas y establecer un cuanto menos sorprendente paralelismo.

No obstante, Cristina Cifuentes acabó siendo absuelta al no poder

acreditarse que diera órdenes directas para falsificar el acta y conseguir un máster sin acudir a clase, sin hacer exámenes y sin realizar el TFM. Una profesora, Cristina Rosado, que acabó pagando el pato, admitió haber falsificado las notas bajo coacciones y amenazada con el despido por María Teresa Feito, asesora de Cifuentes, que fue condenada a menos de dos años de prisión y que no pisará la cárcel. El catedrático Pablo Chico de la Cámara tuvo una implicación directa en la trama de irregularidades y declaró como testigo habiendo ordenado el cambio de nota de dos asignaturas para que Cifuentes consiguiera la titulación. Chico de la Cámara lideró toda la cadena de favores, pero a pesar de que las modificaciones fueron consideradas como fraudulentas, no se le atribuyó delito penal alguno.

Después de este escándalo, Cifuentes no dimitió; solo dejó la política cuando se filtró el vídeo del hurto de unas cremas que robó en un Eroski y por el que acabó siendo indemnizada con 30 mil euros. Ahora ha encontrado su sitio pontificando en los platós de televisión como Mediaset, donde es tertuliana y ha participado como concursante en programas de TVE, como Masterchef y Hasta el fin del mundo. «He estado buscando el TFM. No lo defendí, yo lo entregué y expliqué las líneas generales. Me sorprendió que fue un acto muy informal. No sabía si era un tribunal», se excusó en el juicio Cifuentes. Su perito judicial es Emilio Hellín, que perteneció a Fuerza Nueva y asesinó a la estudiante vasca Yolanda González, víctima de la violencia parapolicial en la Transición. Hellín ha trabajado también para la Policía y Guardia Civil.

Ayuso, que dirigió la campaña digital de Cifuentes en las elecciones de 2015, también, como su predecesora, falseó su currículum e hizo pasar como un supuesto máster en Comunicación Política y Protocolo un cursillo en el Instituto privado Séneca. Ayuso impartió clase como profesora, igual que Cristina Cifuentes, de un curso fake de Estrategias de la Comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos que costaba 950 euros[8]. Varios de sus alumnos serían más tarde enchufados y encontrarían acomodo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid con Ayuso en la presidencia. En la Universidad Rey Juan Carlos había ofertas y han aplicado descuentos para los afiliados del Partido Popular.

En la precampaña, la oposición también denunció que Isabel Díaz Ayuso había utilizado las instituciones a modo de chiringuito propio como candidata del PP al usar sin tener derecho el coche oficial con chófer pagado, que tenía asignado el grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid, sin ser ella en ese momento diputada ni miembro del Gobierno, y de esta forma no pagarlo de su bolsillo y que fuera sufragado con dinero público por los contribuyentes[9].

Miguel Ángel Rodríguez: el poder en la sombra

Desde que es presidenta, Ayuso ha perfeccionado su simplista discurso con la ayuda de Miguel Ángel Rodríguez. Ambos buscan propagar desinformación que estimule los bajos instintos de sus votantes, en lugar de, como se espera de un cargo institucional, exponer información verídica y que cultive nuestra faceta más noble. De ahí sus lemas: «Comunismo o libertad», «Hijo de fruta» contra Pedro Sánchez o «Que te vote Txapote».

Este bucle ayusista fue descrito por Gabriel Rufián: «Ayuso suelta una salvajada. Los medios publican la salvajada. El vídeo de la salvajada corre. La gente normal flipa con la salvajada y la critica. Se abre un debate sobre la salvajada. La salvajada se viraliza. Sus fans les aplauden a ella y a la salvajada. Pasa el día y solo se ha hablado de Ayuso y su salvajada. Se vuelve al principio».

La persona que susurra al oído de Ayuso y tiene el control político de las decisiones de calado es Miguel Ángel Rodríguez, estratega derechista y jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Rodríguez, que fue detenido por cuadruplicar la tasa de alcoholemia al volante en 2013, tiene una dilatada carrera al calor del poder –detrás se esconde una red inmensa de intereses y empresas– y trabajó como mano derecha de Aznar en el PP y de Florentino Pérez en el centenario del Real Madrid. Se le atribuye la frase de que «no hace falta comprar a un medio de comunicación, basta con ser su mejor cliente».

Ha regado de millones a determinados medios para difundir su propaganda. Ana Rosa Quintana ha facturado de Telemadrid más de 20 millones de euros con la productora Unicorn Content.

Detrás de estos medios se esconde toda una cloaca mediática. El marido de Ana Rosa, Juan Muñoz, fue condenado por contratar al excomisario Villarejo y liderar una trama de corrupción urbanística con el PP de Granada. Su exmarido Alfonso Rojo creó el pseudomedio Periodista Digital, que fue financiado por el mismo Villarejo y que ha recibido en los últimos años 333 mil euros del Gobierno de Ayuso. Por su parte, desde 2021 Okdiario de Eduardo Inda ha recibido un millón y medio de euros procedentes de contratos de publicidad institucional de la Comunidad de Madrid. Libertad Digital de Jiménez Losantos, de los comunicadores de cabecera del ayusismo, ha obtenido 1,9 millones de euros de dinero público. El Mundo es uno de los medios que más dinero recibe, con 2,8 millones. EDATV de Javier Negre, en el que trabaja el ultraderechista Vito Quiles, ha recibido un total de 142 mil euros[10].

En 2021 el PP de Madrid tuvo la audacia de adelantar las elecciones debido a un pacto del PSOE y Ciudadanos, hecho bajo cuerda entre Inés Arrimadas y José Luis Ábalos para una moción de censura en Murcia contra el PP. Ayuso contraatacó, lo aplacó y consiguió un magnífico resultado rozando la mayoría absoluta con 65 diputados, más del doble que en 2019. Esa misma noche, Miguel Ángel Rodríguez escribió un mensaje a Pablo Casado en el que afirmaba que le había «demostrado ser una mala persona» por aprovecharse de la victoria electoral e impedir que Ayuso saliera sola a celebrarla durante al menos unos segundos. Desde entonces comenzó la contienda entre Ayuso y Casado, que ganó la lideresa porque era la que tenía poder para financiar institucionalmente a los medios de comunicación. El Gobierno ayusista se ha ganado los favores de todo un entramado mediático. En el caso del grupo Planeta, que controla Atresmedia, con una universidad privada y un contrato a dedo de 14,5 millones de euros, según denunciaron Público y CTXT[11].

En Telemadrid se ha gastado más de 2,25 millones de euros en el programa de Antonio Naranjo, que se lleva 6.500 euros mensuales

de sueldo público a pesar de criticar las supuestas «paguitas» a migrantes. El director de la cadena pública, José Antonio Sánchez, aparecía en los papeles de Bárcenas con pagos del PP a petición de Miguel Ángel Rodríguez. Antes de que Ayuso lo pusiera al frente de Telemadrid, en el pasado fue premiado por Rajoy con el puesto de director de TVE y por Esperanza Aguirre también en el de Telemadrid.

Por otra parte, Miguel Ángel Rodríguez reconoció en el juicio contra el fiscal general del Estado que se inventó un bulo y, en marzo de 2026, fue imputado por señalar y difundir datos de dos periodistas del diario El País. El medio El Plural publicó que El País había retirado la denuncia; este último tardó más de 24 horas en desmentir la noticia, y ello no evitó una avalancha de críticas y la huida de suscriptores. Chema Garrido, director de El Plural, expuso que era un orgullo que una información veraz y la presión de muchos lectores hubieran provocado que se reculara.

Lideresa del facherío y de la indecencia

En febrero de 2019, Ayuso acudió como una de las representantes del PP a la famosa manifestación facha de la madrileña plaza de Colón, en la que participaron por primera vez de forma conjunta y unificada las tres formaciones de derechas, PP, Ciudadanos y Vox, conocidas popularmente como el Trifachito. El acto fue presentado por los comunicadores vinculados a la derecha mediática: Carlos Cuesta, María Claver y Albert Castellón. Al acabar el alegato, los políticos, en un error estratégico, rápidamente improvisaron rompiendo el protocolo y subieron al escenario para hacerse la foto e intentar capitalizar la protesta derechista. De la fila delantera de aquella icónica instantánea subidos al escenario, solo resiste en la primera línea política el ultraderechista Santiago Abascal. La mayoría de los protagonistas de la «foto de Colón», Pablo Casado, Albert Rivera, Rocío Monasterio, Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros, Ignacio Aguado o Begoña Villacís, han sido desplazados y se encuentran fuera de los espacios de poder de los partidos

políticos a nivel nacional.

En un segundo plano se situaban Ayuso y José Luis Martínez Almeida, el entonces desconocido candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid. Ambos llevaban una bandera de España colgada al cuello para tratar de llamar la atención más que el resto. Teodoro García Egea, secretario general del PP de Casado, observó desde el balcón y fotografió la primera gran concentración en contra de las negociaciones de Pedro Sánchez con el independentismo catalán. Para poder asistir, también cambiaron sus planes a última hora Núñez Feijóo y Juan Manuel Moreno Bonilla, primer presidente del PP en la Junta de Andalucía gracias a un acuerdo con Vox a finales de 2018.

A la semana siguiente de aquella manifestación, el presidente Pedro Sánchez, que había llegado a la Moncloa a través de una moción de censura a Rajoy en junio de 2018 y gobernaba en minoría con 85 diputados, no consiguió aprobar sus presupuestos y precipitó la convocatoria de elecciones para abril de 2019, usando como mensaje electoral de movilización aquella estampa de todo el facherío patrio reunido en el mismo lugar. Sánchez lanzó este órdago con el asesoramiento de Iván Redondo, su hombre de máxima confianza en la Moncloa, y le salió bien la jugada; en esta apuesta al todo o nada propia del mus el PSOE logró un resultado de 123 diputados, y en la repetición electoral en noviembre bajó a 120 diputados, pero pactaría la formación de gobierno con Podemos.

Isabel Díaz Ayuso, en línea con el posicionamiento de su protectora Esperanza Aguirre, se había mostrado partidaria de la abstención por parte del PP en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, para que no gobernara de la mano de «los independentistas y el entorno político de ETA». Rápidamente fue desautorizada por parte de la guardia pretoriana de Génova, con García Egea a la cabeza, cuando todavía era candidata e intentaba ser presidenta con un pacto con Ciudadanos y Vox.

Ayuso lograría finalmente conformar gobierno en la Comunidad de Madrid. Los primeros nombramientos y fichajes discutidos fueron Rafael Pastor, responsable de Seguridad de la empresa municipal en la tragedia del Madrid Arena; Pedro García Aguado, conocido por el

programa Hermano Mayor y que duró unos meses como director general de Juventud; y, para el Centro de Asuntos Taurinos, el torero Miguel Abellán, que se había quedado sin escaño de diputado y había admitido no tener ni idea de economía ni formación de ningún tipo. En el segundo mandato, Ayuso creó el chiringuito de la Oficina del Español y puso a dedo a Toni Cantó, que había pasado antes por Vecinos por Torrelodones, UPyD y Ciudadanos, donde metió en política a Alvise como su jefe de Prensa. Cantó, que se había quedado fuera de las listas electorales del PP, tuvo que ser recolocado por Ayuso, inventándose que estaba empadronado en Madrid con una triquiñuela al renovar el DNI.

Tras sus dos primeros mandatos, Ayuso ha pasado de 720 mil votos y 30 diputados –con el 22,23% de los sufragios– en sus primeras elecciones de 2019 a los 1,6 millones de votos y 70 diputados –con el 47,32%– en los últimos comicios de 2023. La líder madrileña del Partido Popular se ha convertido en la gran favorita de los electores de derechas y ha ido derrotando a todos sus adversarios políticos. En su espectro ideológico ha defenestrado a Ignacio Aguado y Edmundo Bal, de un Ciudadanos desaparecido, y a Rocío Monasterio, de Vox. Por el flanco del ala progresista ha superado en votos a candidatos dispares como Ángel Gabilondo y Juan Lobato en el PSOE, o a Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Mónica García en los partidos más a la izquierda. Asimismo, la propia Ayuso liquidó al dirigente político que la eligió e impulsó como candidata en Madrid, Pablo Casado. «Congeniamos enseguida. Es muy creativo, un liberal puro, muy ideológico. Y siempre he estado en su equipo. Ahora algunos dicen que soy una traidora y una chaquetera, pero yo siempre he sido de Pablo», explicó Ayuso nada más ser nombrada candidata del PP por Casado para las elecciones autonómicas de 2019.

Ayuso y Casado habían coincidido y compartido amistad en las Nuevas Generaciones del PP en Madrid, se foguearon en la agrupación del distrito Moncloa-Aravaca y ambos colaboraron como becarios de la FAES de José María Aznar. Ayuso había pasado por alguna agencia de comunicación, por Radio Marca y por Radio Intercontinental, donde su jefe, como se expuso en las declaraciones aquí transcritas previamente, fue el falangista García Serrano. Hasta que Isabelita conoció a Esperanza Aguirre y esta le indicó el

camino. Después de que Ayuso fuera proclamada presidenta de la Comunidad de Madrid, un dirigente sin revelar cercano al presidente popular dijo en un texto recogido en elDiario.es: «Es una testaferro de Casado, que ha decidido gobernar en Madrid desde la sede de la calle Génova a través de ella»[12]. Se equivocaba. Ayuso se convirtió en la voz del facherío trumpista y del nacionalcatolicismo, a pesar de que en sus primeras entrevistas admitía que no era creyente, que no iba a misa y que había perdido la fe a los nueve años.

Ayuso sabe interpretar, con total descaro y sin escrúpulos, el papel que le toque para medrar en la cucaña del poder diciendo las mayores chorradas, mientras ejecuta cruelmente una política de la indecencia sin importarle vulnerar los derechos más elementales.

Más de 11 mil niños madrileños de familias perceptoras de la renta mínima comieron en pandemia durante semanas productos precocinados de las multinacionales de comida rápida Telepizza y Rodilla, que contaban con una adjudicación de la Comunidad de Madrid. Los padres y madres, que tenían que llevar el libro de familia a los establecimientos, denunciaron que con el tiempo varios niños habían engordado por los efectos de comer durante 50 días seguidos estos productos nada saludables. El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, había montado dos franquicias de Rodilla, de las que se desprendió cuando entró en política. Ante las críticas de la oposición, la presidenta del PP defendió su adjudicación con el comodín venezolano habitual de la derecha: «A los niños les gusta la pizza y no es un problema para ellos. Quizá prefieran el menú de los niños de Venezuela, es decir, nada».

Desde octubre de 2020, casi dos mil niños del asentamiento de la Cañada Real se encuentran sin suministro eléctrico, lo que supone una flagrante violación de los derechos humanos. En un caso de total inacción, el Gobierno del PP de Ayuso se ha inhibido siempre ante los cortes de luz de la empresa Naturgy (anteriormente Gas Natural Fenosa), controlada por el fondo estadounidense BlackRock, que fue privatizada por José María Aznar y cuyo consejero fue Felipe González por 127 mil euros.

El Ayuntamiento de Madrid de Almeida también ha participado en la operación de acoso y derribo inmobiliario en la Cañada Real y

echó abajo ilegalmente una vivienda aprovechando que un vecino se había ido a Marruecos a cuidar de su madre. En julio de 2025 fue condenado el alto cargo municipal que dio la orden.

Las decisiones inhumanas de Ayuso han afectado a la vida de miles de niños de familias pobres durante meses, en el caso de la comida rápida, y años, en el de la Cañada Real. Pero de momento no tiene costes electorales ni judiciales para ella. Esos niños no votan y en el censo electoral de la Comunidad de Madrid –de más de 5,2 millones de habitantes– poco cuentan sus familiares. En contraposición, Ayuso encontró un caladero de votos con la insolidaridad de la libertad de irse de cañas en plena pandemia. Mientras muchos morían en residencias, en la escala de valores del carácter inmoral de Ayuso lo primero era el cálculo electoral, con un álgebra criminal de voto, favoreciendo a todo el business de la hostelería aunque afectara a la salud de los más mayores.

La periodista Alicia Gutiérrez explica en su libro Porque me da la gana. Ayuso, la nueva lideresa[13] el que considera el motivo de su auge gracias al lema interclasista de que los ricos y los pobres se entienden en la terraza del bar: «Comprender la importancia de la hostelería en una gran urbe donde el tejido asociativo vecinal se fue deshilachando durante la Transición y donde encontrarse hoy con conocidos y amigos se produce casi de modo indefectible en bares, […] seducir al electorado con mantras donde libertad se equipara con irse de cañas». El polémico presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, llamó «tabernarios» a los votantes del PP madrileño:

Un amplio sector social que se nuclea en torno al mundo de las tabernas, los bares, los restaurantes y otros establecimientos similares. Establecimientos que Madrid tiene en abundancia. Posiblemente más que ninguna otra ciudad del mundo. A partir de esa potencialidad numérica, que incluye a los clientes más habituales de tales establecimientos, la candidata y sus asesores han desarrollado un discurso sociológico y político que, bajo la bandera de la libertad –libertad de tabernas–, ha logrado movilizar un amplio apoyo. Ayuso se presenta como alternativa a Pedro Sánchez y como una abanderada de aquellos que no quieren verse limitados

vitalmente por las restricciones de la pandemia. Todo lo cual conforma un variopinto sustrato de apoyos integrado por empresarios del sector que operan como eficientes agentes electorales permanentes, junto con bastantes jóvenes y adultos habituales de tal tipo de establecimientos. La «tabernidad», que se presenta incluso como parte sustancial del «estilo» y la «forma de ser» de Madrid y los madrileños, ha permitido aglutinar a sectores sociales «nuevos», junto a núcleos importantes de la derecha tradicional y mediática[14].

Ayuso y su padrino Florentino: Púnica, Ifema, Zendal y los afectados del Metro

Díaz Ayuso, entonces conocida como Isabelita en el PP, fue puesta a dedo con veintisiete años como asesora por Esperanza Aguirre, cobraba 4.500 euros mensuales en uno de sus chiringuitos, Madrid Network, de 2008 a 2011. Un trabajo que le hizo ganarse las burlas de muchos por haber controlado el perfil de la cuenta de Twitter (ahora X) del perro Pecas de Esperanza Aguirre. Sin embargo, lo realmente reseñable de su participación como responsable digital del PP en Madrid Network fue su participación en la desinformación orquestada por el cabecilla de la trama Púnica para contrarrestar información negativa.

Ayuso tenía contacto directo con el conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, para hacer frente al impacto de la información negativa contra el PP a través de cuentas falsas en la industria de la desinformación y los bulos. Los servicios de Alejandro sobre reputación online también fueron contratados por Florentino Pérez para que hiciera lo mismo con el Real Madrid, creando hasta un medio de comunicación falso: Diariobernabeu.com. De Pedro –de la empresa Eico Online que contrataba la Púnica para las campañas en internet– intercambiaba mensajes asiduamente con Florentino y Ayuso sobre manipulación informativa digital, y estos intoxicaron la conversación pública con una red de perfiles falsos coordinada con

granjas de bots[15]. Entre las estrategias abundaban los chistes clasistas sobre ciudades obreras como Parla y el encubrimiento de casos de corrupción como el de Ignacio González[16].

Como tratamos en el libro Florentino Pérez, el poder del palco[17], el presidente de ACS y del Real Madrid aparecía en esta trama de corrupción. Tuvo que declarar en condición de testigo en la Audiencia Nacional por pagar 300 mil euros a Alejandro de Pedro para crear un aparato de desinformación favorable en redes al Real Madrid. Cuando el juez Eloy Velasco le preguntó si le habían pedido dinero para financiar al PP, Florentino Pérez respondió que le molestaba su pregunta, que la gente que realmente lo conoce no se atreve a hacerle una pregunta así.

El máximo mandatario del Real Madrid presumía de su poder en la sombra para intoxicar la esfera pública: «Lo de las redes ha hecho un efecto muy grande. Diego Torres [periodista de El País], que me daba hostias hasta en el carnet de identidad, ahora le pegan unas hostias en internet, que es que lo fumigan. Es que antes se iba de rositas, pero ahora hay un montón. Y ¡pum! Lo matan. Entonces el tío ya no se va de rositas», decía en los audios publicados por El Confidencial. Entre Florentino y De Pedro tenían contacto directo y se estableció un estrecho vínculo personal, según los SMS del caso y en los que Florentino le daba instrucciones hasta que notó que la estrategia del pseudomedio no le funcionaba[18].

Florentino Pérez actúa como el padrino del cortijo madrileño del PP en Madrid. Nada ha cambiado respecto a cuando pagó a De Pedro, en cuya trama participaba una joven, supuesta periodista, llamada Isabel Díaz, más tarde conocida como Ayuso.

Una de las obras paradigmáticas del Gobierno de Ayuso lleva la firma de la constructora de Florentino –ACS en la obra como Quirón en la sanidad son las empresas que más licitaciones reciben por parte de la Comunidad de Madrid–. Esa obra es el pabellón de hospitalización del Zendal, adjudicada a la constructora Dragados de Florentino con un alto coste en ladrillo y hormigón, cuando lo que se necesitaba eran más refuerzos en la sanidad pública ya existente para atender a los enfermos de coronavirus. Este gran pelotazo, que el sector sanitario calificó como «hospital fantasma» y en el que también participaron las empresas Sacyr y San José, costó

más de trescientos millones de euros. Su mantenimiento fue adjudicado a Ferrovial de Rafael del Pino, que también pertenece al cártel de las constructoras en España. La obra triplicó lo presupuestado.

Los sanitarios del Zendal denunciaron que no se trataba de un hospital, sino de un despropósito, porque no tenía laboratorios, quirófanos, radiólogos ni plantilla propia. La plataforma Sanitarios Necesarios Madrid lleva desde su inauguración en 2020 concentrándose en las puertas del Zendal contra la gestión y su funcionamiento. A tres años de la inauguración, la Comunidad de Madrid con Ayuso seguía adjudicando contratos de emergencia para saltarse los controles y en 2023 se le concedió una adjudicación a la empresa de una exconcejala del PP por vigilar el hospital. La concesión de cuatro millones de euros fue para Ariete Seguridad de Silvia Cruz, que había sido concejala en Alcorcón por el Partido Popular hasta el año 2017[19].

El ideólogo de este hospital fue Alejo Miranda de Larra, director de Infraestructuras Sanitarias. Inauguró el Hospital Isabel Zendal junto a Díaz Ayuso y Pablo Casado. Las cámaras captaron que a la pregunta de Pablo Casado de si había quirófanos, la presidenta madrileña mantuvo silencio y Miranda de Larra contestó que lo que había eran salas de procedimientos (de curas). Alejo Miranda de Larra, senador por Cuenca a pesar de no tener ninguna vinculación con la provincia, señaló que se trataba de un «pequeño Ifema mejorado».

En Ifema, el anterior hospital durante la pandemia, la Comunidad de Madrid adjudicó a dedo más de 30 contratos por siete millones de euros para la empresa de servicios de limpieza Clece de Florentino Pérez. Las limpiadoras trabajaban precarizadas, manejando residuos tóxicos y estaban en contacto directo con los pacientes limpiando sus casas. Sin embargo, la empresa les negó el plus de toxicidad. Ayuso acudió en mayo de 2020 a Ifema y montó un espectáculo dantesco de autobombo saltándose las medidas de protección y repartiendo bocadillos de calamares en un puesto. La presidenta defendió sin criterio médico alguno este hospital improvisado: «Ifema nos ha enseñado grandes cosas y nos ha demostrado que en los hospitales que tienen los techos altos y que

son amplios los pacientes sanan muy bien, porque tienen largos pasillos para caminar y desde su puesto un médico puede contralar a muchas personas a la vez».

En otras obras públicas también ha habido un gran número de afectados. Es el caso de los fallos en la ampliación de la línea 7B del Metro en San Fernando de Henares. Consistió en una chapuza del Gobierno de Esperanza Aguirre y Dragados de Florentino Pérez, que hicieron caso omiso a estudios geológicos en la obra inaugurada en 2007, en vísperas de las elecciones autonómicas.

Las viviendas empezaron a presentar grietas estructurales y tuvieron que ser derribadas por peligro de colapso debido al diseño deficiente de las infraestructuras. Quisieron inaugurar la ampliación con prisas, antes de las elecciones a la Asamblea de Madrid que ganaría con mayoría absoluta Esperanza Aguirre, quien ostentaba el poder desde la legislatura marcada por el Tamayazo de 2003 con los dirigentes tránsfugas del PSOE para que gobernara el PP.

La expresidenta Aguirre se excusó años más tarde diciendo que «los vecinos tienen que comprender que ni yo ni Ayuso somos quienes hacemos los informes técnicos para que las obras se desarrollen». Ayuso inició el derrumbe masivo de viviendas y los afectados denunciaron que la presidenta se había gastado el triple en corridas de toros que en ayudas a las familias damnificadas del pufo. Alejandro Escribano, portavoz de la Plataforma de Afectados L7B Metro, ha liderado las manifestaciones contra el Gobierno del PP. «Ha habido más de 600 viviendas afectadas. Ayuso dijo que solo atendería a 77 expedientes que afectan a las viviendas en derribo. La propuesta no garantiza que los vecinos que se han quedado sin casa puedan adquirir otra de similares características. No somos de los suyos, no somos del barrio de Salamanca. Los causantes de nuestra desgracia son las ambiciones de poder de Aguirre y Ayuso sumadas al ansia de beneficios de Florentino Pérez», alegó[20].

El clan de la quironesa

El PP de Ayuso no solo deja por inacción que se mueran ancianos en residencias, también hace negocio con la salud de los ciudadanos. En 2022 Pablo Casado señaló la corrupción del clan Ayuso y lo dejaron solo. De hecho, hubo una manifestación en apoyo de la presidenta madrileña. Como escribía Valle-Inclán: «En España […] se premia el robar y el ser sinvergüenza». Tomás Díaz Ayuso, su hermano, fue denunciado por Casado por las comisiones de mascarillas vendidas al triple de coste –283 mil euros– facturando más de un millón y medio en lo peor de la pandemia a través de la sociedad Priviet Sportive, de su amigo de la infancia Daniel Alcázar. Ana Dávila-Ponce de León, como viceconsejera, firmó la resolución de adjudicación en abril de 2020. Dimitió a los pocos meses, después fue promocionada por Ayuso y en la actualidad es la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

Según ha contado la propia Ayuso, su familia se dedicó a un bar de pueblo en Sotillo de la Adrada en Ávila, después abrieron una papelería y una empresa de impresoras, y más tarde montaron una compañía de compra y venta de material sanitario que quebró durante la crisis económica. En 2011 Ayuso ya era diputada con treinta y tres años en la Asamblea de Madrid e intercambiaba correos con un directivo de Avalmadrid como mediadora, para que la empresa participada por su padre, MC Infortécnica, recibiera un préstamo de cuatro millones de euros[21]. El dinero nunca fue recuperado. «Mi familia no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil», escribió en un correo Ayuso a un directivo de Avalmadrid. En otro mensaje se delataba: «Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para dejar morir la otra»[22]. Además, los padres se descapitalizaron sin patrimonio donando sus propiedades a sus hijos. Al haberle su padre regalado a Ayuso un piso, el inmueble quedó fuera del perímetro de lo embargable por acreedores y se libraban de una posible incautación, lo mismo con la vivienda en Sotillo de la Adrada a su otro hijo, Tomás Díaz Ayuso. La Sala Segunda del Tribunal Supremo inadmitió a trámite una querella contra Ayuso por alzamiento de bienes, ya que no apreciaba «la concurrencia de indicios consistentes contra la persona aforada en ese momento». «No intervino en la operación de crédito o de aval; no era avalista ni deudora; no consta que

conociera la deuda; y no se aprecia ningún indicio de que actuara en connivencia con los demás querellados para evitar el pago de la deuda de aquella sociedad», agregó para desestimar[23].

Si el hermano de Ayuso fue pillado con comisiones de mascarillas y acabó dimitiendo Pablo Casado. Alberto González Amador, novio de Ayuso, fue denunciado por fraude a Hacienda y acabó dimitiendo Juan Lobato, candidato del PSOE, y condenado el fiscal general del Estado.

En junio de 2021 el diario La Razón de Marhuenda publicó como exclusiva que Ayuso se marchaba de vacaciones y escapada romántica a Ibiza con un técnico sanitario con el que llevaba varios meses de relación y que lo había conocido a través de su hermano Tomás Díaz Ayuso[24]. Alberto González, alias Quirón, es la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Fue denunciado por una trama de facturas falsas para evitar pagar impuestos de sus negocios en lo peor de la pandemia. El principal cliente se trataba de la empresa privada de la sanidad Quirón, de las mayores contratistas sanitarias en Madrid. Tras el fraude fiscal por el que se lo imputó, Alberto González compró con las comisiones sanitarias un ático de lujo en Madrid, en el que vive con Ayuso a pierna suelta, al mismo tiempo que las listas de espera en la sanidad madrileña superan el millón de personas y se aumenta el tiempo para una operación a 48,92 días de media[25].

Mientras la inmensa mayoría de los jóvenes no puede acceder a una vivienda digna en Madrid, Ayuso, que vive en un ático de lujo con su novio, obtuvo de joven una casa denunciada por alzamiento de bienes con el impago del crédito de Avalmadrid. En el verano de 2025 Ayuso disfrutó de un fin de semana sin informar del uso que hizo de un palacete comprado a Juan Luis Hinojosa –antiguo propietario de Cortefiel, que pertenece a una de las familias con más cotos privados de caza en España– por la Comunidad de Madrid y adquirido por más de cuatro millones de euros de dinero público en 2023.

En pandemia Ayuso pasó más de dos meses en un apartamento de lujo a precio de saldo de Kike Sarasola, un empresario en busca de favores e intereses bien conocido en la política española. Por ese hecho Ayuso intentó defenderse en el programa Salvados enseñando

la factura de 80 euros al día pagados desde su cuenta personal por alojarse en la suite. Pero Sarasola no solo ha sido cercano a la presidenta madrileña, hizo lo mismo con Albert Rivera al participar en conferencias de Ciudadanos a favor de la explotación de los vientres de alquiler y pidiendo traer el modelo de Estados Unidos a España. Curiosamente Rivera vivió dos años en un piso cedido por él. También la Comunidad de Madrid financió unas jornadas sobre turismo en Okdiario de Inda donde uno de los invitados fue Kike Sarasola, que defendió su negocio de pisos turísticos y llamó «terroristas» a los que protestan contra el modelo de turismo masivo. Para más inri, el padre de Sarasola era íntimo de Felipe González e invitó al narco Pablo Escobar a la investidura de González como presidente en 1982.

La consejera de Sanidad en la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha incumplido la ley al omitir en el portal de transparencia que trabajó 17 años como directora asistencial para la clínica privada Quirón, clave de bóveda de todas las corruptelas del clan de la quironesa Ayuso en la privatización de la sanidad. En plenas Navidades de 2025 aprobó un pago extra de más de 100 millones de euros a Quirón por «restablecimiento del equilibrio económico del contrato de concesión de gestión de servicio público». Es tal el descaro que ya ni se esconden. El grupo Quirón dio por hecho, antes de ser adjudicado, un contrato del Gobierno de Ayuso en marzo de 2026 y publicó hasta ofertas de trabajo en la web antes de obtener la concesión de 140 millones de euros para dirigir un centro público donde se analizan las pruebas de 1,4 millones de madrileños[26].

El grupo sanitario Quirón, que pagó el ático de lujo en el que vive Ayuso con su novio Alberto González Amador, es la empresa más beneficiada con un botín de adjudicaciones públicas y privatizaciones. El Gobierno de Ayuso le ha pagado a Quirón más de 5.000 millones de euros entre los años 2019 y 2024, transfiriendo 2.208 millones de euros más de lo presupuestado. Fresenius, matriz alemana de Quirón, ha crecido un 11% con el negocio sanitario en España y tiene en el Gobierno madrileño a su mayor socio de adjudicaciones[27]. La filial española ha aportado 669 millones de euros, superando incluso en beneficios a la parte de Alemania. Los accionistas de Fresenius de Quirón son la fundación

Else Kröner-Fresenius, con un 27% de las acciones; los fondos de inversión estadounidenses BlackRock, Fidelity y Vanguard; el banco noruego Norges Bank; y el fondo alemán Deka[28].

González Amador está procesado por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental, pero su juicio no se espera hasta pasadas las elecciones de 2027. El secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, se reunió con él para tapar la cuestión y controlar los tiempos y la estrategia que debe seguir. Tanto Serrano como Ana Millán configuran la guardia pretoriana al servicio de Ayuso para tapar todos estos escándalos. Por ejemplo, fue Serrano quien se reunió con la víctima que denunció por acoso al alcalde de Móstoles. Y respecto al crimen de las residencias de mayores, Serrano dijo que la película-documental 7291 no interesaba a nadie y atacó a TVE por emitirla. En cuanto a Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, ella también cuestionó el acoso denunciado por una concejala de Móstoles y trató de silenciarlo amenazándola con abrirle un expediente. Los casos de corrupción también la acecharon y fue investigada por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Una nueva jueza dio carpetazo al tema y archivó el caso[29].

La libertad para Ayuso consiste en privatizar a mansalva con un modelo público-privado letal contra los ciudadanos. La salud es lo que menos le importa y acabará privatizando hasta el aire que respiramos. Para la presidenta de Madrid todo se convierte en una oportunidad de negocio. No solo ha entregado grandes contratos a la empresa privada Quirón en sanidad saltándose todos los procedimientos, no solo su pareja y su hermano se han lucrado con comisiones sanitarias…, en la epidemia del coronavirus Ayuso privatizó el plan de vacunación mientras cerraba centros de salud.

La Comunidad de Madrid subcontrató por más de 800 mil euros a Cruz Roja para administrar las vacunas y llegó a un acuerdo con El Corte Inglés, Acciona y Banco Santander para que vacunaran a la población en sus instalaciones y en los hospitales privados HM y Quirón. El responsable de Sanidad Pública en CCOO, Sergio Fernández, denunció esta privatización de la vacunación que arrinconara a los centros sanitarios públicos: «Es mucho más sencillo externalizar que aumentar las plantillas de una atención

primaria agonizante. Ayuso elige privatizar antes que invertir en la sanidad pública porque es un modelo opaco en el que se esconden los detalles del negocio»[30].

En diciembre de 2025 destaparon otro escándalo en la sanidad público-privada de la Comunidad de Madrid. Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud, empresa privada que controla el hospital de Torrejón en Madrid, fue grabado dando instrucciones para aumentar las listas de espera a conciencia para aumentar los beneficios económicos[31]. Así funciona la sanidad en Madrid con la presidenta Ayuso al servicio de los grandes negocios privados.

---

[1] S. Plaza, «Madrid, la comunidad con más exceso de mortalidad en la pandemia de covid-19», El Salto, 12 de noviembre de 2024, disponible en: [https://www.elsaltodiario.com/comunidad-madrid/madrid-comunidad-exceso-mortalidad-pandemia-covid-19].

[2] Informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, disponible en: [https://www.elpollourbano.es/wp-content/uploads/2024/04/234informe-de-la-comision-ciudadana-por-la-verdad-en-las-residencias-de-madrid.pdf].

[3] F. Peinado, «La Comunidad de Madrid envió al menos cuatro correos para excluir de hospitales a ancianos de residencias», El País, 9 de junio de 2020.

[4] M. Huertas, «Recordando las más de 7.291 muertes en residencias en 2020», El Salto, 9 de marzo de 2026, disponible en: [https://www.elsaltodiario.com/comunidad-madrid/recordando-7-291-muertes-2020].

[5] Cadena SER, «“Hay personas que murieron sin condiciones dignas”: el testimonio del drama en las residencias de ancianos», 18 de diciembre de 2020.

[6] A. Reyero, Morirán de forma indigna, Madrid, Libros del KO, 2022.

[7] M. Rico, ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias, Barcelona,

Planeta, 2021.

[8] J. J. Mateo, «La cantera de Díaz Ayuso en la Universidad Rey Juan Carlos», El País, 8 de octubre de 2019.

[9] Europa Press, «Díaz Ayuso usa un coche oficial, al que no tiene derecho, para hacer campaña», Público, 14 de marzo de 2019.

[10] A. Martín, «Estas son las cifras del dinero que ha dado la Comunidad de Madrid a los medios de derecha y extrema derecha», Diario Red, 19 de enero de 2026, disponible en: [https://www.diario-red.com/articulo/medios/son-cifras-dinero-que-ha-dado-comunidad-madrid-medios-derecha-extrema-derecha/20260118184605062177.html].

[11] M. Mora y P. L. González de Lara, «Ayuso se gana al grupo Planeta con una universidad privada y un contrato a dedo de 14,5 millones», CTXT, 17 de abril de 2021, disponible en: [https://ctxt.es/es/20210401/Politica/35712/Ayuso-Grupo-Planeta-universidad-privada-Atresmedia-Jose-Creuheras-Mauricio-Casals.htm].

[12] I. Aduriz, «Nuevas Generaciones toma el poder en el Partido Popular», elDiario.es, 4 de octubre de 2019, disponible en: [https://www.eldiario.es/politica/cantera-nuevas-generaciones-pp-casado_1_1334485.html].

[13] A. Gutiérrez, Porque me da la gana. Ayuso, la nueva lideresa, Madrid, Akal, 2023.

[14] J. F. Tezanos, «Globos políticos y elementos singulares», Temas para el Debate (mayo de 2021).

[15] D. Delgado y J. Macías, «De cómo la Púnica y Díaz Ayuso ilustran el “astroturfing” y los “troll center”», CTXT, 26 de enero 2025.

[16] InfoLibre, «Díaz Ayuso escribió a un conseguidor de “Púnica” para encubrir noticias sobre las investigaciones a Ignacio González», 11 septiembre de 2019.

[17] F. Loaiza, Florentino Pérez, el poder del palco, Madrid, Akal,

2022.

[18] A. Gil y P. Águeda, «El conseguidor de la Púnica montó un falso diario digital al servicio de Florentino Pérez y el Real Madrid», elDiario.es, 29 de marzo de 2017.

[19] K. Agharbi, «Los contratos a dedo de Ayuso para una emergencia que ya no existe: 4 millones para una exconcejala del PP por vigilar el Zendal», Cadena SER, 2 de agosto de 2023, disponible en: [https://cadenaser.com/cmadrid/2023/08/02/los-contratos-a-dedo-de-ayuso-para-una-emergencia-que-ya-no-existe-4-millones-para-una-exconcejala-del-pp-por-vigilar-el-zendal-radio-madrid/].

[20] M. González, «Alejandro Escribano: "La propuesta de Ayuso a los vecinos de San Fernando es lo más parecido a una extorsión"», Mundo Obrero, 18 de enero de 2023, disponible en: [https://mundoobrero.es/2023/01/18/alejandro-escribano-la-propuesta-de-ayuso-a-los-vecinos-de-san-fernando-es-lo-mas-parecido-a-una-extorsion/].

[21] J. J. Mateo, «Los contactos de Díaz Ayuso con Avalmadrid», El País, 7 de agosto de 2019.

[22] M. Rico, «El correo de Ayuso que la delata: "Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para dejar morir la otra», InfoLibre, 9 de agosto de 2019.

[23] Consejo General del Poder Judicial, «El Tribunal Supremo inadmite la querella de la asociación de abogados ALA contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por alzamiento de bienes», 23 de noviembre de 2021.

[24] V. Sánchez, «Exclusiva: el hermano de Ayuso le presentó a su nueva pareja», La Razón, 10 de junio de 2021.

[25] J. Carrera, «La lista de espera sanitaria en Madrid sigue superando el millón de personas y aumenta el tiempo para una operación», Cadena SER, 17 de marzo de 2026, disponible en: [https://cadenaser.com/cmadrid/2026/03/17/la-lista-de-espera-sanitaria-en-madrid-sigue-superando-el-millon-de-personas-y-

aumenta-el-tiempo-para-una-operacion-radio-madrid/].

[26] F. Peinado, «Nuevo contrato para Quirón en Madrid: la empresa se dispone a gestionar un laboratorio donde cunde el temor a despidos», El País, 11 de marzo de 2026.

[27] F. Peinado y J. J. Mateo, «La matriz alemana de QuirónSalud celebra que su negocio en España crece un 11%, tras un pago de casi 500 millones del gobierno de Ayuso», El País, 26 de febrero de 2026.

[28] M. Pérez, «El holding de Quirón gana más en España que en Alemania», La Vanguardia, 2 de marzo de 2026.

[29] P. Águeda, «Una nueva jueza corrige seis años de investigación y archiva el caso de corrupción contra la número 3 de Ayuso», elDiario.es, 17 de marzo de 2026, disponible en: [https://www.eldiario.es/politica/nueva-jueza-corrige-seis-anos-investigacion-archiva-caso-corrupcion-numero-3-ayuso_1_13073911.html].

[30] M. Zas, «Los médicos discuten la vacunación en centros privados: “Madrid elige privatizar antes que invertir en la sanidad pública”», elDiario.es, 2 de mayo de 2021, disponible en: [https://www.eldiario.es/madrid/hospitales-privados-vacunar-madrid-centros-salud-desplazados_1_7881417.html].

[31] P. Linde, «La intervención completa del CEO de Ribera: “Vamos a adecuar el servicio al dinero que nos van a entregar”», El País, 9 de diciembre de 2025, disponible en: [https://elpais.com/sociedad/2025-12-09/la-intervencion-completa-del-ceo-de-ribera-vamos-a-adecuar-el-servicio-al-dinero-que-nos-van-a-entregar.html].

CAPÍTULO III

LA DANA Y EL GOBIERNO negligente DE MAZÓN

La izquierda de este país se ha especializado en instrumentalizar el dolor provocado por una tragedia para intentar obtener réditos políticos de las víctimas. Ya ocurrió en los atentados del 11-M. Construyen un relato falso y utilizan todos sus terminales mediáticos. Levantan un muro con manipulaciones y bulos. Tuve una comida de trabajo con una periodista de reconocido prestigio en la Comunidad Valenciana para hacerle una propuesta de trabajo. Se ha dicho que estaba incomunicado y es falso. Ofrecen la peor cara de un ADN conocido en la izquierda, aprovechar la muerte y la tragedia para hacer política.

Carlos Mazón, expresidente valenciano

Gracias a Dios y al innombrable Francisco Franco, que desvió el cauce del Turia, [si no] habría sido también Valencia entera. En lugar de enviar al Ejército, han estado cinco días sin enviar al Ejército. No apoyo la violencia, pero se comprende la indignación de la gente.

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid

Mazón ha asumido grandes responsabilidades, y aquella que

dignifica a un político, que es unir su carrera política al éxito de la reconstrucción.

Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular

El heredero de Zaplana

Carlos Mazón inició su carrera política de la mano de su mentor Eduardo Zaplana, quien ha reconocido que llegó a la política para forrarse y acabó liderando organizaciones de comisiones en las tramas Erial, Terra Mítica o Lezo. «Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir», decía Zaplana. Alcanzó la alcaldía en Alicante comprando a una tránsfuga y llegaría a ser presidente de la Generalitat, ministro con Aznar y portavoz del Gobierno. Cumple siete años en libertad por «una enfermedad terminal cercana al 100%», según un informe médico. A Mazón fue él quien en 1999 lo designó director general del Instituto Valenciano de la Juventud recién salido de la carrera de Derecho, con tan solo veinticinco años. Zaplana lo impulsó dentro del partido y este nunca ha ocultado su admiración por su padrino, a pesar incluso de la condena del exministro de Aznar por el caso Erial.

En 2009 Mazón utilizó sus contactos políticos para acceder a la dirección gerente de la Cámara de Comercio de Alicante y cuenta con plaza en excedencia. El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, fue detenido en marzo de 2026 por corrupción en el bono de comercio impulsado por Mazón en la Generalitat Valenciana. En sus ratos libres se dedicaba a la música como cantante en el grupo Marengo, con el que se presentó al concurso de Eurovisión. En 2019 regresó a la primera línea y fue nombrado presidente de la Diputación de Alicante; accedió gracias al acuerdo con Ciudadanos y el apoyo de Toni Cantó, actor metido a político que sostenía que había que cerrar las televisiones autonómicas y fichó en 2024 por la televisión valenciana À Punt, cuyo programa

fue cancelado con un fracaso absoluto del 0% técnico de audiencia.

El alcalde Luis Barcala de Alicante y Mazón como presidente de la Diputación asestaron un golpe con el respaldo de Pablo Casado y García Egea para fulminar a la líder Isabel Bonig y hacerse con el control del partido.

Alicante se convirtió en el centro neurálgico de operaciones para recuperar la Generalitat Valenciana por parte del PP tras el Pacto del Botànic entre PSOE, Compromís y Unidas Podemos, que puso fin a veinte años de gobiernos corruptos del PP.

Luis Barcala permanece en la alcaldía, impuso una ordenanza municipal con multas de tres mil euros a las personas sin hogar, mientras que su Ayuntamiento adjudicaba vivienda pública a su concejala de Urbanismo. El escándalo de las viviendas de protección oficial (VPO) en Alicante ha continuado. Cinco jóvenes de una misma familia (tres hermanos y dos primos con edades comprendidas entre dieciocho y veinticuatro años) consiguieron una vivienda protegida cada uno, y también fueron galardonados un hijo de una concejala del PP, dueño de tres asesorías, y su mujer, directora general de una clínica estética. Los únicos requisitos para recibir estas viviendas protegidas a pie de playa: ser rico y del PP. La inacción del Consell de Carlos Mazón facilitó el fraude de las VPO, ya que no había creado el cuerpo de inspectores para prevenir posibles fraudes y eliminó todos los mecanismos de control[1].

En 2023, el discípulo de Zaplana, Mazón, logró ser el candidato más votado en las elecciones autonómicas valencianas con el 35,75% de los votos y 40 escaños, por delante de Ximo Puig del PSOE (708 mil votos y 31 escaños), Joan Baldoví de Compromís (358 mil votos y 15 escaños) y Héctor Illueca de Unidas Podemos (88 mil votos y ningún escaño). También por encima de Vox (310 mil votos y 13 escaños), con el que necesitaba pactar y cuyo candidato, Carlos Flores, fue condenado a un año de prisión por maltrato, al perseguir a su expareja al grito de «Te voy a joder toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo». Feijóo se refirió a él con estas palabras de justificación: «Es un catedrático de Derecho Constitucional. Está condenado por violencia verbal hace 20 años. Ha cumplido la sanción. Tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su mujer. Y dijimos que no podíamos firmar un acuerdo con esta

persona». Mazón era consciente de esta necesidad de pactar: «En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones, pero no veo nada más», decía en unos audios filtrados antes de las elecciones de 2023 sobre su relación con la extrema derecha en la Diputación de Alicante. Carlos Flores renunció a formar parte del ejecutivo y se presentó al poco tiempo como número uno al Congreso por la circunscripción de Valencia; en su lugar, el torero Vicente Barrera fue designado vicepresidente de Mazón, tenía negocios familiares con Camps del PP y se pasó la última jornada de su juicio abrazando y aplaudiendo a Camps. Manifestantes en su contra le cantaron: «Fascista de primera, Vicente Barrera».

Las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Mazón saltaban a la vista por la flagrante irresponsabilidad: eliminar el impuesto de patrimonio para las familias valencianas de clase alta; desmantelar la Oficina de Recuperación de Activos, que recuperaba dinero público desviado por la corrupción; y suprimir la Unidad Valenciana de Emergencia (UVE), que intentaba dar respuesta a catástrofes como organismo de coordinación en situación de emergencia y que estaba dotada con un presupuesto de nueve millones de euros para incendios y fenómenos meteorológicos[2]. Mazón consideraba que eran «chiringuitos y ocurrencias».

El precedente de las víctimas del Metro de Valencia

En la tragedia del Metro de Valencia de 2006 fallecieron 43 personas por el descarrilamiento del tren que circulaba a 80 km/h en un tramo con velocidad limitada a 40. Metrovalencia lo gestionaba Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), empresa pública de la Generalitat con el PP. Las víctimas del accidente de Metro más grave de España nunca fueron recibidas por el presidente valenciano Fracisco Camps, que usó la televisión autonómica Canal 9 para manipular a su conveniencia con un

silencio mediático absoluto. El último día de emisión del canal autonómico, en 2013, invitaron a Beatriz Garrote, portavoz de la Asociación de Víctimas del Metro 3-J, para pedirle disculpas en directo.

Entonces, en 2006, el alcance y rapidez del altavoz de las redes sociales no era como en 2024 con la dana, y ello complicaba amplificar el mensaje por parte de los familiares de las víctimas. Las mentiras fueron el modus operandi del PP para controlar el relato e intentar tapar su ineptitud manifiesta.

El juzgado de instrucción archivó la investigación por el accidente y descartó que existieran responsables penales. Los peritos descartaron fallos en los frenos, el vagón y las vías, y rechazaron que existiera relación entre el accidente de 2006 y los descarrilamientos ocurridos varios años antes. El caso se cerró con el archivo judicial, un simulacro de comisión de investigación parlamentaria y cero responsables políticos de la tragedia, a pesar de la falta de sistemas de control automático de la velocidad y el deficiente mantenimiento. En la comisión de investigación, con mayoría absoluta del PP, se culpó únicamente al maquinista fallecido. El PP valenciano contrató con dinero público los servicios de la consultora HM & Sanchis para aleccionar y dar argumentarios a los técnicos que comparecieron en la comisión, y que así defendieran la versión del PP de que se trataba de un accidente inevitable por error del maquinista.

El caso se reabrió por el empuje y la lucha social de la asociación de víctimas, y pocos días antes de la celebración del juicio, en 2020, los acusados Vicente Antonio Contreras (director adjunto de Explotación), Juan José Gimeno (director del Departamento de Análisis y Auditoría de Seguridad), Francisco García (director técnico) y Sebastián Argente (jefe de la Línea 1) llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, aceptando 22 meses de prisión sin el ingreso en la cárcel y reconociendo las negligencias sistémicas de la empresa pública FGV. No dimitió ningún dirigente del PP y quedaron impunes los principales señalados: Francisco Camps, president de la Generalitat Valenciana, y Juan Cotino, conseller y president de las Corts, que había sido director general de la Policía Nacional, acusado de intentar comprar el silencio de las

familias afectadas ofreciendo puestos de trabajo a cambio de no denunciar el caso.

La gestión irresponsable en la dana. 230 víctimas

El primer año de legislatura del president Mazón finalizó sin apenas complicaciones para un avezado en la agenda del politiqueo: cortar lazos en inauguraciones, acudir a saraos y eventos, firmar lo que procesa, colocar a ese amiguete o al otro, y dar una subvención a esta o aquella empresa. A pesar de las advertencias de inundaciones catastróficas, el mismo 29 de octubre, día de la trágica dana en Valencia con 230 fallecidos, Carlos Mazón presidió por la mañana el pleno del Consell y después recogió el premio de Turismo Sostenible de Aenor, con el que se fotografió queriendo imitar a Rafa Nadal, mordiéndolo como si fuera un trofeo.

A la una de la tarde, en una publicación en su cuenta de X, Mazón afirmó: «Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca, por lo que se espera que en torno a las 18:00 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana». Posteriormente el presidente valenciano del PP tuvo que borrar el mensaje[3]. Mazón se reunió seguidamente con los representantes de los sindicatos CCOO y UGT, y con la patronal de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana para debatir los presupuestos de la Generalitat. Desde allí se marchó para reunirse en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, portavoz institucional del Levante UD, para ofrecerle la dirección de la televisión valenciana À Punt.

Dos semanas antes del fatídico encuentro en El Ventorro, en un acto público Mazón había adulado a la misma periodista: «La noche ha empezado fenomenal porque ha comenzado con la aparición de Maribel Vilaplana. En Valencia hay dos tipos de presentaciones: las que presenta Maribel Vilaplana y las demás».

Mientras se inundaba Valencia, el presidente y la periodista mantuvieron un encuentro de cuatro horas en un reservado. Abandonaron el local cuando ya no había clientes ni empleados ni escoltas, y mientras morían personas. El Gobierno de Mazón, que tenía el mando único de la emergencia, premió a los escoltas que lo acompañaron a su comida en El Ventorro y fueron condecorados con la medalla al mérito policial. Mazón tuvo que acabar reconociendo, después de cambiar varias veces de versión, que abandonó El Ventorro junto a la periodista Vilaplana y que la acompañó al parking donde tenía su vehículo, mientras recibía un aluvión de llamadas por la dana.

José Manuel Cuenca fue director de la COPE en Alicante y eliminó todos los mensajes con Mazón del día de la tragedia. Era la mano derecha, amigo del alma y jefe de Gabinete del president, y dio la orden a consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, de que no molestara a Mazón en la comida que tenía con la periodista Vilaplana en El Ventorro.

Salomé Pradas admitió que no supo hasta las ocho de la tarde que existía una alerta para enviar a los móviles de los valencianos por las emergencias. Después dijo que lo supo a las siete de la tarde. Detrás de la descoordinación de la emergencia de la dana se encontraban vividores de lo público como Emilio Argüeso, número dos de Pradas como secretario autonómico de Emergencias –había trabajado como guardia civil y policía local, y también había pasado por PSOE, UPyD, Ciudadanos y PP–.

La ex-consellera Salomé Pradas fue destituida y está imputada en el juicio por la dana. En una entrevista en Salvados admitió que llamó para enviar la alerta a los móviles en dos ocasiones a Mazón y que este no cogió el teléfono (a las 19:10 y a las 19:36). Mazón no llegó al Cecopi, centro que coordinaba la emergencia, hasta las 20:30, cuando ya habían fallecido la mayoría de las víctimas. Un informe pericial concluyó que la foto de Mazón entrando al Cecopi está trucada y es «técnicamente falsa», según El Salto[4].

El mensaje del sistema ES-Alert no se envió a los teléfonos hasta las 20:11 horas, cuando ya había decenas de víctimas mortales, personas desaparecidas y otras atrapadas. Miguel Mollá, el validador del ES-Alert, que contradijo a Pradas y desmintió el relato

del Gobierno de Mazón, falleció a causa de un infarto en febrero de 2026. Mollà, responsable de tecnologías del 112 y jefe de sección de la Avsre (Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias) de respuesta de emergencias, declaró en el juicio y expuso como testigo que el primer aviso de sus superiores para enviar la alerta lo recibió a las 18:36[5].

El servicio del 112 de Emergencias de la Generalitat Valenciana estaba, para sorpresa de nadie, privatizado a Ilunion, brazo empresarial de la ONCE, bajo el convenio de telemarketing. El mismo día de la catástrofe de la dana, Mazón puso de director general de la Conselleria de Emergencias e Interior a Vicente Huet, exalcalde de Barxeta y miembro de la Junta Directiva Nacional del PP de Feijóo. Su especialidad: experto en festejos taurinos.

A partir de la tragedia en Valencia las alertas se han enviado a los móviles con antelación. Lamentablemente tuvieron que morir 230 personas para que se cambiara de opinión y se actuara. Pero para esta derecha desnortada el aviso por un inminente peligro a través del sonido del teléfono agrede la intimidad y prefieren ser indiferentes a una posible tragedia y no ser advertidos.

El presidente andaluz Juanma Moreno fue el primer dirigente político en criticar públicamente las alertas en los móviles en defensa del negocio hostelero. «En días como hoy, es necesaria la precaución y no poner vidas en riesgo. Pero también hago una llamada a la reflexión: si un organismo público alerta de “peligro extremo”, debe estar muy seguro, porque eso tiene consecuencias sociales y económicas. Prudencia toda. Rigor, también», puso en redes sociales. Luego le siguió el ultraderechista Santiago Abascal, que dijo sobre el envío de alarmas meteorológicas a los teléfonos móviles que «no se deben instalar por defecto. Hay muchas personas que no quieren recibirlas y deben ser respetadas».

El periodista Jorge Bustos, subdirector de El Mundo y presentador con Carlos Herrera en la COPE, defendió esa pulsión de muerte neoliberal de la derecha en pos de una supuesta libertad, a pesar de que la primera alerta masiva con vibración por móvil a la población se envió por parte de la Comunidad de Madrid de Ayuso en septiembre de 2023, un mes y medio antes de la dana de Valencia. «A ver, ¿qué coño es este pitido orwelliano en cada móvil por

mucho que llueva? ¿Cuál es el siguiente paso de la intrusión del Estado en la privacidad del ciudadano?», escribió Bustos. Tras la tragedia de Valencia, Abascal y Bustos no han vuelto a decir nada al respecto. Por parte de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno se han empezado a utilizar las alertas con normalidad. Igualmente ha ocurrido con los avisos en la Generalitat Valenciana.

La Asociación de Víctimas Mortales por la Dana 29-O contra la gestión de Mazón

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales por la Dana 29-O, perdió a su padre, Manuel, en la tragedia que azotó Valencia. Álvarez se ha convertido en una de las voces más combativas contra la gestión de Mazón y encarna la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación frente a la falta de humanidad del Gobierno del PP.

En diálogo para este libro y como una de las referentes de la lucha contra la falta de escrúpulos de Mazón, Rosa Álvarez expone:

No fue incompetencia, se queda muy corto. Fue una negligente y dolorosa gestión. Una de las cosas que más nos ha dolido a las familias, aparte de las múltiples versiones con mentiras, es que cuando ahora hemos sabido que la noche del fatídico día, cuando él hizo las declaraciones públicas diciendo que sí que habían aparecido cuerpos sin vida y que iba a ser una noche muy larga, y que iban a aparecer más, cuando se apagaron los focos, le dijo a su chófer que lo llevase para su casa. Eso es, aparte de desalmado, ser un psicópata. Pero no como insulto, como algo que refleja su propia personalidad. Porque es la más absoluta falta de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de sentir el dolor de los demás. Y no estamos hablando de cualquier político, que también sería deplorable, sino del cap del Consell, que es la persona que dirige y coordina las políticas. Cuando además hizo creer a todos que estuvo

ahí toda la noche, el molt nada honorable president se largó a su casa a dormir. Todo lo que digamos y todos los calificativos se nos quedan cortos.

Álvarez y su asociación no comparten la decisión del Tribunal Superior de Justicia de no investigar a Mazón:

Se niegan a investigar los hechos de lo que sucedió el 29 al no imputar a Mazón. ¿Este tribunal cómo interpreta el Estatuto de Autonomía? Nos podíamos imaginar que iban a devolver la causa, lo que no imaginábamos eran los argumentos que han dado. Imaginábamos que iban a decir que como todavía quedaba instrucción por delante, pues que siguiera la jueza hasta que terminara la instrucción. Pero el decir que no era garante de la seguridad de la ciudadanía es algo brutal que abre un precedente y crea una jurisprudencia; porque entonces, si no es garante, ¿para qué queremos un presidente en la Generalitat Valenciana? No les interesa que lleguen a jueces las personas de a pie y por eso se pone énfasis en el dinero de la preparación de las oposiciones, algo insostenible para la clase trabajadora, por eso no quieren que accedan los que no son de su círculo socioeconómico.

Esta asociación de víctimas ha denunciado haber vivido situaciones de acoso:

Hemos vivido una persecución brutal, a la que nos hemos visto sometidas por el PP. Se inventan sueldos, se inventan cargos, se inventan de todo contra nosotras y contra mí. Es muy curioso lo de la palabra politización que siempre utilizan en el PP desprestigiando a los propios políticos, cuando la política es, nada más y nada menos, que intentar transformar la sociedad. Y ellos la desprestigian. Si estás a favor del PP, ya no estás politizada y ya no es algo negativo. Las personas somos animales políticos. Ellos

quieren a las personas calladas y que vayan a votar cada cuatro años, si les interesa, y si no, nos hablan de pucherazos. La primera que lo sufrió fue Pilar Manjón de las víctimas del 11-M, que la mataron civilmente. Es su forma de actuar siempre contra las asociaciones de víctimas. Quieren vernos flaquear. Quieren vender que está ya todo medio decidido y que nos quedemos resignadas. Lo que quieren es vernos flaquear.

En comparación con lo que vivieron los familiares de las víctimas del Metro de Valencia, Álvarez explica que gracias a las redes sociales la estrategia de manipulación del PP no ha funcionado igual ni con la misma influencia que en la dana:

Aquella tragedia se tapó inmediatamente. Ahora, con todas las manifestaciones, las redes sociales y demás, no han logrado ocultarlo con sus mentiras gubernamentales. Aunque es verdad que también ahora hay pseudodiarios digitales y personajes de extrema derecha que se dedican a inventarse noticias y biografías. Ellos mienten, que algo queda. Son panfletos pagados directamente para la mentira y para el odio. Incluso han publicado que quieren colgar de un puente a la jueza que investiga la dana y todo tipo de barbaridades.

El lavado de cara de la Monarquía y de los oligarcas

Los dirigentes políticos y los reyes Felipe VI y Letizia acudieron a la zona cero en Paiporta con los afectados, y se impuso el relato de que todos los políticos estuvieron igual de mal y de que el monarca había actuado bien. A modo del 23-F, servía de lavado de cara de la Monarquía. No faltaron los figurantes, abrazos impostados, incluidos los sindicatos mayoritarios, que llevan desde 2012 sin

organizar una gran huelga general, pero que se prestaron a lavar la imagen de la Casa Real con la dana y acudieron a la Zarzuela para anunciar que convocaban diez minutos de silencio acordados con la patronal. Mientras, los empresarios que pusieron en peligro la vida de miles de trabajadores en Valencia acudían al funeral de Estado. El poder de Juan Roig es tal que los medios de comunicación pixelaron la marca de Mercadona de un camión rescatado para que no se viera cómo ponía en riesgo a los trabajadores que se jugaron la vida durante la dana. Juan Roig ha participado en actos y eventos con Mazón y ha financiado la FAES de Aznar.

La Generalitat de Mazón autorizó salvoconductos para que los empleados de supermercados Mercadona, Consum, Aldi y Lidl pudieran seguir trabajando en caso de otra alerta roja o naranja en Valencia, en contra del criterio del Ministerio de Trabajo.

Después de la dana importaba más la propaganda de las limosnas empresariales y lavar la imagen de la Casa Real que las propias víctimas. El diario El País borró un texto que publicó en X y que mostraba lo que suponían para el empresario de Inditex sus donativos: «Amancio Ortega crea un fondo de 100 millones de euros para los afectados de la dana. Ortega, cuyo patrimonio ronda los 150 mil millones de euros, ha cobrado hoy mismo un dividendo de 1.422,5 millones de sus acciones en el gigante textil». Mazón se atrincheró en su cargo y no dimitió hasta el año siguiente e incluso en su discurso de despedida comenzó con agradecimientos al monarca Felipe VI: «Quiero agradecer su lealtad, su grandeza y su apoyo». El capitán de la selección española de fútbol, Álvaro Morata, dejó tiradas a sus compañeras de selección cuando denunciaron el machismo y la corrupción de Rubiales en la RFEF, porque ellos no mezclaban el fútbol con la política. Días después de la dana mandó un mensaje de apoyo en sus redes sociales, con más de 20 millones de seguidores, a Felipe VI cuando el monarca acudió a Paiporta: «Él da la cara cuando los demás huyen. El único servidor público que está siempre donde debe. Yo, con el rey».

El Gobierno de Mazón eliminó el tope salarial en el decreto de emergencia de la dana para pagar el sueldazo del teniente general Gan Pampols. El alto cargo militar fue la persona encargada para reconstruir Valencia y se creó el puesto de vicepresidente para la

Recuperación Económica y Social. Pampols dejó la vicepresidencia en menos de un año. No se supo mucho de él y de su gestión, salvo su anuncio de liberalizar suelo para pelotazos y algunas informaciones que publicaron de que se había gastado altas cantidades en comidas. Recibió 97.301 euros en 11 meses y medio[6]. Señaló a los valencianos como corresponsables de la dana y dijo que las personas que bajaron a los garajes no se autoprotegieron.

ACS de Florentino Pérez fue una de las primeras empresas elegidas por Mazón del PP para la reconstrucción y le adjudicó la reparación de las viviendas públicas en Valencia.

En esas fechas, el Gobierno de Mazón abrió una «cuenta solidaria». Recibió 12 millones de euros donados por ciudadanos y empresas. Un año después seguía sin aclararse lo que se había hecho con ese dinero.

El protegido de Feijóo y la justicia

A pesar de las multitudinarias protestas que congregaron a miles de manifestantes en las calles de Valencia por su gestión en la dana, Mazón fue apoyado incondicionalmente por su partido. «Ha asumido grandes responsabilidades, y aquella que dignifica a un político, que es unir su carrera política al éxito de la reconstrucción», manifestó Feijóo defendiéndolo.

Después de la tragedia, Mazón volvió a pactar con Vox: en esta ocasión fue un acuerdo con la ultraderecha para aprobar los presupuestos y seguir en el cargo como president. Compró todo el discurso racista: «Necesitamos agilizar las expulsiones de inmigrantes ilegales. Nuestros centros están saturados», enunció Mazón después de firmar el pacto en marzo de 2025, tan solo cuatro meses después de la dana.

El pacto se fraguó en connivencia con Alberto Núñez Feijóo, quien

había dicho que Mazón le había estado informando de la situación en tiempo real. La Asociación de Víctimas Mortales por la Dana 29-O solicitó al juzgado que lo citara como testigo, y los mensajes de WhatsApp certificaron que solo se comunicaron tras la marcha de Mazón de El Ventorro[7]. «Lidera informativamente como hiciste con el incendio. Lleva la iniciativa de la comunicación. Es la clave», le aconsejó Feijóo.

Mazón cambió de versión en varias ocasiones, mintió a la cara sin rubor y se atrevió a acudir al funeral del aniversario por las víctimas de la dana siendo responsable de las muertes. Victoria, mujer de uno de los fallecidos, le pidió: «¿Dónde se ha visto que un asesino vaya al funeral de las personas que ha asesinado? Vete a El Ventorro. No vengas al funeral».

Las gigantescas movilizaciones sociales continuaron durante meses señalando directamente a Mazón por su inmoralidad y desprecio a la vida. Muchas de las familias de las víctimas no pudieron reprimir su indignación y en el funeral insultaron al todavía president de la Comunitat Valenciana. Mazón recibió todo tipo de improperios: «Te ríes de todos nosotros, rata cobarde». Unos días después, Mazón dimitió; se fue como un personaje siniestro, mintiendo, sin pedir perdón a las víctimas y arremetiendo contra la izquierda.

El PP de Feijóo impidió que los valencianos decidieran y negoció con la ultraderecha de Vox un presidente interino: Juanfran Pérez Llorca, número dos de Mazón, que dijo que nunca lo aceptaría. En Valencia, PP y Vox han establecido sus mejores relaciones. En abril de 2025, la UCO registró el Ayuntamiento de Valencia por los contratos del concejal Juanma Badenas de Vox, patrocinando a Okdiario de Inda o para un plan de empleo a Daniel Lacalle, economista liberal cercano al PP, y detectaron supuestos sobresueldos y tarjetas de crédito sin control en la concejalía.

Entre las maniobras como alcalde de Finestrat, Pérez Llorca se construyó una piscina ilegal en suelo rústico no urbanizable y se otorgó una licencia municipal. El secretario de Comunicación que eligió Pérez Llorca, Vicente Ordaz, había sido colocado como director de À Punt por Mazón y su último fichaje para la televisión autonómica valenciana fue Toni Cantó. Al igual que José Manuel Cuenca en Alicante, Ordaz también trabajó como jefe en la COPE,

pero en la conexión de Valencia. En los primeros meses de mandato, la pareja de Pérez Llorca, Vanesa Soler, fue contratada en la Diputación de Valencia por «urgente necesidad» y con un sueldo de 52 mil euros anuales de dinero público.

Al aguantar sin dimitir y superar los dos años como presidente con el apoyo de Feijóo, Mazón se aseguró dos más siendo miembro del Consell Jurídic Consultiu, con un sueldo público de 75 mil euros. Igualmente, Mazón goza de privilegios con la Oficina de Apoyo al Expresidente Mazón, que pagan todos los valencianos, y tiene asegurado de forma vitalicia dos asesores, una oficina, un coche, un chófer y los servicios de seguridad que considere necesarios. Además, como diputado percibe más de 50 mil euros anuales y el PP le premió todavía más con una portavocía en las Corts que supone 634 euros extra al mes. Su asesor Cuenca ha obtenido más beneficios y cobrará 58 mil euros en la oficina creada con dinero público.

El ex-president no convocó elecciones y mantuvo su acta de diputado para seguir cobrando un sueldo público y el privilegio de estar aforado. Sus causas solo pueden ser juzgadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y no por juzgados ordinarios. Después de que la jueza instructora apreciara indicios de delito por «presunta grosera negligencia», el TSJCV rechazó investigar al dirigente del PP y descartó su competencia para abrir una causa contra él. «No toda conducta política o socialmente discutible e, incluso, reprobable tiene encaje en un precepto penal. No se puede concluir que Mazón infringiera deberes jurídicos específicos derivados de una obligación legal. Sin prejuzgar otras posibles responsabilidades, es claro que el president de la Generalitat no incurrió en infracción de una norma legal en materia de emergencias al no atribuírsele deber específico alguno en este ámbito», argumentó el tribunal, cuyo presidente Manuel José Baeza compadreó con Mazón el día de su nombramiento en abril de 2025, meses después de la dana.

La extrema derecha en la dana. Bulos,

estafa y odio contra la jueza de la instrucción

Durante la dana se promovieron bulos por parte de la extrema derecha. El Ayuntamiento de Alfafar tuvo que salir a desmentir el propagado por Alvise y Vito Quiles. Ambos idearon de forma torticera y para sacar rédito político una falsedad con la ropa tirada en el vertedero por motivos sanitarios. Ambos llamaron a uno de los concejales por teléfono para fabricar la mentira y hacer creer que se tiró por negligencia, y subieron la conversación manipulada. La Razón publicó el audio que mostraba sus coacciones conjuntas: «Lo hemos vuelto loco», se regocijaban[8]. Javier García Negre, uno de los agitadores de esta industria de la extrema derecha y empleador de Quiles, acudió a apoyar a Carlos Mazón. La relación de Negre con el partido derechista es más que evidente. Uno de los mayores pagadores de su pseudomedio EDATV es el PP a través de publicidad institucional. Además, su padre se mantiene como el teniente de alcalde con mayor sueldo de toda España (85 mil euros) en el Ayuntamiento de Marbella del PP.

Negre ha sido condenado en varias ocasiones, destacando aquella en la que se inventó una entrevista con una víctima de maltrato cuando trabajaba en El Mundo. Mintió en el titular, violó su anonimato y rayó la coacción. Negre «apareció en el domicilio de los padres» de la víctima y como no consiguió que le diera una entrevista, «comenzó a forzarla vía WhatsApp para mantener una reunión», dice el fallo. Fue condenado a pagar 30 mil euros por esta entrevista inventada y sin ningún consentimiento[9].

En febrero de 2026, el PP y Vox permitieron que el youtuber Rubén Gisbert compareciera al mismo nivel que las víctimas en la comisión de investigación de la dana en las Corts, a pesar de que fue pillado tirándose al suelo de rodillas antes de entrar en directo en el programa Horizonte para llenarse de barro los pantalones. En ese programa también dieron una información falsa al decir que había infinidad de muertos en el parking de Bonaire, cuando no hubo ninguno. Horizonte está dirigido por Iker Jiménez, comunicador en

Mediaset dedicado a fenómenos paranormales que derivó a una línea editorial abiertamente derechista desde la pandemia.

Por su parte, Gisbert se querelló contra la jueza de Catarroja que instruye el caso en torno a la dana, Nuria Ruiz Tobarra, atribuyendo al marido de la magistrada una supuesta participación como juez en el interrogatorio y ofrecimiento de acciones a dos perjudicados. Una denuncia que fue archivada. La jueza Ruiz Tobarra ha denunciado un intento de dinamitar la causa siendo víctima de una campaña orquestada de difamación y machismo. «Me han denigrado como jueza y como mujer», ha aseverado sobre una intromisión de Okdiario en la que los lectores del pseudomedio, en los comentarios, la insultan, la vejan y la amenazan. De igual modo ha expuesto que las defensas de los investigados del Gobierno de Mazón, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, han alimentado los ataques contra ella[10].

La extrema derecha no solo se ha quedado en esta campaña de desprestigio. En Vox también quisieron sacar tajada de la desgracia con una trama de presunta estafa por desvíos de los fondos recaudados por parte de su organización juvenil Revuelta. Esa campaña de Revuelta para pedir donaciones vino de la mano de bulos racistas en redes contra la Cruz Roja. Los mismos que llaman «delincuentes» a los migrantes utilizaban una tragedia para llenarse los bolsillos.

El líder Santiago Abascal dio la orden para encubrir este supuesto desvío de los fondos recaudados. Arturo Villa, hijo del Albondiguilla (que fue alcalde en Boadilla con la Gürtel del PP), asesor de Buxadé en el Parlamento Europeo y miembro de Revuelta, admitió que querían liquidar la organización porque los habían pillado estafando, y expuso sobre la situación de la organización: «Hay que disolverla y nos quedamos la gloria y no el deshonor, y las redes dárselas a alguna de OnlyFans y que los seguidores se masturben con sus tetas»[11].

Otro de los implicados en los mensajes publicados es el diputado Manuel Mariscal, jefe de Redes Sociales de Vox y que antes trabajó en la comunicación del PP de Esperanza Aguirre. De hecho, Vox eliminó de su web la petición que hizo Jorge Buxadé sobre dichos donativos. El partido conocía todos los movimientos de Revuelta y

dirigentes como José María Figaredo han estado liderando manifestaciones de la organización juvenil. Uno de los jefes de esta, Jaime Hernández Zúñiga, acudió a la boda de Abascal. Y otra de las pruebas de que conocían las irregularidades son los audios publicados por El Mundo, donde se escucha decir a Montse Luis, su secretaria general adjunta: «Eso técnicamente puede ser robar»[12].

Jaime Hernández Zúñiga, Santiago Aneiros y Pablo González Gasca, de la organización ultraderechista juvenil, fueron denunciados por Vox por estafa y desvío de los fondos recaudados para las víctimas de la dana. Como hemos indicado, en el partido de ultraderecha conocían el caso hacía meses e intentaron taparlo antes de denunciar, pero resultó incontrolable porque apareció en los medios de comunicación. Entre todos ellos se desató una guerra interna, en la que además señalaron a Javier Esteban Bejarano, director de Redes de Vox, acusado de utilizar la cuenta oficial del partido de extrema derecha para dar likes a menores y contactar con ellos, y que dimitió por una denuncia por presunto acoso sexual a un joven de dieciséis años.

La verdadera influencia en Vox, tras Abascal, recae en su asesor áulico Kiko Méndez-Monasterio, el más cultivado en lecturas dentro del aparataje del partido, el que marca la estrategia y el que le escribe a Abascal todos esos discursos cargados de xenofobia y odio al pobre. Méndez-Monasterio, tío de la dirigente Rocío de Meer Méndez, es el hombre en la sombra más poderoso de Vox. Cobra al mes la friolera de 26.700 euros en una S. L. sin empleados (Tizona) [13]. De joven, en 1998, Méndez-Monasterio militaba en el partido falangista Alianza por la Unidad Nacional y fue condenado por una agresión a Pablo Iglesias y dos jóvenes antifascistas al querer retirar una pancarta favorable a Pinochet. Aparece también en los audios de la supesta estafa de Revuelta. Y otro de los dirigentes, Pau Ruiz (Españabola en redes y cabecilla de cuentas digitales del Team Facha), admitía que «Kiko insinuó meternos pasta». Méndez-Monasterio organizó una cena clave en la taberna Casamata en Madrid para liquidar y absorber Revuelta antes de que todos los audios y denuncias salieran a la luz, como acabó pasando.

Pese a todos estos indicios y acusaciones, en abril de 2026 la Fiscalía ha archivado la denuncia del caso al no encontrar «datos

sustanciales» en el relato de los denunciantes y al entender que los hechos «eran demasiado genéricos».

---

[1] C. Navarro, «Mazón eliminó controles activados por la izquierda para prevenir fraude en la adjudicación de VPO como las de Alicante», elDiario.es, 4 de febrero de 2026, disponible en: [https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/mazon-elimino-controles-activados-izquierda-prevenir-fraude-adjudicacion-vpo-alicante_1_12962583.html].

[2] L. Martínez, «Qué era la Unidad Valenciana de Emergencias, el servicio de coordinación que Mazón suspendió al llegar al gobierno», elDiario.es, 30 de octubre de 2024, disponible en: [https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/politica/unidad-valenciana-emergencias-servicio-coordinacion-mazon-suspendio-llegar-gobierno_1_11779165.html].

[3] elDiario.es, «Mazón borra el tuit en el que el martes afirmaba que el temporal disminuiría de intensidad a las 18:00 horas», 30 de octubre de 2024.

[4] Y. Álvarez y T. Muñoz, «Un informe pericial concluye que la foto de Mazón entrando al Cecopi es “técnicamente falsa”», El Salto, 13 de marzo de 2025, disponible en: [https://www.elsaltodiario.com/valencia/un-informe-pericial-concluye-foto-mazon-entrando-al-cecopi-es-tecnicamente-falsa].

[5] L. Ballester, «Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18:36 ya se trabajaba en el ES-Alert», Levante-EMV, 25 de febrero de 2026, disponible en: [https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2026/02/25/fallece-el-tecnico-que-contradijo-a-pradas-y-confirmo-que-a-las-18-36-ya-se-trabajaba-en-el-es-alert-127255346.html].

[6] I. Carrascón, «La factura que dejará Gan Pampols en la Generalitat Valenciana será de más de 100.000 euros», InfoLibre, 12 de septiembre de 2025.

[7] C. Martín, «La conversación completa entre Feijóo y Mazón el día de la dana: nueve mensajes desde las 19:59 horas», La Sexta, 2

de enero de 2026.

[8] C. Dos Santos, «Alvise y Vito Quiles idearon el bulo de la ropa tirada al vertedero durante la dana: el audio que muestra sus coacciones», La Razón, 27 de octubre de 2025.

[9] R. Ejerique, «La sentencia contra Javier Negre concluye que se inventó la entrevista, mintió en el titular y "rayó la coacción"», elDiario.es, 20 de noviembre de 2019.

[10] J. Gil, «La jueza de la dana denuncia una "campaña difamatoria" de los dos ex altos cargos de Mazón investigados», El País, 2 de setiembre de 2025, disponible en: [https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2025-09-02/la-jueza-de-la-dana-denuncia-una-campana-difamatoria-de-los-dos-exaltos-cargos-de-mazon-investigados.html].

[11] J. Pardo, R. Ugena y S. Gasparyan, «Cronología de los audios secretos: Vox conocía la corrupción de Revuelta meses atrás e intentó taparla antes de denunciar», El Plural, 12 de diciembre de 2025, disponible en: [https://www.elplural.com/politica/espana/cronologia-audios-secretos-vox-conocia-corrupcion-revuelta-meses-atras-intento-taparla-antes-denunciar_367235102].

[12] J. Lamet, «Los audios secretos que prueban que Vox conocía las "irregularidades" de Revuelta: "Hay que empezar a funcionar de manera profesional y limpia"», El Mundo, 14 de diciembre de 2025.

[13] J. M. Olmo, «Vox paga 26.700 € mensuales al principal asesor de Abascal a través de una S. L. sin empleados», El Confidencial, 26 de enero de 2026, disponible en: [https://www.elconfidencial.com/espana/2026-01-26/vox-abascal-mendez-monasterio-asesor-sl-empleados_4286121/].

CAPÍTULO IV

JUANMA MORENO Y EL DESTROZO DE LA SANIDAD PÚBLICA. EL ESCÁNDALO DE LAS MAMOGRAFÍAS

A mí no me compra nadie

Señorito andaluz

Malparido

Miserable rapaz

Embustero

Ilustre fanfarrón

Mantenido

Un próspero y patético ratero

Señorito andaluz

Malparido

Hijo bastardo

De Andalucía

Que le ha robado la salud

Al pobre

Cambiando el oro por cobre

Enriqueciéndose

Con su agonía

Que le ha robado la salud

Al pobre

Cambiando el oro por cobre

Maldito perturbado criminal

Usted nos ve como bufones verbeneros

En su corte de usureros

Para ciegos de cortijo

Usted con su mirada prevaricadora

Sucia, cortesana y especuladora

Le advierto a su excelencia

Que no queda paciencia

Y mire por su suerte

Que los que ya han perdido su salud

No le temen a la muerte

Desastre

Todo es un desastre

Atraco a mano armada bananero

Negocio disfrazado de cordero

Todo es un desastre

Este es el último hospital

Que nos queda

Este es el último

Cartucho de esperanza

Que su graciosa majestad

Se le ocurriera

Ponerle una mano encima

Su cabeza iría clavada

En la punta de una lanza

Y sería tan hermosa

Y tan dulce la venganza

Señorito andaluz

Malparido

Aquí dentro hay un dolor

Que no le duele

Hay un canto y un grito

Desoído

Y hay una ansiedad

Esa ansiedad

Que su merced tanto teme

Desastre

Todo es un desastre

Atraco a mano armada bananero

Negocio disfrazado de cordero

Todo es un desastre

Usted nos ve como bufones

[verbeneros

Todo es un desastre

Señorito andaluz

Malparido

Todo es un desastre

Que le ha robado la salud

Al pueblo malherido

Todo es un desastre

Hijo bastardo de Andalucía

La tierra mía

Miserable cortijero

Algún día vendrá

Su eminencia

Al último hospital

Que aún pagamos

Su dinero no podrá curar su dolencia

Pedirá clemencia

Y caerá en mis manos

Y verás que todo

Todo todo todo todo

Es un desastre

Atraco a mano armada bananero

Negocio disfrazado de cordero

Todo es un desastre

Pasodoble de la comparsa DSAS3, de Jesús Bienvenido, sobre la gestión de la Junta de Andalucía en el fallo del cribado del cáncer de mama

La meritocracia en las Nuevas Generaciones y los currículums falsificados

El presidente Juanma Moreno ha vivido su pertenencia al PP como un proyecto personal y vital. Presume de ser hijo de emigrantes andaluces, nieto de jornalero e hijo de taxista; aunque en Andalucía, vendido al poder del dinero, ha dado barra libre a las VTC Uber, Cabify y Bolt y los taxistas salieron a las calles contra su decreto. Se hizo a sí mismo subido al ascensor dentro del aparato de las juventudes del partido. En 1997 Juan Manuel Moreno Bonilla se estrenó como diputado andaluz mintiendo en su currículum con una falsa licenciatura y un máster en Dirección y Administración de Empresas[1]; pasó de ser «licenciado y con máster» en ADE a «tener estudios» de ADE.

Después engordó su CV con supuestos grados y másteres de Protocolo y Liderazgo en universidades privadas, como la Universidad Camilo José Cela y la IESE Business School, y hasta un máster de Oro del Real Fórum de Alta Dirección. Moreno nunca

completó sus estudios reglados en la universidad pública malagueña de Magisterio y Psicología. Incluso cuando fue nombrado líder del PP de Andalucía con el dedazo de Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, los economistas neoliberales defensores de la manida idea de la meritocracia, Luis Garicano y Fernández-Villarde, escribieron un texto demoledor contra su currículum: «Ha hecho de la política su profesión. Cuando leímos ayer el currículum de Juan Manuel Moreno, casi no nos lo podíamos creer. Nos hubiese costado bastante esfuerzo, entre los dos, crear de nuestra imaginación un ejemplo tan aplastante del problema de selección de élites políticas en España. […] Como nuestros políticos ya ni pretenden disimular con demasiado esfuerzo, tampoco hace falta agudizar el ingenio para criticarlos».

La meritocracia de Juanma Moreno son todos los padrinos que ha tenido en el PP. A los diecinueve años ya era uno de los líderes de las Nuevas Generaciones y a los veinticinco logró un puesto de concejal en el Ayuntamiento de Málaga con Celia Villalobos –después de que el PSOE permitiera gobernar al PP en la ciudad andaluza y no quisiera hacer alcalde a Antonio Romero de IU, considerado desde entonces el alcalde moral de Málaga al que no dejaron gobernar los poderes fácticos–. A partir de entonces, el PP ha pasado el rodillo en la capital de la Costa del Sol y esta ha sido el principal bastión popular de influencia y de red de tramas en Andalucía.

En un ejercicio de sinceridad, Ana Botella pidió suprimir las juventudes de los partidos políticos, ya que «la gente donde tiene que estar cuando tiene esas edades es trabajando, estudiando o formándose». No fue esta la fórmula de ascenso al poder de Juanma Moreno, que logró el puesto de líder nacional de las Nuevas Generaciones cuando Aznar era presidente del Gobierno de España. Su gran compañero dentro del partido era precisamente el que acabaría como yerno de los Aznar-Botella, Alejandro Agag. Moreno consiguió escaño en el Congreso de los Diputados como paracaidista impuesto por Madrid en Cantabria. En su comunidad siguió los pasos de su mentor Javier Arenas, eterno aspirante y perdedor que nunca pudo gobernar la Junta, pero que continúa en política y dos de sus jóvenes colaboradores la marcan en España, Juanma Moreno en Andalucía y Santiago Abascal en Vox.

Tráfico de influencias y un secretario de Estado contra la dependencia

En el año 2011 la ministra Ana Mato nombró a Juan Manuel Moreno Bonilla secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad; la misma que fue condenada por corrupción en la Gürtel como partícipe a título lucrativo debido a los regalos y viajes obtenidos ilegalmente por su exmarido Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón, ofrecidos por el cabecilla de la trama Francisco Correa.

Como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, las personas dependientes se le echaron encima por sus repetidas acusaciones contra las cuidadoras. «Es increíble que un responsable del Gobierno, cuya acción debiera ser la defensa del colectivo más vulnerable, se dedique a acusar de fraude a personas cuyo único delito es entregar su vida, 24 horas al día, 365 días al año, al cuidado de dependientes y todo ello por una compensación económica irrisoria», manifestó la Coordinadora Estatal en Defensa de la Ley de Dependencia[2]. De ese paso por las administraciones públicas de Sanidad aprendió a aplicar la tijera a los presupuestos de dependencia y señalar a las víctimas de sus políticas neoliberales.

En el mandato de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía, la dependencia ha colapsado y los andaluces son los que más tiempo tienen que esperar para resolver un expediente, más de 609 días de media, a la cola de toda España con diferencia[3]. Un ejemplo de ello lo expuso la concejala de IU en Fuengirola Sheila Jiménez: «En 2018 mi madre solicitó la ayuda a la dependencia para mi abuela, que falleció en marzo de 2020 sin recibir respuesta. En marzo de 2026 nos llegó una carta para decirnos que van a “suspendernos” la ayuda. Es demencial tener que pasar por esto seis años después de que haya fallecido tu ser querido. Obviamente llegaremos al fondo del asunto. Nos consta que hay gente que se ha visto en la misma

situación».

En plena campaña electoral de las andaluzas de 2018, que hicieron presidente a Juanma Moreno, Arturo González Panero, el Albondiguilla (exalcalde de Boadilla del Monte condenado en la trama Gürtel, como comentamos anteriormente), señaló directamente a Moreno Bonilla. Declaró al juez que había avisado a Moreno por las presiones que recibía del extesorero Bárcenas: «Habíamos pedido cita con Soraya Sáenz de Santamaría, pero nos recibió Juanma, que trabajaba directamente para ella en la Secretaría de Política Municipal del PP, y le conté las peticiones de Bárcenas». El extesorero del PP desvinculó a Juanma Moreno: «Es un chico estupendo y no tiene nada que ver con esta historia»[4].

En las siguientes elecciones de 2022 el presidente de la Junta de Andalucía ya no era conocido como Moreno Bonilla, sino como Juanma, el que salía hasta en la sopa en la televisión andaluza como una persona entrañable y familiar junto a sus hijos y su pareja, la politóloga Manuela Villena, con la que coincidió en las Nuevas Generaciones del PP. Villena dirige la fundación del conglomerado farmacéutico Bidafarma, que fue denunciado por recibir sin concurso la distribución de las vacunas contra el covid[5] y repartir en pandemia los 7,5 millones de mascarillas gratuitas para los colectivos vulnerables en la Andalucía presidida por su marido. Estas relaciones de poder e intereses familiares quedan relegados en los grandes medios de comunicación. El presidente de la Junta cosechó el mejor resultado del PP en Andalucía hasta entonces con más de 1,5 millones de votantes y con 58 diputados, casi el doble que el PSOE de Juan Espadas.

El matrimonio de Juanma Moreno y Manuela Villena aparece en las revistas del corazón y comparte gran amistad con la pareja Rosauro Varo y Amaia Salamanca. Todos ellos posaron juntos en la cabalgata de Reyes, donde el presidente hizo blackface pintándose con betún para disfrazarse de Baltasar a pocos meses de las elecciones andaluzas. Juanma Moreno inauguró el nuevo negocio de Beach Club del oligarca Varo, marido de la famosa actriz Amaia Salamanca, en Estepona, que ocupa 1.400 metros cuadrados de dominio público en la playa. Rosauro Varo se ha convertido en uno de los mayores caciques de Andalucía y es socio inmobiliario de

Carlos Herrera. La madre de Varo, Juana Amalia Rodríguez, fue diputada del PSOE, y él acude en Semana Santa a uno de los balcones más caros de Sevilla junto con su íntimo amigo José María Aznar, con el que comparte negocios.

Aunque Moreno era un hombre fiel a Soraya Sáenz de Santamaría, con Feijóo todo ha funcionado a las mil maravillas, sin fricciones conocidas hasta el momento, también en el plano familiar.Juanma Moreno le entregó la medalla de Andalucía al presidente de Konecta, José María Pacheco, en cuya empresa uno de sus jefazos es el cuñado de Feijóo, Nacho Cárdenas, hermano de Eva Cárdenas, pareja del líder nacional del PP. Durante la pandemia esta empresa obligó a sus empleadas en Málaga a trabajar junto al cadáver de una compañera tapado con una manta.

En las relaciones familiares y empresariales de Feijóo es clave la compañía Eulen, en la que su hermana Micaela Núñez Feijóo es gerente. Esta empresa es esencial en la industria del odio y ha financiado el medio de ultraderecha EDATV de Javier Negre y Vito Quiles. También la Junta de Andalucía de Juanma Moreno ha hecho uso de ella al privatizar servicios esenciales de los que ahora se encarga la empresa, como el de atención de llamadas al 112 de Emergencias y del Patronato de la Alhambra. Con todo, el PP vetó la comparecencia en el Parlamento gallego de Feijóo sobre Eulen.

En la propia familia de Juanma Moreno hay beneficiados por este tipo de relaciones, como su hermana Dolores Moreno, que obtuvo una plaza pública como directora de danza en Málaga pese a no ser la aspirante con mejor puntuación. Fue acusada por supuesto «enchufismo» en el nombramiento como directora del conservatorio, ya que se tuvieron en cuenta «otras fuentes» de valoración más allá de la antigüedad y los méritos, criterios que en todo caso no figuraban en las bases iniciales de la convocatoria[6].

Juanma, el moderado, y la propaganda mediática en Canal Sur

Moreno, que se había presentado a las dos anteriores elecciones sin éxito, conquistó la presidencia de la Junta de Andalucía gracias a un pacto de investidura con Ciudadanos y Vox, a finales de 2018. El candidato del PP consiguió tan solo 26 diputados, por los 21 y 12 de Ciudadanos y Vox respectivamente. El PSOE de Susana Díaz se quedó en 33 diputados y Adelante Andalucía –con Podemos, IU, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista– logró 17 escaños. Juanma Moreno del PP fue el primer dirigente político que llegó a una presidencia gracias a los votos de la ultraderecha de Vox. Los medios de comunicación que controla en Andalucía lo venden como una persona «moderada». Esa imagen es un mero producto de marketing. Y a través de la propaganda de Canal Sur ha conseguido proyectar una forma de ser falsificada, como de yerno ideal, que se resume en la palabra andaluza suavón, «persona hipócrita que aparenta ser inofensiva y que de forma disimulada espera la oportunidad para hacer las cosas según su mera conveniencia e interés por encima de todo». El presidente tahúr Juanma Moreno está destrozando la sanidad pública en Andalucía con igual o más virulencia que Ayuso en Madrid, sin que apenas se hablara de su gestión… hasta el escándalo del fallo en el cribado del cáncer de mama.

Si los valores que transmiten los famosos y ricos de la prensa rosa y las revistas del papel cuché llevan inexorablemente al voto azul del PP, la oferta cultural en Canal Sur de toros, Rocío y Semana Santa sirve de herramienta ideológica para promover los valores conservadores que han llevado a una mayoría del PP en Andalucía.

Gobierne el PSOE, el PP o el PP con Vox, mismo caciquismo se mantiene en Andalucía. No en vano, figuras reaccionarias como Carlos Herrera, Bertín Osborne, José Manuel Soto o Cayetano Martínez de Irujo, lo más rancio y carca, fueron promocionadas en tiempos del PSOE.

Canal Sur ha financiado y producido con dinero público el publirreportaje Cayetana. La duquesa de todos. Mientras, la Fiscalía pide investigar a la Casa de Alba por robar 6.600 millones de litros de agua de Doñana en pozos clandestinos. Juanma Moreno presentó este documental junto al expresidente Felipe González al inicio de la precampaña electoral de 2026 en Andalucía.

En la pandemia, la Junta transfirió 11 millones de euros del Fondo de Emergencia Covid para pagar sueldazos públicos en Canal Sur, como el de Bertín Osborne, conde de Donadío –cuya familia se hizo millonaria con Franco–, el cual ha aparecido en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de casi un millón de euros, además de ser condenado por alzamiento de bienes y aparecer en los papeles de Panamá. Juanma Moreno entregó el premio de Periodismo de la Junta a Carlos Herrera, uno de los mayores especuladores inmobiliarios con pisos turísticos en Andalucía. Gana 20 mil euros al día en la COPE como uno de los presentadores con mayor sueldo de todo el panorama nacional y fue condenado por utilizar cuatro sociedades pantalla para no pagar impuestos.

Su relación con uno de los representantes de la España cañí, el cantante José Manuel Soto, ha traspasado lo simbólico de los medios de comunicación y premios, y se ha materializado en una alianza de negocios que ha sido denunciada como trato de favor. Juanma Moreno apoyó personalmente la subvención al chiringuito Destino Rocío, una especie de camino para visitar la Virgen del Rocío en Andalucía. El propio Moreno reconoció la poca enjundia del proyecto: «Me vino sin maquetas ni grandes proyectos y me miró, [es] muy vehemente en lo que él cree». José Manuel Soto se autodenomina el Robin Hood rociero. Dijo que el colectivo LGTBI y las feministas vivían del cuento de las subvenciones: «Ni el colectivo LGTBI ni el feminista perderán ningún derecho si gobiernan las derechas, lo que pueden perder son las subvenciones. Hay miles de asociaciones viviendo del cuento de la subvención». La Oficina Antifraude detectó irregularidades en la adjudicación del contrato menor sin tener «solvencia técnica o competencia para desarrollar el proyecto»[7], pero el expediente acabó archivado. Moreno ha vetado cualquier comparecencia del cantante en el Parlamento andaluz para explicar el caso. Mientras, Soto ha suspendido varios de sus conciertos y fichó como concursante en el último programa de Supervivientes en Mediaset.

Para su lavado de imagen, Juanma Moreno también ha necesitado financiar con dinero público a ultraderechistas de los más bajos fondos de la cloaca digital, como Álvaro Ojeda de Okdiario de Eduardo Inda, que comenzó su periplo mediático en Radio Marca, donde recibía 60 mil euros de paguita del Ayuntamiento del PP de

Jerez por «promoción cultural». El medio Cofrademanía de Álvaro Ojeda también ha recibido la medalla en 2026 de la provincia de Cádiz por la Diputación del PP.

En la propaganda y marketing de este vendedor de humo no han faltado lágrimas de cocodrilo y la utilización de una tragedia como la de Adamuz para victimizarse desde la presidencia de la Junta de Andalucía. La misma persona que en público hace ver que le afecta dicha tragedia, luego considera a las mujeres andaluzas como un mero porcentaje electoral cuando él es el dirigente que gestiona: «Bajamos seis puntos», admitió respecto a las consecuencias del escándalo del cribado del cáncer de mama, sobre el que dijo sin rubor que se sentía injustamente tratado por las críticas recibidas.

En prime time, en precampaña en El Hormiguero de Pablo Motos, Moreno contó que había necesitado ayuda psicológica por la tragedia de Adamuz. Mientras, Andalucía sigue a la cola en tasa de psicólogos en la sanidad pública con listas de espera de 60 días. Además, en mitad de la tragedia ferroviaria, Juanma Moreno se subió el sueldo hasta los 92.208 euros, la tercera subida salarial de la legislatura, y coló una enmienda para hacer desaparecer multas contra altos cargos que incumplan la Ley de Transparencia. El dirigente andaluz es de los que se desviven por el postureo y mienten más que hablan; pero, como explicaba don Antonio Machado, «mienten menos que engañan».

La Junta de Andalucía del PP da mucha importancia a la relación con los medios de comunicación y financió con publicidad el programa de Pablo Motos. Se gastó 40 mil euros de dinero público de todos los andaluces para promocionar jamones durante 45 segundos, un coste para las arcas públicas de casi mil euros el segundo en televisión. La entrevista que le hizo este programa a Juanma Moreno fue ampliamente replicada por las cuentas oficiales de la Junta.

Por si fueran pocas las conexiones con El Hormiguero por parte de la Junta, Juanma Moreno es íntimo amigo de Juan del Val, que acusó de «fraude» las elecciones de 2023 que mantuvieron en el poder a Pedro Sánchez y que es uno de los tertulianos del programa de Atresmedia, del grupo Planeta, al que el mismo grupo concedió el premio Planeta –dotado con un millón de euros–. También, como

asiduo a los toros en compañía del presidente andaluz, Juan del Val recibió el premio de Andalucía de Tauromaquia.

En el verano de 2025 ardieron Tarifa, Zahara, la Mezquita de Córdoba y las ruinas de Itálica. Nadie sabía dónde se encontraba el presidente Juanma Moreno, que se mantuvo al margen del mando de los incendios. El presidente andaluz reapareció para irse a los toros junto con Del Val en mitad de las protestas por unos salarios dignos de los bomberos andaluces del dispositivo INFOCA.

El incendio en la Mezquita de Córdoba, uno de los más importantes patrimonios de la humanidad, fue declarado el 8 de agosto de 2025. En Canal Sur no dieron la noticia en directo ya que retransmitían una corrida de toros de la Feria de Marbella. El incendio, que afectadó a la capilla de la Mezquita, fue provocado por una negligencia de la Iglesia católica, la cual se apropió del monumento por 30 euros gracias a la Ley de Inmatriculaciones de José María Aznar. Con ella la Iglesia hace un negocio millonario sin pagar impuestos, batiendo récords de recaudación anual con 22,4 millones de euros en la venta de entradas, solo en 2025. El organismo asesor de la Unesco había advertido sobre el almacenaje de enseres y maquinaria en su interior antes de que se produjera el incidente[8].

¿Por qué este machaque constante de la maquinaria mediática de Canal Sur en favor de los toros, las cofradías y el Rocío? Para continuar permitiéndose estos desmanes se necesita una televisión que sofoque cualquier movimiento de indignación popular. El Consejo Profesional de Canal Sur dimitió en bloque en 2025 y denunció la censura impuesta por la Junta de Moreno Bonilla al dedicarse el triple de tiempo a la despedida del torero Morante de la Puebla que al escándalo del fallo de los cribados en el cáncer de mama. Juanma Moreno le impuso la medalla de Andalucía a la Cultura a este torero el 28 de febrero de 2026 con motivo del Día de Andalucía. «Leyenda y figura que ha trascendido la historia de la tauromaquia e impulsor de nuestras tradiciones. En su capote está el temple, la pureza, la emoción y el genio de Andalucía», manifestó el presidente de la Junta. En la Semana Santa de 2026, Canal Sur retransmitió en directo por primera vez la corrida de toros del Domingo de Resurrección en Sevilla, un acto al que no faltó Juanma

Moreno y que presidió en su reaparición en España Juan Carlos I. El rey emérito fue ovacionado por toda la plaza, a pesar de que reside fiscalmente en Abu Dabi para no pagar impuestos.

Al frente de las tertulias políticas de Canal Sur se encuentra el periodista Teodoro León Gross, que forma parte de la máquina del fango y propaganda en la televisión autonómica de Juanma Moreno, incluso quitado importancia a los retrasos de los diagnósticos de cáncer de mama en la sanidad pública que está destrozando el PP en Andalucía. El sindicato CCOO denunció su presencia en los Especiales Informativos como intrusismo laboral, al no pertenecer a la plantilla de la RTVA[9] y ser profesional externo en la productora privada Secuoya Studios, que dirige James Costos, exembajador de Estados Unidos en España entre 2013 y 2017.

En el Consejo de Administración de Canal Sur se incorporó Álvaro Zancajo como consejero a petición de la ultraderecha de Vox, que tenía como propuesta en el programa electoral cerrar las televisiones públicas. Zancajo cobra más de 55 mil euros anuales de dinero público. Se trata del jefe de Comunicación de Santiago Abascal y lo acompaña en todos sus actos. Le llevó la campaña a Macarena Olona en Andalucía en 2022 que acabó en fracaso electoral.

Los trabajadores del ente público han pedido su dimisión «por incompatibilidad, con arreglo al artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración, que prescribe que el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados»[10]. La Agrupación de Trabajadores de Canal Sur ha denunciado que «Álvaro Zancajo está imprimiendo un burdo giro de timón hacia las tesis de los partidos de derecha y una sobrerrepresentación del Gobierno andaluz que no recordamos de otros tiempos».

Por otro lado, Canal Sur enchufó de presentador en 2026 a José Antonio Rodríguez en los Informativos. Rodríguez cambió el puesto en la Consejería de Presidencia en el palacio de San Telmo como asesor áulico de Juanma Moreno a presentador en la RTVA en San Juan de Aznalfarache. Asimismo, Rodríguez dirigió la Comunicación del PP en Sevilla entre 2017 y 2021[11]. En marzo

de 2026, una vez había sido denunciado su fichaje a dedo por Canal Sur, salió a hombros como pregonero de la Semana Santa en Sevilla.

El cargo omnipotente de consejero de Presidencia lo ostenta Antonio Sanz, junto con las carteras de Sanidad y Emergencias. Juanma Moreno Bonilla incorporó en su Consejería la Sanidad después del escándalo del fallo en el cribado del cáncer de mama. Lo primero que hizo Sanz tras tomar posesión y asumir las competencias de salud fue irse a los toros y a la ofrenda floral de la Esperanza de Triana, y amenazar a la Amama (Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, que destapó el escándalo), acusando a la asociación de intentar confundir con los datos. En uno de los debates sobre este caso que tanto impactó a la ciudadanía andaluza, el presidente Moreno dejó su sillón vacío en el Parlamento andaluz. Antonio Sanz, como fiel escudero, defendió su ausencia diciendo que en 2017 tampoco compareció la expresidenta Susana Díaz sobre sanidad.

El modelo para Andalucía de Juanma Moreno es el de una comunidad sin sanidad de calidad ni vivienda digna, pero con mucho turismo para ricos y con toros, cofradías y Virgen del Rocío. Lo demuestra que en la sequía que vivió Andalucía, en 2023, con pueblos enteros sin agua, su preocupación fuera que los «campos de golf se estaban secando porque no había para regarlos».

El Gobierno andaluz rechazó la financiación de más de 110 millones de euros para que niños andaluces pudieran acudir a escuelas infantiles públicas gratuitas. Protegió así la red de centros privados. La empresa de Florentino Pérez es una de las que tiene mayor peso en esta gestión en Andalucía, con más de 30 escuelas infantiles privadas.

En la pandemia el presidente de la Junta anunció un rescate de seis millones de euros para las cofradías de Semana Santa, mientras que echó a la calle a ocho mil sanitarios, cerró la atención primaria por las tardes, aumentó la presencia policial en los centros de salud y pidió a los sanitarios jubilados que trabajaran gratis y volvieran –solo uno aceptó–. Sus entonces socios de la ultraderecha de Vox se abstuvieron en Andalucía para que el Gobierno de Juanma Moreno del PP y Ciudadanos no tuviera que comparecer en pleno extraordinario sobre el despido de sanitarios.

Toda esa cantidad de dinero público destinado a las cofradías, a la Virgen del Rocío o a los toros podría haberse invertido en centros sanitarios y en contratar a más personal en los hospitales para reducir las listas de espera.

Las grandes tramas del PP de Juanma Moreno en la Costa del Sol y la Diputación de Almería

En otras grandes tramas en Andalucía, Fernando Ferrero Álvarez-Rementería, nombrado por Juanma Moreno director de Internacionalización de TRADE en la Junta, tuvo que ser destituido a finales de 2025 por estar involucrado en el caso de corrupción del expresidente de la SEPI y de Leire Díez, fontanera del PSOE. Ricardo Sánchez, presidente del PP sevillano, también fue imputado por la concesión de un tanatorio a un familiar. En el PP no tienen bastante con robar en vida, que hacen caja y sacan rentabilidad hasta con la muerte.

De igual manera, en lo peor de la pandemia en Andalucía, se produjo uno de los grandes pelotazos con las mascarillas. El centro operativo de la corrupción se circunscribió a la Diputación de Almería, que con el Gobierno del PP funcionó como conglomerado de poder y agente de colocación. Los altos cargos llegaron a idear un lenguaje codificado por WhatsApp en el que hablaban de dentistas para referirse a las comisiones y 43 personas han sido imputadas.

El presidente de la Diputación en ese momento, Javier Aureliano García, fue detenido a finales de 2025. Llevaba una vida de lujo y pagaba la hipoteca de la vivienda con dinero de la trama. Fue pillado por la UCO junto con su jefa de Gabinete de escapada financiada por la propia Diputación y estuvieron en Madrid de

compras, restaurantes y cita médica sin agenda de trabajo.

En la Almería gobernada por el PP dio cursos de verano el periodista Vicente Vallés de Atresmedia y se subvencionó con dinero público a Jiménez Losantos y Javier Negre por publirreportajes favorables a la Diputación. El propio Aureliano García entregó el colgante de los Millares a la reina emérita Sofía en 2024. El vicepresidente Óscar Liria está acusado de regalar dos coches BMW a su novia y a su padre con las comisiones en mascarillas.

El alcalde del PP de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez, fue pillado sacando 119 mil euros escondidos en una funda de almohada. La jueza María Belén López pidió abstenerse del procedimiento del caso mascarillas por amistad íntima y manifiesta con los investigados. Su sustituto autorizó los registros en noviembre de 2025, que llevaban guardados en una carpeta años, ya que el exvicepresidente Liria fue detenido en 2021 y la Junta de Andalucía de Juanma Moreno hizo como si nada. El juez sobre la trama fijó las declaraciones de los imputados a partir del 28 de mayo de 2026, 11 días después de las elecciones andaluzas.

En la zona de Málaga se cuecen las grandes tramas de corrupción. La joya de la corona de la mafia y donde se mueve y ocurre lo realmente gordo sigue siendo la localidad de la Costa del Sol de Marbella, convertida en un centro financiero y logístico vinculado al narcotráfico a escala internacional y en un paraíso para las mafias; descrito por el periodista Nacho Carretero como la «ONU del crimen organizado», donde se contabilizan más de un centenar de grupos criminales y una cantidad cada vez mayor de ajustes de cuentas.

Ángeles Muñoz del PP es la alcaldesa de Marbella. Tiene un patrimonio desorbitante de más de 15 millones de euros a pesar de que antes de entrar en política ejercía como médica y ha sido uno de los principales apoyos de Juanma Moreno en el partido. Reelegida como alcaldesa cuatro veces, en el Puerto Banús de los yates y Ferraris, Muñoz es conocida como la Titi por los narcotraficantes, también por haber condecorado al excomisario

Villarejo y por tener un hijastro procesado como uno de los capos del narcotráfico. En Canal Sur se ha vetado cualquier información sobre ella.

En los audios de la trama, su hijastro sueco Joakim Broberg dijo cuando ganó Juanma Moreno las elecciones: «La ciudad es nuestra. Tenemos la Junta de Andalucía, tenemos Marbella, tenemos Estepona… Básicamente, tenemos toda la jodida Andalucía». La Fiscalía pide 18 años de prisión para él por narcotráfico y blanqueo al considerar que lideraba en España una peligrosa organización criminal de origen sueco, la Mocro Maffia. Participaba en EncroChat (chat del crimen organizado) como Tony el Gordo de Los Simpson.

El marido de Muñoz, Lars Gunnar Broberg, con el que estuvo casada más de 30 años, falleció en 2023 cuando estaba procesado como capo del narco. Antidroga concluyó que ayudó a su hijo a blanquear siete millones del narcotráfico. El hijastro de la alcaldesa del PP ejercía de jefe y era el encargado de mantener los contactos con los proveedores y los clientes[12]. El periodista Pedro Águeda de elDiario.es destapó que la influencia de Broberg en esta red criminal era debida a las relaciones de parentesco con la alcaldesa Muñoz[13]. En otra conversación intervenida por la Policía, el hijastro de Muñoz llamó a uno de los concejales del PP y este le aleccionó advirtiéndole: «No hables por teléfono, a ver si aprendes de tu padre»[14]. La organizadora de las reuniones era Muñoz. El marido de la alcaldesa había pasado por ser un empresario de éxito. En el caso del hijastro, este iba dejando rastros y llamando la atención con desvergüenza total, hasta el punto de presumir cogiendo su propia moto de agua en la piscina de la mansión en la que vivía.

Juanma Moreno ha mostrado siempre su firme apoyo a la alcaldesa de Marbella. «El escándalo de su familia es algo separado. Ella no está imputada», ha defendido.

El destrozo planificado de la sanidad pública

Juanma Moreno del PP está desguazando conscientemente la sanidad pública en Andalucía. Como ya dijimos, se trata de la comunidad autónoma donde más días hay que aguardar para ser intervenido en una operación quirúrgica y para ser atendido en la atención primaria. En la provincia de Málaga, por ejemplo, las listas de espera se han disparado y 240 mil pacientes aguardan una operación o consulta. Mientras, los asegurados de la sanidad privada en Málaga se han duplicado y llegan ya al medio millón. El 40% de médicos andaluces del sistema público trabaja también en el concierto de hospitales privados y ello se ha incentivado por parte de las instituciones del PP. Este destrozo orquestado de lo público beneficia a los seguros y las clínicas privadas, que abusan de un sistema de contratación sin fiscalización hecho para la corrupción.

En verano de 2025, mientras la Junta de Andalucía cerraba la atención primaria por las tardes y con más de diez mil camas inoperativas en hospitales, Juanma Moreno facilitó el mayor pelotazo de la historia en la sanidad andaluza con 533 millones de euros a 38 empresas sanitarias para derivar las operaciones quirúrgicas a conglomerados privados como Quirón, Vithas, Ribera Salud, HLA…

Mientras toda esta fórmula de privatización diabólica se materializaba con sanitarios precarizados, el Gobierno de Juanma Moreno apuesta como remedio por la entrada de nazarenos en los hospitales públicos. En Cádiz entró en verano un paso de Semana Santa por primera vez en el Hospital Puerta del Mar. «El nazareno de Cádiz lleva la fe al hospital. Emotiva visita al centro hospitalario, proliferado las lágrimas y los rezos. Un gentío esperaba en el exterior del hospital para no perderse una estampa para la posteridad […]. Hubo lágrimas y rezos de quienes pedían al Señor salud para los suyos, hospitalizados en estas fechas», publicó el Diario de Cádiz[15].

El proceso de deterioro de la sanidad andaluza venía de largo, de ello daban cuenta las manifestaciones de las Mareas Blancas contra los recortes sanitarios en 2017, con más de 100 mil andaluces echados a las calles en defensa de la sanidad pública cuando

gobernaba Susana Díaz.

Si el PSOE abrió la puerta a los recortes, el PP de Juanma Moreno se embarcó en un proceso de desmantelamiento total y con extorsión a los que se rebelaran. Antonio Vergara, portavoz de la Mareas Blancas de Cádiz, fue denunciado por el SAS (Servicio Andaluz de Salud) por protestar. Es un método intimidatorio para meter miedo a las personas que luchan y defienden la sanidad pública. Acabó siendo absuelto, pero esto también es lawfare para disciplinar.

Miguel Ángel Guzmán fue viceconsejero de Salud en la Junta. Tuvo que dimitir junto con el gerente del SAS, Diego Vargas, por las listas de espera con más de un millón de andaluces para una primera consulta con un especialista. A los tres meses de dejar el cargo, en una puerta giratoria, Guzmán fichó como director médico por la aseguradora privada Asisa, a la que adjudicó un contrato de 44 millones de euros. Había sido también director gerente del SAS hasta julio de 2022 y posteriormente fue ascendido y ocupó el cargo de viceconsejero. Pero para ese fichaje por Asisa no se tuvo en cuenta la Ley de Incompatibilidades, pues la Junta de Andalucía –que lo autorizó, pero solo a partir del mes de agosto– establecía que hay «un periodo mínimo de dos años en los que no se puede trabajar en empresas con las que haya tenido relación en el ejercicio de sus funciones». El informe de la Inspección General de Servicio sobre su contratación consideró que «la incompatibilidad estaría motivada por los 14 contratos que desde el Servicio Andaluz de Salud se firmaron con las entidades vinculadas al grupo de la empresa aseguradora entre noviembre de 2019 y junio de 2022».

En noviembre de 2025 fue nombrado viceconsejero de Sanidad Nicolás Navarro, que había sido jefe del grupo Asisa y del Hospital HLA Inmaculada en la sanidad privada. Navarro, de clara ideología reaccionaria, menospreció a las víctimas de la masacre fascista de La Desbandá en febrero de 1937. Escribió un post en redes sociales quejándose de que hicieran un documental en TVE sobre ello.

En la misma vertiente ideológica, María Jesús Botella, antiabortista, hermana de Ana Botella y cuñada de Aznar, fue nombrada delegada de Sanidad en Córdoba. Calificó como «faltas de respeto» las manifestaciones contra las privatizaciones y el desmantelamiento de

la sanidad pública. Moreno Bonilla puso la salud de las cordobesas en sus manos y en su mandato se están permitiendo rezos antiaborto a las puertas de las clínicas en Córdoba.

Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento andaluz, ocupó el puesto de consejero de Salud en el primer Gobierno de Juanma Moreno, y cargó contra el aborto: «Lo fácil es llegar y el chupetón, ¿quién defiende a los no nacidos?», se refirió sobre el procedimiento de interrupción del embarazo y defendió el uso de los latidos fetales. Aguirre dirigió la sanidad en pandemia y admitió que habían desperdiciado el 20% de la vacuna de Pfizer porque no compraron las jeringuillas adecuadas. A este porcentaje sobrante lo llamó «culillo». Como presidente del Parlamento pidió subir las dietas a los diputados porque «les costaba llegar a fin de mes por la subida de los hoteles».

A unos meses de las elecciones andaluzas de 2026 y después de demostrarse la responsabilidad del Gobierno de Juanma Moreno en el fallo del cribado del cáncer de mama en Andalucía, el consejero de Salud del PP Antonio Sanz firmaba el acta de nombramiento de la Virgen del Socorro como la patrona de las emergencias sanitarias, encomendándose a los milagros para curar a las andaluzas con una sanidad desguazada. Al día siguiente moría una joven sevillana que reclamaba 400 mil euros a la Junta: el SAS le había diagnosticado estrés y problemas cervicales sin hacerle las pruebas adecuadas, cuando en realidad tenía un tumor cerebral. Acudió en ocho ocasiones al centro de salud.

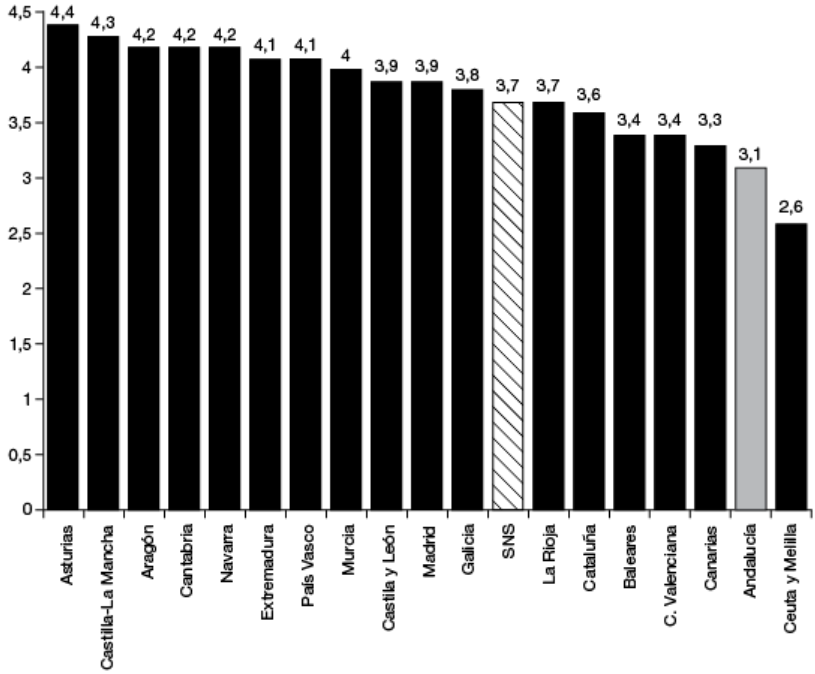
Antes de la pandemia del covid, en Andalucía hubo un terrible brote de listeriosis. El gerente del SAS junto con Aguirre, Miguel Moreno Verdugo, acudió a una corrida de toros en mitad de la alerta sanitaria. Había en ese momento 71 intoxicados, fallecieron dos personas y hubo varios abortos no deseados. Moreno Verdugo duró tan solo diez meses en el cargo, y le siguieron Guzmán y Vargas.

Actualmente el cargo de directora gerente lo ocupa Valle García. Se sentó en el banquillo como investigada por el escándalo de contratos a dedo a clínicas privadas. Sin embargo, la causa quedó provisionalmente archivada en el Juzgado de Instrucción de Sevilla. El caso sigue abierto en el Juzgado de Instrucción de Cádiz y siguen

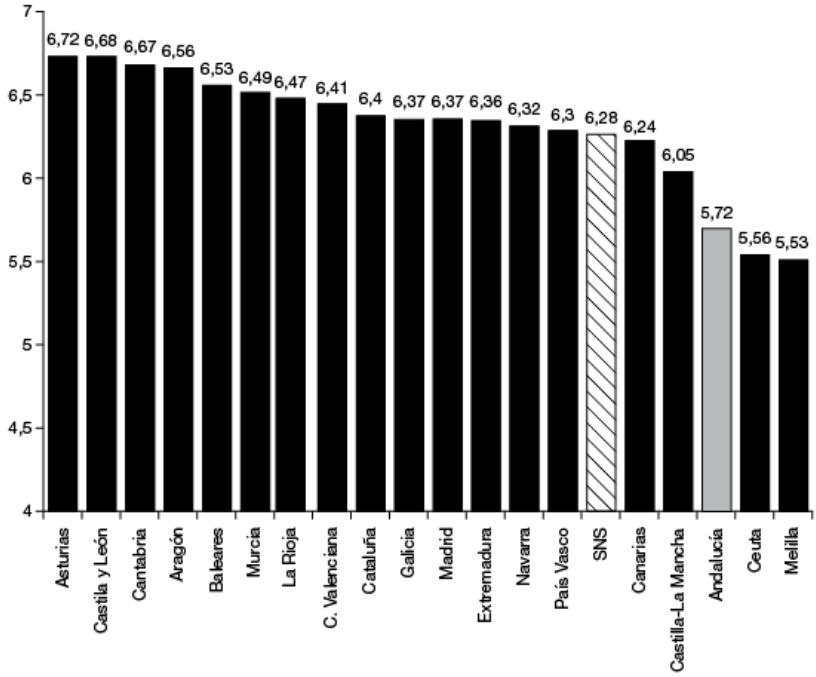
investigados Sebastián Quintero, exgerente del Hospital Puerta del Mar, y Demetrio González, director económico del SAS en Cádiz. Se investiga un fraude de 235 millones de euros. Todas las órdenes venían desde arriba. La Junta de Andalucía destituyó a la interventora María Antonia González, que presentó el demoledor informe que alertaba del fraccionamiento en los contratos millonarios del SAS adjudicados a clínicas privadas con contratos de emergencia y menores a dedo. El Gobierno de Bonilla explicó que no se trataba de una destitución, sino de un cese a petición propia por motivos personales.

Andalucía cuenta con una de las peores ratios de profesionales de medicina por cada mil habitantes de toda España, la comunidad autónoma por la cola y solo superada por las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. Según el último informe sobre la situación de la sanidad pública andaluza elaborado por los sindicatos CCOO, UGT, SATSE, CSIF y la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, Andalucía necesita 18 mil profesionales más para igualar la media estatal, después del despido de ocho mil sanitarios tras la pandemia por la Junta de Andalucía de Juanma Moreno.

El sistema sanitario andaluz sufre un periodo de degradación máxima y por ello la valoración de los andaluces sobre el funcionamiento de su sanidad pública, al ser preguntados en el año 2024, fue la más baja de entre todas las comunidades autónomas. Desde que Juanma Moreno fue investido en 2019 como presidente de la Junta de Andalucía se ha intensificado el modelo de colaboración sanitaria público-privada, que no es más que un eufemismo del certificado de defunción de la sanidad pública en beneficio de los negocios privados.

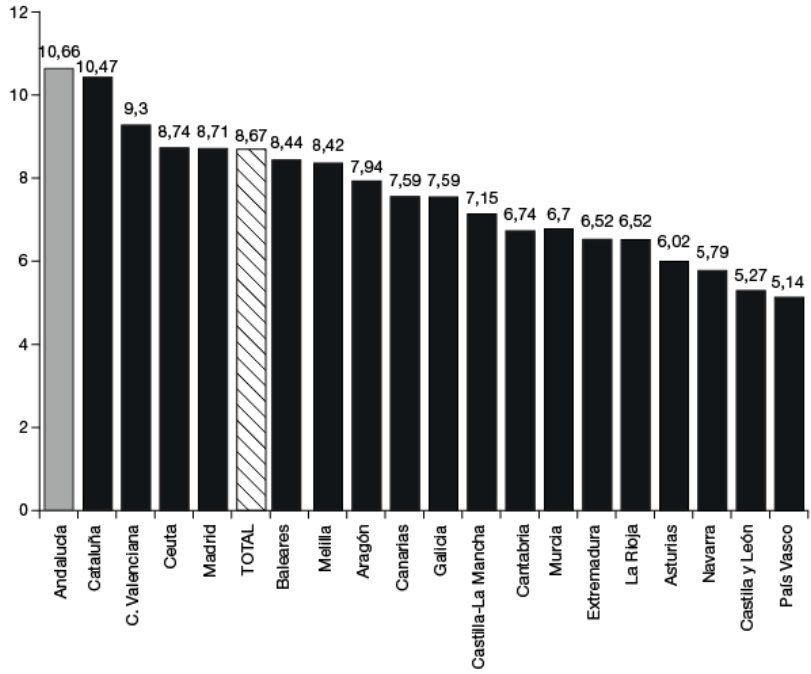


Profesionales de la medicina por cada mil habitantes. Fuente: informe de CCOO, UGT, SATSE, CSIF y Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.



Nivel de satisfacción con el funcionamiento de la sanidad pública en 2024.Fuente: informe de CCOO, UGT, SATSE, CSIF y Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.

La Andalucía del PP de Juanma Moreno lidera la demora asistencial para una cita médica en la sanidad pública de toda España y supera los diez días debido a la infrafinanciación. La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas ha calificado la situación de momento «crítico» y ha alertado de que «la atención primaria ha dejado de ser accesible en Andalucía y se han eliminado sus funciones de promoción de la salud de la comunidad y prevención de sus enfermedades».



Demora media para una cita médica en AP.

Fuente: informe de CCOO, UGT, SATSE, CSIF y Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.

La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas logró presentar más de 57 mil firmas contra este modelo de sanidad de Juanma Moreno, que califica de «estrategia deliberada de privatización». El descontento ante la situación en el servicio sanitario público andaluz va en aumento. En el último barómetro elaborado antes de las elecciones de 2026 por la consultora GAD3 (cercana al PP), más de la mitad de los encuestados suspendía la gestión sanitaria de Juanma Moreno al frente de la Junta[16].

El escándalo del fallo del cribado en el

cáncer de mama y la lucha de la Amama

Al inicio del curso político, tras el verano de 2025 y después de unas vacaciones en paradero desconocido en mitad de los incendios, Juanma Moreno Bonilla volvía a la actividad parlamentaria. Se las prometía muy felices ante el silencio generalizado sobre la gestión negligente y la privatización de la sanidad en Andalucía, gracias, entre otros factores, a un aparato mediático a pleno funcionamiento con las corridas de toros y las tertulias afines en Canal Sur. El presidente andaluz tenía preparado el inicio de su carrera electoral con las presentaciones de su libro autobiográfico Manual de convivencia, en respuesta al Manual de resistencia del presidente Pedro Sánchez. Pero las apariciones sobre el panfleto quedaron pospuestas y toda su estrategia electoral tuvo que quedar trastocada.

A finales de septiembre de 2025 se destapó el mayor escándalo acontecido en la sanidad pública en Andalucía con el fallo en el sistema del cribado del cáncer de mama, denunciado por la asociación de mujeres afectadas: la Amama. Un gravísimo fallo que afectó a más de dos mil mujeres, según datos oficiales, que no fueron informadas a tiempo sobre mamografías dudosas, retrasando los diagnósticos y los tratamientos.

En la nefasta gestión del fallo en el cribado, el presidente Juanma Moreno se despojó de responsabilidades. Al inicio de este suceso que conmovió a toda Andalucía, anunció con frivolidad que no comunicar a las mujeres un posible cáncer se hacía con el pretexto de que, «cuando hay indicio, no se dice nada para no generar ansiedad».

La consejera de Salud Rocío Hernández quiso reducirlo a «tres casos puntuales». Miles de mujeres andaluzas tomaron las calles en defensa de la sanidad pública al grito de «Bonilla dimisión», «Moreno Bonilla, fuera de Sevilla» o «Menos cofradías y más mamografías».

El portavoz parlamentario del PP en Andalucía, Toni Martín, mano

derecha de Juanma Moreno, quiso obviar la importancia que habían tomado las manifestaciones y la onda expansiva que suponían, y todo su Gobierno quedó retratado: «Fracaso absoluto. Menos de cinco mil asistentes, pese a que los ayuntamientos gobernados por la izquierda y los sindicatos han pagado autobuses con dinero público y han movilizado a sus militantes. Andalucía ha dicho "no" a este acto político que solo era un ataque contra Juanma Moreno», expuso el portavoz del PP. Una semana después de las gigantescas manifestaciones en todas las localidades andaluzas, Juanma Moreno anunció la dimisión de la consejera Rocío Hernández, que había manifestado justo antes que no pensaba dimitir «porque sería lo fácil».

En la víspera del Día Mundial del Cáncer de Mama el 19 de octubre, el presidente Moreno realizó una ofrenda floral a la Esperanza de Triana llevada por la Guardia Civil. Pero cuando se trata de acciones políticas, al igual que hiciera el presidente Mañueco con los incendios en Castilla y León, el presidente Moreno Bonilla y su partido votaron en contra de una comisión de investigación sobre este escándalo, rechazando su creación y la indemnización a las víctimas de esa negligencia.

Anabel Cano, miembro de la Amama y afectada por el fallo en el cribado, estuvo en el Parlamento andaluz por la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) de las Mareas Blancas para blindar la sanidad pública. Se aceptó a trámite, pero está paralizada en un cajón. «Estoy muerta en vida. Te voté y me arruinaste la vida», le chilló a Juanma Moreno en el Parlamento de Andalucía. Su grito fue el de todas. «He estado un año con un cáncer. Me han quitado un pecho. ¿Por qué no me llamaron? Quiero que toda España se entere de que estamos abandonadas».

En abril de 2026 la Amama anunció que iba a presentar una denuncia para que la Junta de Andalucía tuviera que indemnizar a Anabel ante el silencio del SAS por su reclamación patrimonial por los fallos en el cribado. Antes, la asociación había denunciado en la Fiscalía un supuesto borrado de historiales médicos por parte de la Junta, pero el fiscal lo archivó al considerar que el sistema dejó de funcionar con normalidad por culpa de la «avalancha de peticiones» de mujeres.

Una investigación del diario El País reveló que se dejó de notificar a las pacientes con mamografías dudosas porque se esperaba que lo hiciera el programa informático nuevo de NTT Data que había subcontratado la Junta de Andalucía[17]. El cambio en el sistema informático sería una de las claves en este fallo del cribado del cáncer de mama. La empresa japonesa NTT Data fue señalada como adjudicataria con un montante de 48 millones de euros por cinco años para gestionar los sistemas de información asistenciales del SAS.

El cargo de presidente de NTT Data en Europa lo había ostentado Eduardo Serra, que comenzó en Defensa en la UCD como subsecretario, siguió con Felipe González como secretario de Estado y fue ministro de Defensa con Aznar. Tras su paso por gobiernos de tres partidos, ha sido uno de los grandes lobistas de venta de armas y ha seguido en grandes negocios como comisionista, en países como Arabia Saudí, bajo el silencio y la complicidad de Rajoy. El exministro fue condenado con una sanción tributaria por usar una sociedad instrumental para canalizar las retribuciones en consejos de administración de grandes empresas[18].

Los periodistas Oriol Güell y Eva Saiz desvelaron en El País que la Junta de Andalucía desoyó todos los avisos en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, epicentro del fallo en el cribado, y que las bajas laborales no se cubrían por los recortes y despidos después de la pandemia. «Entre enero y octubre de 2025, el Hospital Virgen del Rocío dejó de hacer 20.400 ecografías, 12.100 TAC, 10.100 resonancias magnéticas y 6.400 mamografías por los vacíos que dejaban en su plantilla los radiólogos inactivos», detallan en el artículo[19].

Entrevista a Ángela Claverol: «Juanma Moreno ha traicionado a las mujeres andaluzas. Lo único que ha hecho la Junta es insultarnos y maltratarnos»

Ángela Claverol, presidenta de la Amama Sevilla, se ha erigido como una de las voces de la dignidad de las mujeres andaluzas contra la gestión negligente de la Junta de Andalucía en el fallo de las mamografías de detección precoz. Claverol sufrió 42 ciclos de quimioterapia y cinco operaciones, y ha liderado las manifestaciones de la Marea Rosa en Andalucía contra Juanma Moreno. Desveló que hubo reuniones entre los anteriores consejeros y las mujeres afectadas con cáncer de mama y que solo recibieron desprecio. Fueron sometidas al acoso institucional, mientras la Junta de Andalucía ignoraba todos los avisos sobre el colapso en las mamografías y rechazaba crear un plan para evitar todo el fallo de los cribados.

El lema de la asociación es «Las amamitas no se rinden nunca». «Para nosotras es importantísimo pensar que hasta el último día tenemos vida. Hemos vivido un montón de personas con muchísima quimioterapia, a punto de no resistir, con muchas recaídas, de pensar que se morían. Y luego, pues gracias a los tratamientos, remontan. Entonces, para nosotras, no nos rendimos nunca y defendemos la sanidad pública con uñas y dientes. Significa que hasta el último día hay esperanza, hasta el último día hay vida para seguir luchando», explica.

La Amama llevaba desde el año 2021 alertando y hablando del tema de los fallos en el protocolo de los cribados. Los primeros encuentros con el exconsejero de Salud Jesús Aguirre comenzaron con acoso institucional e insultos.

Cuando llegó la pandemia dejaron de dar muchas quimioterapias. Entonces, nosotras veíamos cómo nuestras compañeras, las metastásicas, cada vez iban peor. Y entonces dijimos que no estaban dando las quimioterapias porque no había un pasillo seguro. Y que la culpa la tenía la Junta de Andalucía [al] no hacer pasillos seguros para las mujeres que se daban las quimioterapias. Y él salió al paso diciendo que no, que en la Amama éramos unas «miedicas». Y nosotras respondimos que el miedica era él, porque una mujer que se enfrentó a un cáncer puede ser muchas cosas menos miedica. Al

final conseguimos en Sevilla que el Hospital Macarena pusiera el Hospital de Día en un lateral, con una entrada única y exclusiva, y que en el Virgen del Rocío se hiciera un pasillo seguro para poder darnos las quimioterapias. En todo este tiempo la Junta de Andalucía, cada vez que hemos alzado la voz y hemos dicho algo, que teníamos toda la legitimidad y las pruebas, lo único que ha hecho es maltratarnos e insultarnos.

Con las consejeras andaluzas Catalina García y Rocío Hernández, que acusó de alarmismo a la Amama y dijo que el fallo de los cribados eran «tres casos puntuales», siguió todo igual que con el exconsejero Aguirre.

Catalina García nos trató muy educadamente, pero no hizo nada de nada. Y Rocío Hernández nos trató fatal. Rocío fue terrible, nos trató con un desprecio bestial. Al principio Moreno Bonilla mentía y decía que eran tres casos puntuales. Cuando nosotras fuimos a hablar con ella íbamos hasta con cuatro chicas afectadas del cribado y ella seguía diciendo que eran tres. Y además las llamó «casos» delante de las afectadas. Ellas mismas le respondieron a la consejera que no le permitían que fueran llamadas «caso», que estaban ahí, que tienen una familia y que son personas.

El actual consejero de Presidencia y Salud, Antonio Sanz, señaló a la asociación y pidió que dejara de lanzar infundios. Claverol fue una de las que se reunió con el número dos de Juanma Moreno.

Sanz del PP es un prepotente y un soberbio de mucho cuidado. Yo le dije en su día, cuando tuvimos la reunión, «tenga usted cuidado, no vaya a ser otro consejero al que destituyen». Y me dijo: «Señora, a mí no me va a echar nadie nunca. Llevo en esto de la política desde los catorce años». Y yo también le dije que a mí tampoco me va a echar nadie de paciente oncológica. Nos dijo que le dejáramos

trabajar que tenía que arreglar esto. La reunión no sirvió para absolutamente nada, más allá de querer comprarnos con una subvención. Me pareció de lo más patético. El PP es una red clientelar para ganar las elecciones. Si a mí Antonio Sanz me habló de una subvención, ¿qué está intentando hacer? Comprarme, ¿no? No nos engañemos, tienen una red clientelar bestial, están comprando votos a base de favores. Y lo malo es que los andaluces no nos damos cuenta de eso. A mí me da igual el partido al que votéis, desde luego a la derecha no. Quiero una sanidad pública, cualquier enfermo crónico en Andalucía está abocado a la sanidad pública. En los seguros privados no nos van a querer. ¿Y tenemos dinero para pagar eso? Porque, que yo sepa, la mayoría de los andaluces somos entre pobres y medio pobres. Esto es eso, un partido clientelar que compra votos a base de favores y privatizaciones. No hay más. Y detrás están las grandes empresas multinacionales de sanidad, que son muy potentes. Compran los votos. Y si eso somos capaz de verlo personas como yo, que no tenemos carrera, que no tenemos nada, que no hemos podido estudiar, que somos gente normal y corriente de la sociedad civil, ¿cómo no son capaces de verlo los demás? Hay un grave problema que es votar a alguien por las campañas televisivas. Tenemos una gran ignorancia política. Pero te repito, es vomitivo estar con Antonio Sanz, y encima va de víctima y nos dijo que él también lo era porque era cojo. Se comparó con una paciente de cáncer. Se victimiza un tío que toda su vida ha vivido de paguitas. No se le conoce otro trabajo. ¿Cómo puede gobernarnos alguien que no tiene ni idea ni experiencia de nada?

Todo hace indicar que la responsabilidad política última en este caso recae en el presidente Juanma Moreno. Y cada vez ha apostado más por acallar las críticas con campañas de marketing y propaganda, pero a las miembros de la Amama no las engaña. Ángela Claverol manifiesta:

Hay que entender que tiene 28 millones de euros para comprar los medios de comunicación. Entonces, yo siempre digo que la Amama, sin un solo duro invertido en publicidad, ha conseguido doblar el

brazo a la Junta por lo que está haciendo en Andalucía con las mujeres del cribado y con las y los pacientes oncológicos. No solo es cáncer de mama, esto es una cuestión generalizada. Cualquier paciente oncológico sabe cómo está el tema. Con lo cual, ¿cómo lo veo? Pues como un suavón. Es el típico lobo vestidito con carita de cordero. No puedo aguantar lo del postureo y las posecitas y fotografías. Lloró por Adamuz y dice que lo pasó fatal con el tema de las inclemencias meteorológicas, y nosotras también. Pero ni una lágrima para las del cribado, ni una, que eso sí era su responsabilidad. Su gestión no solo es negligente, es más que eso, es patética. Ha abandonado a las mujeres a su suerte, por no hacerles una puñetera ecografía, y ha valorado la vida de las afectadas en 80 euros. ¿Eso es lo que vale la vida de una mujer en Andalucía? Lo que le hubiera costado, 80 euros, es lo que vale una ecografía en el sistema, en el SAS. Ha demostrado una increíble falta de humanidad y de responsabilidad. A él le basta con decir que no se enteraba de nada; pues, como dijimos, a nosotras no nos vale que no se entere de nada, porque tú no puedes estar al frente de un gobierno y no enterarte de nada. Y luego tiene la desvergüenza de culpar a los profesionales sanitarios y a nosotras.

La Amama cree que puede vencer judicialmente a la Junta de Andalucía; tiene esperanza de que el PP de Juanma Moreno tenga que responsabilizarse por el daño causado a las mujeres y que haya condenas. Su portavoz lo explica:

Esperamos que paguen y que lo haga alguien. Nuestro abogado está saturado con el tema. Lleva 154 reclamaciones patrimoniales presentadas en el SAS. Y Juanma Moreno vuelve a hacer lo mismo con nosotras: el desprecio. No han contestado a ninguna. Está revictimizando aún más a sus propias víctimas. Por lo menos pagadles el daño que les habéis hecho, por ley. Que ellas no quieren ni el dinero. Lo que quieren es que quede constancia, que quede constancia de todo el daño que han sufrido. Hay un montón de metastásicas, que es un problema gravísimo, y que el recorrido de esas mujeres va a ser demasiado complicado.

Y además luego se libran penalmente. Lo mismo que ha pasado hasta el momento con Mazón. Si ese hombre no va a pagar, pues imagínate. Quitaría ya el aforamiento, de Juanma Moreno y del que se ha aprovechado Mazón.

El escándalo sanitario en Andalucía de repente despareció de las principales parrillas informativas.

Lo que mejor saben hacer es la manipulación. Tienen muchos millones de euros para lavarle la cara al presidente Juanma Moreno. Yo creo, sinceramente, que han presionado por ocultar el tema. Porque, además, a este hombre, por no llamarle un apelativo malo, lo único que le interesa es el poder y seguir mandando el máximo de tiempo posible. ¿Y si una del cribado hubiera sido su hija, o su mujer, o su madre? ¿Hubiera cambiado la cosa? ¿Cómo puede ser alguien tan insensible? ¿Cómo puede perder la ética y la moral? Es increíble, vamos. ¿El poder corrompe tanto? Este hombre yo creo que debería quitarse de la política. Si me pasara algo así, yo creo que me hundiría en una depresión profunda. No me extraña que esté deprimido y vaya al psicólogo. Claro que él no tiene que esperar los seis meses que se espera en el SAS. Él con pagárselo lo tiene todo hecho. Moreno Bonilla es el poder por el poder. Pone carita de suavón y va jodiendo todo a su paso. Mientras, nos siguen llegando más casos del fallo del cribado en la Andalucía de pueblecitos rurales.

Claverol también denuncia censura informativa en Canal Sur:

Nos hemos dado cuenta de que no sacan casi nada. Hay algunos profesionales que sí que son dignos. Pero los que mandan… Los trabajadores nos enviaron una carta de apoyo. Ten en cuenta que ellos, los del PP, ponen a dedo y quitan a dedo a los dirigentes. No señalamos a los trabajadores, señalamos a los de arriba. ¿Qué más

pueden hacer los periodistas dignos que quedan?, ¿perder el trabajo? Y es que es increíble que dediquen más tiempo a los toros que al cribado. El Día Internacional del Cáncer de Mama, Antonio Sanz, consejero de Salud, estaba en los toros. Lo consideran un chiringuito. Y además piensan, desde ahí arriba, que el resto se joda. Nosotros hacemos una buena campañita y todas estas que se jodan. Y a seguir mintiendo. Ellos consideran que la política no es para el pueblo. La política es para ellos y para los que viven de la política. Y así estamos vendidas.

El presidente andaluz dijo que se había sido injusto con él y que el caso del cribado le había hecho perder electoralmente unos puntos según los trackings, pero que ya los había recuperado. «Es la desvergüenza más absoluta. Nos produce una indignación y una frustración terrible por su traición. Porque, no se nos olvide, ha traicionado a las mujeres andaluzas. Y espero que nunca se le olvide a ninguna mujer andaluza todo esto», denuncia Claverol de la Amama.

La asociación cuestiona los datos oficiales ofrecidos por la Junta de Andalucía del PP:

Son mentiras. Sabemos que son mentiras. De las 2.317, cuando él dijo que todo ya había terminado, dijimos: ¿a cuántas habéis llamado? Sabemos que debe haber miles de mujeres. Nosotras lo calculamos en cuatro mil. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Mientras él dice que son solo 2.317 y 23 han desarrollado cáncer, hoy hay 154 de estas [reclamaciones] presentadas de responsabilidad patrimonial. Es una burrada. Esto ha sido una catástrofe y una hecatombe. Lo que pasa es que ellos tienen el dinero y los medios. Y las mujeres para él no somos importantes, porque lo ha demostrado. Estamos totalmente seguras, porque estamos hablando del cribado cuando llega a nosotras, las pacientes oncológicas, pero ya se ha cargado toda la sanidad pública. Yo misma tengo a mi madre ocho meses esperando para el neurólogo. Y que tú tendrás familia y más de lo mismo. Ha reventado la sanidad por dentro. El miedo que tenemos es que yo creo que el

sistema sanitario en su conjunto no aguanta otra legislatura con él.

Claverol considera que la privatización de la sanidad tiene grandes implicaciones en este fallo del cribado:

El PP tiene un clientelismo bestial. Para poder estar ahí le están dando dinero a manos llenas y están privatizando la sanidad a conciencia. Yo imagino que este hombre se está haciendo la cama [sic] por si alguna vez no sale elegido poder irse a un Quirón, a un Asisa… Lo que han hecho en la sanidad es ir privatizando y privatizando y perder el control de todo. Juanma Moreno, que no fue capaz de acabar una carrera para la que no hay que ser Einstein, ha hecho un clientelismo bestial. Solo tienes que ver que su mujer está en Bidafarma. ¿En qué momento el PP, en qué fatídico momento, entendió que iba a gobernar vendiendo favores?

Desde la Amama abogan por un cambio en el sistema sanitario contra las privatizaciones del PP:

Hay unas leyes que son de privatización, que no se cambian. Es que eso tendría que estar legislado. A lo mejor si fuera 100% pública, sin visos de privatización, a lo mejor lo conseguiríamos. Pero es que tienen que cambiar las leyes. Por ejemplo, el PP votó que sí a la ILP de las Mareas Blancas, pero no la ha llevado a trámite, solo querían hacerse la fotito. Con los 28 millones de euros de publicidad de los que dispone el PP de Juanma Moreno se tapan muchas cosas. Ojalá hubiéramos tenido nosotras 28 millones para poder hacer campaña y llegar a todos los rincones de Andalucía. Visitamos lo máximo que podemos todos los pueblos y creamos conciencia sobre la sanidad pública, junto a las Mareas Blancas. Y yo se lo he dicho a otros partidos políticos: si ganáis vosotros, vamos a ser las mismas, y vamos a ser el peor castigo para un partido político. Hay que cambiar el sistema, porque el que hay no funciona tal como está.

Porque podemos meternos todo lo que queramos con el PP y con Vox, pero lo que hay que hacer es cambiarlo todo para que esto no vuelva a ocurrir.

Las miembros de la Amama han sufrido acoso por esta lucha por la sanidad y la dignidad de las mujeres andaluzas:

Nos han amenazado y han vandalizado la sede, y hasta un tipo dijo que quería quemarnos vivas dentro de la sede. Hemos llorado lo más grande por todo lo que ha pasado y por todo lo que nos han hecho. Yo misma tengo el coche totalmente rayado. Parece que los partidos de derechas creen que las mujeres tenemos que estar calladitas. Y cuando no nos callamos, nos intentan amenazar. Y después de pasar un proceso de cáncer, cuando nos dicen, coño, ¿no tenéis miedo? Digo, pues mira, no, lo que me da miedo de verdad es el cáncer. Me da miedo la enfermedad en mi familia y en las personas que quiero. Los papanatas de derechas no me van a dar miedo. Yo no entiendo que una mujer andaluza no lo vea o lo tolere. ¿No están viendo que van en contra de ellas? Mientras estás callada no pasa nada. Pero si levantas la voz… Cualquier mujer que levante la voz, ¿qué pasa? Que consideran que somos menos, que pensamos menos y que somos más tontas.

---

[1] C. López, «Juanma Moreno se estrenó también como diputado andaluz en 1997 mintiendo en su currículum con la falsa "licenciatura en ADE"», Espacio Andaluz, 29 de julio de 2025, disponible en: [https://espacioandaluz.com/andalucia/juanma-moreno-diputado-andaluz-1997-mintiendo-curriculum-licenciatura-en-ade/].

[2] C. Breña, «Los dependientes se hartan de las acusaciones de fraude del gobierno», El País, 1 de febrero de 2013.

[3] E. Saiz, «La dependencia colapsa en Andalucía», El País, 11 de octubre de 2014.

[4] N. Caballero, «La defensa de Bárcenas a Moreno Bonilla: “Es un chico estupendo”», El Plural, 27 de diciembre de 2018, disponible en: [https://www.elplural.com/politica/moreno-bonilla-financiacion-irregular-partido-popular-luis-barcenas_208686102].

[5] S. Blanco, «Andalucía concede, sin concurso, la distribución de las vacunas contra el covid-19 a Bidafarma», ConSalud, 16 de diciembre de 2020, disponible en: [https://www.consalud.es/autonomias/andalucia/andalucia-concede-concurso-distribucion-vacunas-covid-19-bidafarma.html].

[6] E. Saiz, «La hermana del presidente de la Junta andaluza obtiene una plaza pública con menos puntos que otra aspirante», El País, 14 de agosto de 2019, disponible en: [https://elpais.com/politica/2019/08/12/actualidad/1565626563_327200.html].

[7] Radio Sevilla, «La Oficina Antifraude confirma irregularidades en la adjudicación de la Junta de un contrato menor a una empresa de José Manuel Soto», Cadena SER, 5 de febrero de 2025.

[8] J. Velasco, «El organismo asesor de la Unesco advirtió sobre el almacenaje de enseres y maquinaria en el interior de la Mezquita de Córdoba», Cordópolis de elDiario.es, 12 de agosto de 2025, disponible en: [https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/local/icomos-advirtio-primavera-almacenaje-enseres-maquinaria-interior-mezquita-cordoba_1_12529790.html].

[9] El Observador, «CCOO denuncia la presencia de Teo León Gross, que no pertenece a la plantilla de la RTVA, en el Especial Informativo sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en Moncloa, como “Intrusismo Laboral en los Informativos de Canal Sur”», 3 de mayo de 2024, disponible en: [https://www.revistaelobservador.com/opinion/50-redaccion/19623-ccoo-denuncia-la-presencia-de-teo-leon-gross-que-no-pertenece-a-la-plantilla-de-la-rtva-en-el-especial-informativo-sobre-la-comparecencia-de-pedro-sanchez-en-moncloa-como-intrusismo-laboral-en-los-informativos-de-canal-sur].

[10] M. Ondarra, «Los trabajadores de Canal Sur piden el cese del “dircom” de Vox por “incompatibilidad”», The Objetive, 8 de marzo de 2026, disponible en: [https://theobjective.com/espana/

politica/2026-03-08/trabajadores-canal-sur-dircom-vox-incompatibilidad/].

[11] Espacio Andaluz, «De asesor del equipo de Juanma Moreno a presentador en Canal Sur en días y a “dedazo”: el debut de José Antonio Rodríguez en los informativos andaluces», La Mar de Onuba (11 de marzo de 2026), disponible en: [https://revista.lamardeonuba.es/jose-antonio-rodriguez-canal-sur-asesor-moreno-bonilla-presentador/].

[12] E. Gómez, «La fiscalía pide 18 años de cárcel por narcotráfico y blanqueo para el hijastro de la alcaldesa de Marbella», El Mundo, 26 de junio de 2025.

[13] P. Águeda, «El hijastro de la alcaldesa de Marbella, procesado por narcotráfico: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”», elDiario.es, 24 de octubre de 2022, disponible en: [https://www.eldiario.es/politica/hijastro-alcaldesa-marbella-procesado-narcotrafico-ciudad-junta-jodida-andalucia_1_9650392.html].

[14] P. Águeda, «Los audios de Marbella: un concejal advierte al hijastro de Muñoz que aprenda de su padre y no hable por el móvil», elDiario.es, 10 de mayo de 2023, disponible en: [https://web.archive.org/web/20240411055024/https://www.eldiario.es/politica/audios-marbella-concejal-advierte-hijastro-munoz-aprenda-padre-no-hable-movil_1_10193280.html].

[15] Diario de Cádiz, «El nazareno de Cádiz lleva la fe al Hospital Puerta del Mar», 31 de agosto de 2025.

[16] C. López, «Andalucía dice “no” al modelo privatizador en sanidad: más de la mitad de los andaluces (55%) suspenden la gestión sanitaria de la Junta y de Juanma Moreno», Espacio Andaluz, 31 de marzo de 2026, disponible en: [https://espacioandaluz.com/lo-publico/sanidad/andalucia-dice-no-al-modelo-privatizador-en-sanidad-mas-de-la-mitad-de-andaluces-55-suspenden-la-gestion-sanitaria-de-junta-y-juanma-moreno/].

[17] E. Saiz y J. Martín-Arroyo, «Así falló el sistema de avisos de cáncer de mama: se ordenó dejar de notificar a las mujeres porque

“lo haría la nueva empresa”, pero no informaba», El País, 25 de octubre de 2025, disponible en: [https://elpais.com/sociedad/2025-10-25/asi-fallo-el-sistema-de-avisos-del-cribado-de-cancer-de-mama-se-ordeno-no-informar-a-las-mujeres-porque-lo-haria-la-nueva-empresa.html].

[18] El Periódico, «El exministro Serra, presidente de Everis, defraudó a Hacienda más de un millón con una instrumental», 28 de diciembre de 2022, disponible en: [https://www.elperiodico.com/es/politica/20221228/serra-utilizo-instrumental-canalizar-ingresos-everis-defensa-hacienda-118276278].

[19] E. Saiz y O. Güell, «Un Excel con 6.400 mamografías sin hacer por falta de personal: Andalucía ignoró un segundo aviso para frenar la crisis de los cribados», El País, 18 de marzo de 2026.

Tal como va envejeciendo y tal como va cambiando la población, va a llegar un punto en el que será inviable la sanidad tal como está concebida a día de hoy.

De medio millón de cribados que hacemos al año de cáncer de mama, tuvimos un problema con 2.713 personas en una jefatura de servicios que se saltó el protocolo y no informó a las que tenían un diagnóstico no concluyente. Afortunadamente, el 99% no tenía lesiones tumorales. Me sentí injustamente tratado. Hice de libro lo que había que hacer: pedir perdón, solucionar el problema y asumir responsabilidades. Haciendo todo lo que supuestamente es lo correcto en una crisis, todo el mundo me dio leches. Fue un mes que lo pasé mal. Y nos hizo daño. Nosotros bajamos seis puntos en ese mes en el tracking electoral.

Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía

CAPÍTULO V

INCENDIOS Y OTROS CASOS DE irresponsabilidad Y MUERTES RECIENTES

Mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro. El tipo de territorio ha cambiado, las nuevas modas del ecologismo con los ríos… El ecologismo extremo no es la causa, pero sí uno de los elementos que hay que trabajar. Todos somos responsables del cuidado de los bosques.

Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero del PP que gestionó los incendios en Castilla y León

He traído aquí a diez de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que va a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? Tengo un primo que es catedrático de Física en la Universidad de Sevilla y me dice: «Mariano, no convirtamos este asunto en el gran problema mundial».

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno

¿Tu barrio es seguro? Podremos salir por el barrio con la seguridad de no ser acosados o atracados. Aquí no tenemos campamentos de gitanos como en Francia, aquí la situación es aún peor, están

repartidos por los barrios, haciendo la vida imposible a los vecinos y, encima, cuando nos quejamos, nos atacan y nos tachan de racistas. O aceptan nuestros valores, o que se vuelvan por donde han venido.

Frases de una campaña electoral de Xavier García Albiol, cuyo lema fue «Limpiando Badalona»

La gestión forestal del negacionismo climático

El 65% de los votantes del PP piensa que el cambio climático es real y tres de cada cuatro españoles valoran como algo necesario un pacto de Estado climático, según los datos del CIS[1]. Pese a esta preocupación por la crisis climática, los dirigentes del PP –partido heredero del negacionismo que encabezaron José María Aznar o Mariano Rajoy antes de la aparición de la ultraderecha de Vox– han cuestionado el calentamiento global.

El PP ha mantenido vínculos estrechos con el lobby de las grandes empresas contaminantes posicionándose en contra de los impuestos a las energéticas, incluso redactando leyes a la carta, como hemos explicado en el Capítulo 1 con las gasísticas y el exministro Montoro, y también con la puerta giratoria de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en el consejo de Moeve (Cepsa).

Aznar ha adoptado una de las posturas más beligerantes contra el ecologismo poniendo en duda la evidencia del cambio climático. «Es una nueva religión que condena a la hoguera a los que la ponen en duda. Los abanderados del apocalipsis climático quieren restringir la libertad bajo una apariencia noble, como hicieron los comunistas. No sé si hay un cambio climático en el que es determinante la acción del hombre. En cualquier caso, es un problema que quizá, o quizá no, tendrán nuestros tataranietos»,

cargó el expresidente.

En el verano de 2025 se produjo uno de los peores escenarios en materia de incendios forestales sufridos en Castilla y León, con la muerte de cinco personas, entre ellas dos bomberos forestales y un voluntario en las tareas de extinción. Durante el periodo estival la comunidad registró 23 grandes fuegos forestales en las provincias de León, Ávila, Zamora, Palencia y Salamanca. Cuando se iniciaron los fuegos, el presidente Mañueco estuvo desaparecido y tardó en regresar de sus vacaciones en Cádiz, sin desplazarse a las zonas afectadas en las primeras horas de la crisis. Además de encontrarse fuera, según denunciaron los bomberos forestales, Mañueco era responsable de no haber invertido en invierno en prevención para que eso no ocurriera con tanta virulencia en verano.

Todas las querellas contra el gobierno del PP de Castilla y León fueron rechazadas. El presidente Mañueco tumbó la comisión de investigación con apoyo de Vox, benefició a los cazadores en zonas quemadas, autorizó excepciones para esta actividad y dio ayudas económicas directas a los dueños de cotos de caza.

El negacionismo tiene un gran impacto en los servicios de prevención de incendios y en su privatización. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, había aparecido relacionado en la trama de corrupción del caso Enredadera y fue grabado ofreciendo la adjudicación de una obra sin concurso. Se le podía escuchar diciendo: «la administración soy yo». En la gestión forestal había privatizado parte de los recursos contra incendios y fue señalado por los trabajadores forestales por las malas condiciones laborales y la falta de medios efectivos. Una de sus medidas estrella habían sido las oficinas antiokupación, con apenas consultas y que se demostraron un fracaso.

En 2018 Quiñones dijo que la culpa de la dificultad en la gestión de los incendios era de los ecologistas y que suponía un despilfarro mantener un operativo antincendios durante todo el año. Los bomberos forestales tomaron las puertas de las Cortes en verano de 2025 exigiendo su dimisión, que nunca llegó. Pero en las elecciones de 2026 Quiñones pasó de haber liderado la lista por León en 2022

a ser sacrificado y considerado amortizado, quedando fuera de la candidatura y en un segundo plano en campaña.

Ecologistas en Acción apoyó la convocatoria contra Quiñones y denunció el negacionismo climático del PP:

Las olas de calor estaban anunciadas y los informes técnicos reclamaban acciones urgentes desde hace años. La ola de incendios ha puesto de manifiesto algo que ya se sabía: la Junta de Castilla y León carece de una política medioambiental y de prevención. Son las consecuencias del negacionismo del cambio climático. El fuego ha destapado la ausencia de medios de extinción propios, la precaria situación del operativo de prevención y extinción, la inexistencia de planes específicos, la ausencia de previsiones logísticas en una política de privatización, inacción y enajenación de responsabilidad que ha resultado criminal.

En marzo de 2026, en las elecciones de Castilla y León, el PP de Alfonso Fernández Mañueco creció electoralmente en tres de cada cuatro pueblos afectados por los incendios del verano de 2025 y logró revalidar su victoria mejorando en cuatro puntos su resultado de 2022. La gestión en los incendios no alteró las lealtades conservadoras y el partido de Mañueco mejoró resultados en muchos municipios de las 140 mil hectáreas arrasadas por el fuego.

El presidente del PP es un gran conocedor del funcionamiento del poder en Castilla y León. Lleva desde 1995 en cargos públicos y a los treinta años ya era presidente de la Diputación de Salamanca. Su padre, Marcelo Fernández, fue miembro de Falange, alcalde de Salamanca, procurador en Cortes y gobernador civil en la dictadura de Franco.

En el verano de 2025, Extremadura, otra comunidad gobernada por el PP, sufrió 16 grandes incendios que afectaron a más de tres mil hectáreas. De cara a la galería, la presidenta María Guardiola

entregó la medalla extremeña a los bomberos, mientras que los despedía con el 50% de jornada anual (aunque les había prometido la ampliación de jornada al 100%).

Guardiola fue la primera presidenta que entregó la Consejería de Gestión Forestal a los negacionistas del cambio climático de Vox –de la mano de Ignacio Higuero, que había sido sancionado por incumplir con una infracción grave la Ley de Caza y que impuso la caza y los toros en las escuelas extremeñas–. En agosto de 2025, Higuero tuvo que dimitir por haber falseado todo su currículum. «El ecologismo radical y la agenda climática inundan toda Europa. Para mejorar la vida de los agricultores y ganaderos hay que hacer que el ecologismo no prevalezca sobre la agricultura», se había lamentado el exconsejero en su discurso de populismo antiecologista.

Incendio en discotecas de Murcia

El presidente López Miras del PP tumbó con el apoyo de Vox la comisión de investigación sobre el incendio de octubre en las discotecas Teatre y Fonda Milagros. Fallecieron 13 personas, la mayoría migrantes de Nicaragua, Ecuador y Colombia. Estos negocios de ocio nocturno del empresario Inglés Rojo tenían una orden de cese de actividad desde enero de 2022 y operaban sin autorización municipal en un polígono. En la fiesta se usó una máquina de chispas que habría originado el fuego. No hubo alarmas ni luces de emergencia y las salidas de evacuación de las discotecas estaban cerradas con candado. Una de las víctimas mortales, Olga Lucrecia Nieto, trabajaba como camarera en el local sin tener contrato[2].

La jueza que lleva el trágico incendio no ha abierto una investigación a ningún cargo público. El Ayuntamiento de Murcia estaba gobernado por el PP y los heridos y los familiares de las víctimas se sienten olvidados; consideran que la situación irregular de las licencias demuestra que el Ayuntamiento tuvo una responsabilidad directa en los fallecimientos.

Muertes de personas sin hogar en Cádiz

Entre enero y febrero de 2026, en un invierno húmedo y lluvioso, fallecieron cinco personas sin hogar en la ciudad de Cádiz, gobernada con mayoría absoluta por el PP. Murieron Manuel –conocido popularmente como el Worry–, Miguel, Juan Manuel, Jorge y Juan Barrios. Las muertes se produjeron en un lapso de menos de dos meses. El albergue se encontraba cerrado, no existía un plan real para esta problemática y no hubo contratación del servicio SOS Nocturno.

Mientras morían personas sin hogar desamparadas, el Ayuntamiento se gastaba más de un millón de euros en luces navideñas. Cádiz fue la ciudad que más dinero se gastó en estas luces festivas –desbancando a la ciudad de Vigo del populista Abel Caballero– y la única donde se gasta el doble en alumbrado festivo que en el ordinario de todos los días, con calles completamente a oscuras. Cádiz destinó 17 euros por habitante en este alumbrado, un gasto público desorbitante. Por su parte, el alcalde Bruno García del PP acumula más de 18 años viviendo de la política y su primera medida fue subirse el sueldo un 77% y ganar 30 mil euros más que Kichi, exalcalde de Adelante Izquierda Gaditana, que volvió a dar clase en un instituto público después de ocho años de mandato (como había prometido).

Estas muertes de víctimas del sinhogarismo fueron descritas por la oposición como una negligencia causada por un protocolo inhumano para retirar las mantas y los cartones a las personas que duermen al raso debido al albergue cerrado.

En el libro Silencio administrativo[3], la autora Sara Mesa expone toda la crueldad del sistema capitalista y las administraciones públicas contra más de 40 mil personas sin hogar en España y cómo se estigmatiza y prolonga todo el circuito de la pobreza.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía expuso que el

Ayuntamiento había malgastado el dinero en todo tipo de eventos innecesarios de propaganda y acusó al PP de aplicar una «política de hostigamiento y limpieza social» para quitar de en medio a las personas sin hogar, invisibilizarlas y que no molestaran a la vista en una ciudad entregada al turismo masivo con la llegada de cruceros. Los trabajadores de la adjudicataria de infraestructuras verdes y del mantenimiento en Cádiz denunciaron que el Ayuntamiento del PP los obligaba a realizar una persecución de personas sin hogar retirando sus enseres y arrojándolos en el punto limpio. El protocolo de actuación para la limpieza de zonas verdes en lugares donde pernoctan personas sin hogar llevaba aplicándose un año de forma «sistemática, insensible e inhumana», explicó el comité de empresa. «Dos trabajadores de la compañía adjudicataria de jardines tienen que acompañar a los agentes de las tareas de desalojo de los 16 asentamientos donde duermen estas personas sin hogar en la ciudad gaditana», denunció el digital Cádizdirecto[4].

Cáritas criticó con la misma dureza al Ayuntamiento de Cádiz: «Hay insuficiencia de recursos, falta de dispositivos coordinados durante las olas de frío. Una ciudad que aspira a la justicia social no puede permitirse que sus hijos más frágiles mueran en portales, bancos o garajes».

Desalojo de 400 migrantes en Badalona y macrodesahucios

El alcalde Albiol del PP, en las mismas Navidades de 2025 en las que inauguraba el árbol navideño más grande de España, fue denunciado ante la Fiscalía por prevaricación administrativa, desobediencia a la autoridad judicial, discriminación y delito de odio al haber desahuciado a migrantes en Badalona durante ese invierno. «No es contra la inmigración, es una acción contra la okupación ilegal. Me da igual si los okupas son blancos, negros, guapos o feos», manifestó para defenderse de las críticas a este desalojo sin ninguna planificación de atención social ante la

emergencia. La Fiscalía de Barcelona le abrió diligencias por incumplir la orden judicial al no proporcionar ninguna alternativa habitacional a los afectados vulnerables.

García Albiol fue grabado dialogando con los manifestantes ultraderechistas que apoyaban el desalojo y que hasta pedían quemar a los desahuciados. «Os hago una recomendación. No digáis según qué cosas porque lo están grabando todo», señaló[5]. Estas algaradas fascistas impidieron con gritos racistas que una parroquia con ayuda de Cruz Roja y Cáritas acogiera a los migrantes. Meses después, en Semana Santa, Albiol colocó bloques de hormigón donde dormían resguardadas las personas sin hogar como parte de su política de «Limpiando Badalona», eslogan con el que llegó a la alcaldía de la ciudad catalana.

Misma situación se vivió en Collado Villalba (Madrid), uno de los lugares con menos inversión en servicios sociales de toda España, donde el Ayuntamiento del PP de Mariola Vargas dio la orden de desahuciar a cien personas vulnerables de un piso de la Sareb. Desde entonces varias vecinas se quedaron en la calle. Una de ella, Montse, de sesenta y tres años, falleció después de ser desahuciada.

En Andalucía, el 24 de marzo de 2026, un día después del anuncio del adelanto electoral por parte del presidente Juanma Moreno, se inició la precampaña con el desahucio masivo de 62 familias en un bloque de pisos en Manilva (municipio malagueño gobernado por el PP) para un fondo buitre. La CGT denunció que firmaron los contratos de alquiler con opción a compra hasta que apareció el fondo de inversión: «En 2024, sin preaviso ni negociación, el fondo buitre SPV REOCO adquirió la finca en una subasta desierta por apenas 14 mil euros por vivienda y rescindió unilateralmente los contratos. Cuando intentaron seguir abonando los alquileres, se encontraron con que se les había cerrado las cuentas y se les impedía pagar».

En el macrodesahucio se militarizó la zona por parte de la Policía y la Guardia Civil y dejaron a 50 niños sin alternativa habitacional en la calle. Una gran manifestación de los desahuciados, junto con sindicatos de inquilinos, a las puertas del Ayuntamiento de Manilva

hizo que al menos habilitaran el pabellón polideportivo municipal para que pudieran pasar la noche (aunque no contarían con colchones y la cocina del centro permanecería cerrada con llave). Las familias denunciaron que se estaban vulnerando los derechos humanos en esta emergencia. En esencia, cueste las vidas que cueste, el PP prioriza la especulación frente a la protección de las familias vulnerables.

Pasarela sin mantenimiento en Santander

El caso más reciente de negligencia manifiesta ha sido el colapso de la pasarela de El Bocal en Santander, en cuyo Ayuntamiento gobierna actualmente el PP con la alcaldesa Gema Igual desde 2016. Fallecieron seis jóvenes estudiantes de FP, con edades alrededor de los veinte años, que transitaban por una estructura de madera en mal estado, en una falta del mantenimiento preventivo y en un fallo de la alerta previa. Fue durante sus vacaciones en marzo de 2026 y hubo una única superviviente, Ainara Fernández, de diecinueve años. Los demás, Lucía San Martín, Xabier Bayón, Celia Lage, Eunate Hervas, Lluna Vallejo y Elena Sirbu, fallecieron.

El proyecto de la obra costera en Santander fue impulsado en 2013 por el alcalde Íñigo de la Serna del PP, posteriormente ministro de Fomento en el Gobierno de Mariano Rajoy. La adjudicación la obtuvo en el año 2014 la constructora Dragados de Florentino Pérez por el Ministerio de Medio Ambiente (hoy para la Transición Ecológica) con Miguel Arias Cañete. Para ganar el concurso público, la empresa presentó una licitación con una bajada del 50% del presupuesto inicial. La obra se paralizó desde el comienzo por presión vecinal y la protesta de los grupos ecologistas, y se liquidó el contrato con Dragados. En una falta de entendimiento y por dejadez de las administraciones, con los gobiernos del PP y del PSOE implicados, la pasarela quedó en un limbo sin el mantenimiento adecuado.

Antes de la tragedia, la Policía Local dependiente del Ayuntamiento

recibió una llamada de alerta por el estado de la pasarela, pero no se avisó a nadie y no se hizo nada para precintar y señalizarlo. Fue un vecino de la zona el que alertó del problema en la estructura por riesgo de colapso, y lo hizo hasta en dos ocasiones llamando al teléfono de Emergencias del 112[6].

El Ayuntamiento del PP gobernado por Gema Igual limitó la responsabilidad al agente policial. La jueza del caso ha decidido investigar al policía y a los funcionarios de Demarcación de Costas por indicios de negligencia grave.

---

[1] A. Arrilucea, «Los votantes del PP no son negacionistas climáticos pese al freno de las derechas a la política verde», Público, 11 de noviembre de 2025, disponible en: [https://www.publico.es/sociedad/m-ambiente/votantes-pp-son-negacionistas-climaticos-pese-freno-derechas-politica-verde.html].

[2] V. Vadillo, «Una de las víctimas del incendio de las discotecas de Murcia trabajaba en el local sin tener contrato», El País, 17 de mayo de 2024, disponible en: [https://elpais.com/espana/2024-05-17/una-de-las-victimas-del-incendio-de-las-discotecas-de-murcia-trabajaba-en-el-local-sin-tener-contrato.html].

[3] S. Mesa, Silencio administrativo, Barcelona, Anagrama, 2019.

[4] J. Porquicho, «Acusan al ayuntamiento de Cádiz de aplicar un protocolo “inhumano” contra las personas sin hogar», Cádizdirecto, 3 de febrero de 2026, disponible en: [https://www.cadizdirecto.com/cadiz/acusan-al-ayuntamiento-de-cadiz-de-aplicar-un-protocolo-inhumano-contra-las-personas-sin-hogar/].

[5] J. Rodríguez, «Xavier García Albiol (PP): “No digueu segons quines coses, perquè aquí s’està gravant absolutament tot», Directa, 23 de diciembre de 2025, disponible en: [https://directa.cat/xavier-garcia-albiol-pp-no-digueu-segons-quines-coses-perque-aqui-sesta-gravant-absolutament-tot/].

[6] O. Agüero, «Las responsabilidades políticas por la falta de mantenimiento de la pasarela que colapsó en El Bocal de Santander: una “tregua” temporal mientras duró el luto», elDiario.es, 6 de

marzo de 2026, disponible en: [https://www.eldiario.es/cantabria/responsabilidades-politicas-falta-mantenimiento-pasarela-colapso-bocal-santander-tregua-temporal-duro-luto_1_13040554.html].

EPÍLOGO

Hay muchas maneras de matar.

Pueden clavarte un cuchillo en el vientre.

Quitarte el pan.

No curarte de una enfermedad.

Meterte en una mala vivienda.

Empujarte hasta el suicidio.

Torturarte hasta la muerte por medio del trabajo.

Enviarte a la guerra…

Solo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro Estado.

Muchas maneras de matar, Bertolt Brecht

En los últimos tiempos, el PP ha cometido todo tipo de negligencias en los diversos gobiernos autonómicos, como hemos repasado a lo largo de este libro sobre la irresponsabilidad e ineptitud más absoluta de sus dirigentes y la gestión que han llevado a cabo. No se trata de unos casos puntuales y aislados, ha sido una cascada de sucesos sistemática. La presidenta Ayuso de la Comunidad de Madrid y los protocolos en las residencias de mayores; Juanma Moreno y el fallo del cribado del cáncer de mama en Andalucía; Mazón en El Ventorro durante la dana en Valencia; Mañueco y la nefasta gestión negacionista de los incendios… Además, el PP sigue inmerso en diversos casos de corrupción que aún tienen que ser

juzgados, como el fraccionamiento de los contratos del SAS en Andalucía y las comisiones de mascarillas en la Diputación de Almería; la trama del ático pagado por Quirón a la pareja de Ayuso y del que disfruta a título lucrativo; o las comisiones de Montoro en el Ministerio de Hacienda con leyes a medida para las gasísticas. Sin embargo, lejos de sufrir un desgaste electoral, el partido liderado por Feijóo ha aumentado su apoyo en las últimas elecciones y encuestas, a lo que hay que sumar el crecimiento de la extrema derecha de Vox como muleta.

Estamos amenazados por una hegemonía derechista que parece que durará lustros. Convivimos con miles de personas a las que todas estas cuestiones que nos afectan a todos se la traen al pairo, dicho coloquialmente. Sería imposible sin los pseudomedios afines financiados con dinero público, que hacen la propaganda más burda tapando y blanqueando todos estos escándalos con la misma estrategia de mentiras orquestada tras el 11-M. La degradación social ha llegado hasta tal punto que se acepta que la presidenta Ayuso se burle de las víctimas en las residencias de la Comunidad de Madrid y diga que las 7.291 personas ancianas fallecidas «no se iban a salvar en ningún sitio», dando a entender que las muertes eran inevitables y que sus vidas casi que no valían nada.

Este libro surge tras la victoria electoral de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, la última votación antes de las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2027. No se ha escrito con la intención de excusar al actual Gobierno de Pedro Sánchez ni de meter miedo en busca del malmenorismo frente a la derechona. En ningún caso desde el Gobierno central se ha revertido esta lacra del desmantelamiento de lo público. En estas páginas hemos podido leer cómo las élites protegen a sus miembros independientemente del partido político de turno.

Se trata de un ejercicio periodístico para reflexionar y explicar sin ambages y con datos la incompetencia que ya está instaurada y que parece que saldrá reforzada, sus antecedentes franquistas, las tramas corruptas que la posibilitan y las consecuencias del giro a la derecha y del pendulazo reaccionario a nivel global, que también ha llegado a nuestro país.

Hay algo muy podrido dentro del corazón de este sistema

económico que tan bien representa y encarna el Partido Popular; «serviles con los de arriba, tiránicos con los de abajo», que diría Karl Marx. Este libro también es un pequeño homenaje para todas las personas que han fallecido por las fechorías perpetradas bajo gobiernos del PP, que ha destrozado y ha degradado a conciencia los servicios públicos. Los grandes negocios privados se frotan las manos con beneficios récord, mientras las familias obreras lloran por muertes evitables en centros sanitarios, en residencias de mayores, en la dana o en los incendios.

PINCHE AQUÍ

A FONDO

Vivimos tiempos en los que nos sentimos aplastados por tanta información; saturados de noticias en papel, en televisión, en radio, en internet. Elaboradas por los periodistas de forma precipitada para ser los primeros, breves porque saben que no tenemos mucho tiempo para dedicarle, superficiales porque con tantas tecnologías simultáneas ya hemos dejado de concentrarnos. Como resultado, en los temas de actualidad complejos, que necesitan un seguimiento y unos antecedentes, nos sentimos perdidos. Leemos noticias de apenas una columna o un titular y vemos imágenes de veinte segundos, pero no logramos abarcar la cuestión en toda su perspectiva y contexto.

Por ello nace la colección de libros *A Fondo*. Sobre asuntos que todos los días están en los medios, pero que requieren que rompamos el ritmo trepidante que nos imponen para acercarnos con la suficiente perspectiva, extensión y elaboración tranquila. Los profesionales mejor conocedores del caso, en su mayoría periodistas, se encargarán de exponer los temas en un lenguaje accesible, con el contexto y los antecedentes necesarios. El lector descubrirá la información primaria que se perdió en la dinámica de los medios, la profundidad que no permitían los diarios ni la televisión y el rigor que la precipitación del periodismo actual impide.

A Fondo incorpora al ensayo una actualidad desacostumbrada en los libros, y al periodismo, una profundidad y un rigor que estábamos perdiendo.

Pascual Serrano